



**UNIVERSIDAD CATÒLICA ANDRÈS BELLO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
ÁREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL**

EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL EN VENEZUELA

Trabajo Especial de Grado presentado
como requisito parcial para optar al
Grado de Especialista en Derecho
Procesal.

Autor: Abg. Mayra Alejandra Rosales

Asesor: Abg. José Francisco Conte C.

Trujillo, septiembre de 2012

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
ÁREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

APROBACIÓN DEL ASESOR

En mi carácter de Asesor del Trabajo Especial de Grado, presentado por la ciudadana Abogada Mayra Alejandra Rosales, titular de la cédula de identidad N° V-16.651.643, para optar al Grado de Especialista en Derecho Procesal, cuyo título es: **Ejecución del Laudo Arbitral en Venezuela**; considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Trujillo, a los veintitrés (25) días del mes de julio de 2012.

Abg. José Francisco Conte C.
C.I N° 5.759.413

ÍNDICE DE CONTENIDO

APROBACIÓN DEL ASESOR.....	ii
RESUMEN.....	v
INTRODUCCIÓN.....	1

CAPÍTULO I

ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO EN MATERIA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL.....	8
A. Fundamento Constitucional del Arbitraje.....	8
B. Consideraciones especiales a los artículos 26, 253 y 258 de la Constitución Nacional.....	14
C. Contenido de las Leyes vigentes que regulan la ejecución del laudo arbitral.....	26
D. Tratados suscritos y ratificados por Venezuela en materia de ejecución del laudo arbitral.....	57
E. Influencia de la Convención de Nueva York y de la Convención de Panamá en la ejecución del laudo arbitral en Venezuela.....	66

CAPÍTULO II

INFLUENCIA DEL EXEQUÁTUR EN LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS EN VENEZUELA.....	74
A. Que es el Exequátur.....	74
B. Consecuencias de la aplicación del Exequátur en materia de ejecución de los laudos arbitrales.....	81

CAPÍTULO III

RECURSOS PROCEDENTES CONTRA EL LAUDO ARBITRAL.....88

- A. Recurso de Nulidad en la ejecución del laudo arbitral.....88

CAPÍTULO IV

EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL Y DE LA SENTENCIA

JUDICIAL.....111

- A. Principio de la Cosa Juzgada.....111

- B. Ejecución Voluntaria y Ejecución Forzosa.....119

- C. Órgano Competente.....125

- D. Intervención de los Tribunales Ejecutores.....129

CONCLUSIONES.....133

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....140

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
ÁREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL EN VENEZUELA

Autor: Mayra Alejandra Rosales
Asesor: José Francisco Conte C.
Fecha: Septiembre, 2012.

RESUMEN

El presente trabajo, se realiza con el fin de investigar la ejecución del laudo arbitral en Venezuela desde distintos puntos de vista; relacionados con el ordenamiento que le regula la materia, la ejecución de laudos internacionales y extranjeros, el sistema de recursos y la ejecución voluntaria y forzosa del mismo; utilizando el método de investigación documental a nivel descriptivo, que consiste en un estudio monográfico realizado mediante el uso de la técnica de análisis de contenido, la construcción de sistemas de categorías y el instrumento fundamental fue una matriz de análisis de contenido. Investigación que sirve como medio para divulgar los aspectos que envuelven la ejecución de las decisiones arbitrales y que interesa sean conocidos, toda vez que el derecho a ejecutarlo deviene como una manifestación de la tutela efectiva del derecho reconocido en el laudo, y al mismo tiempo constituye herramienta de información para profundizar el tema; advirtiéndose en primer lugar, la necesidad de innovar en el ámbito legislativo a los fines de dictar leyes que versen en la materia; y en segundo lugar, la necesidad de pronunciamiento de la jurisprudencia a los fines de la unificación de los criterios en materia de ejecución de laudos arbitrales.

Descriptores: ejecución, laudo arbitral, laudos extranjeros, recursos.

INTRODUCCIÓN.

Con la entrada en vigencia del Texto Constitucional de 1999, resurge en Venezuela el arbitraje, como parte de los medios alternativos de resolución de conflictos; el cual se orienta a resolver las controversias sometidas de común acuerdo por las partes en el compromiso arbitral, mediante la emisión de una decisión final que se denomina laudo arbitral, pero que materializa el derecho en él reconocido a través de la ejecución de lo decidido, siendo precisamente esta última fase el objeto de la presente investigación.

En Venezuela, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1986 en cuyo texto se contempla la cláusula compromisoria como de obligatorio cumplimiento se abrió una puerta hacia el arbitraje; sin embargo, el mismo había quedado en desuso por su falta de promoción y por lo obsoleto del procedimiento de arbitramiento contemplado hasta el año de 1998, que gracias a la entrada en vigencia de la Ley de Arbitraje Comercial, esta figura fue adquiriendo relevancia, haciéndose plausible en el foro venezolano los arbitrales comerciales, tanto internos como internacionales, y aunque se trate de una ley preconstitucional, no se discute el impacto y la efectividad de la misma.

Al elevarse los medios alternos de justicia a rango constitucional, y en especial el arbitraje, al legislador patrio se le ha impuesto la obligación de promoverlos e implementarlos en los diversos textos legales, a los fines de fomentar un sistema constitucional y legal cónsono con la voluntad del

constituyente de permitir a los justiciables resolver sus diferencias por vías distintas a la jurisdicción ordinaria.

En efecto, el arbitraje presupone que las partes de común acuerdo cedan la potestad de dirimir un conflicto a un tercero neutral elegido por ellas con el fin de someterse a su veredicto final, que es lo que se conoce como laudo arbitral y a través del cual se evidencia el poder decisorio que les ha sido conferido a los árbitros, el cual constituye una verdadera sentencia como lo ha calificado el legislador y la jurisprudencia.

Es por ello, que el laudo arbitral como resultado de ese poder decisorio, adquiere el pleno valor y es susceptible de ejecución, asegurándole a las partes que el proceso arbitral no se siguió en vano.

De modo, que al ser el laudo arbitral un título que apareja ejecución, resultó trascendente a los efectos de la presente investigación analizar su ejecución, habida consideración que en el ordenamiento jurídico venezolano no existen normas dictadas específicamente para tramitar la ejecución de los laudos arbitrales, resultándole aplicables las normas para la ejecución de las sentencias judiciales.

Sin embargo, los laudos arbitrales presentan particularidades que marcan diferencias con la sentencia dictadas en sede judicial; en el sentido de que el sistema de recursos en principio se resume a la sola procedencia del recurso de nulidad por las causales previstas en la ley, de modo que les está vetado a los jueces que lo resuelven entrar a conocer sobre el fondo de lo decidido. Asimismo, al encontrarse regulado el arbitraje por diversas leyes cuyos propósitos son distintos, se encuentran sometidos a particulares normas y condiciones que en algunos casos se aparta de la ejecución tradicional de

las sentencias, aunado a que los árbitros carecen de imperio para ejecutar lo decidido, siendo necesario el auxilio de la jurisdicción ordinaria.

En efecto, se analizaron en conjunto las diversas disposiciones legales (contenidas en fuentes internas y en tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República), así como los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, vigentes en materia de ejecución del laudo arbitral, compiladas en el informe y orientadas a dar una visión integral de lo que implica la ejecución del laudo arbitral en Venezuela y del tratamiento que le ha sido otorgado en diversas normas, abarcando los laudos internacionales y extranjeros, que en cuanto a su ejecución han sido especialmente considerados en los tratados internacionales, que aunque sean preconstitucionales en su mayoría, se aplican con preferencia por cuanto constituyen ley especial en la materia aunado a que contiene disposiciones más favorables, en especial las relacionadas con el reconocimiento expreso de los laudos a que están sometidos los Estados miembros.

En el orden de las ideas anteriores, también forma parte del propósito de la investigación servir como referencia para posteriores estudios que vinculen la ejecución del laudo arbitral, así como de guía en el conocimiento de los aspectos legales y doctrinarios que le envuelven, y que son particulares en varias materias; en especial, en los laudos arbitrales en materia tributaria, y los dictados en materia laboral tanto en sede administrativa como en sede judicial, donde el arbitraje ha sido distorsionado por la excesiva intromisión del Estado.

Igualmente, se pretende mostrar en materia de ejecución de laudos extranjeros la normativa vigente en Venezuela, mediante la cual es posible ejecutar los referidos laudos sin necesidad de exigir reciprocidad del Estado en el cual fueron dictados o cuyo ordenamiento jurídico le fue aplicado, para lo cual basta que el laudo cumpla con los requisitos mínimos que demuestren su legalidad; y sin necesidad de exigir exequátur como en el caso de los laudos arbitrales comerciales.

Asimismo, en materia de recursos contra el laudo, en Venezuela la regla está determinada por la sola procedencia del recurso de nulidad; sin embargo, hay casos en los cuales proceden otros recursos, ya sea el de casación como en el caso de los arbitrajes a que se refiere el Código Orgánico Tributario (2001), o la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002), el de apelación como en el arbitramento de derecho regido por el Código de Procedimiento Civil cuando las partes así lo pacten, o cuando el laudo no se dicte por acuerdo unánime de la junta arbitral como ocurre también en el arbitraje tributario; y en algunos casos se suprime el recurso de nulidad como en el caso de la Ley adjetiva laboral, abriéndose las puertas a la acción de amparo constitucional y al recurso de revisión.

De la misma forma que la sentencia, el laudo una vez firme está sujeto a ejecución voluntaria y forzosa. El cumplimiento voluntario no presenta inconvenientes pues no se activa el poder coercitivo del Estado, y aunque en el caso de los arbitrajes regidos por la Ley de Arbitraje Comercial que no alude expresamente a esta fase; por ser un derecho de la parte que resulte vencida, el mismo debe ser reconocido. Diferente es la ejecución forzosa, ya que escapa a los poderes conferidos a los árbitros, sustrayéndose a la competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, quedando sometidos la

mayoría de los laudos arbitrales al procedimiento de ejecución forzosa de sentencias previsto en el Código de Procedimiento Civil.

La presente investigación constituye un aporte desde el punto de vista práctico y social, ya que siendo el arbitraje un procedimiento que se desenvuelve bajo el principio de autonomía de la voluntad de las partes, sirve como medio para divulgar los aspectos que envuelven su ejecución y que interesa sean conocidos, toda vez que el derecho a ejecutarlo deviene como una manifestación de la tutela efectiva del derecho reconocido en el laudo y al mismo tiempo constituye herramienta de información para profundizar el tema, en aras de satisfacer las inquietudes de estudiantes, juristas y todo aquel que se interese en aspectos relacionados con el presente trabajo.

En lo que respecta a la metodología empleada, se trata de una investigación monográfica documental, con base en la recolección de fuentes primarias y secundarias, a un nivel descriptivo; para ello fue necesario analizar textos legales, doctrina escrita nacional y extranjera sobre el tema; así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de un estudio sistemático de los mencionados textos; con lo cual el presente trabajo se configura como una investigación analítica y de desarrollo conceptual, cuyo instrumento fundamental fue una matriz de análisis de contenido.

En consecuencia, ante interrogantes como las siguientes: ¿Cuál es el ordenamiento jurídico venezolano en materia de ejecución del laudo arbitral?, ¿Cuál es la importancia de la aplicación de los tratados en materia de ejecución de los laudos arbitrales en Venezuela?, ¿Cómo influye el exequátur en la ejecución del laudo arbitral en Venezuela?, ¿Cuáles son los recursos procedentes contra el laudo arbitral? y ¿Cómo es la ejecución del

laudo arbitral comparado con la ejecución de la sentencia judicial?, se hizo necesario analizar: ¿Cómo es la ejecución del Laudo Arbitral en Venezuela?.

Para tal fin se plantearon los siguientes objetivos específicos: en primer lugar, analizar el ordenamiento jurídico venezolano vigente en materia de ejecución del laudo arbitral; en segundo lugar, establecer la influencia del exequátur en la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros en Venezuela; en tercer lugar, precisar los recursos procedentes contra el laudo arbitral en Venezuela; y, en cuarto lugar, comparar la ejecución del laudo arbitral con la ejecución de la sentencia judicial.

Con fundamento en los referidos objetivos específicos, se pudo dar respuesta al objetivo general que se concreta en analizar la ejecución del laudo arbitral en Venezuela.

En virtud de ello, se dividió el presente trabajo en cuatro capítulos, a saber: el Capítulo I está destinado al ordenamiento jurídico venezolano en materia del laudo arbitral; relacionado con el fundamento constitucional del arbitraje, las consideraciones especiales a los artículos 26, 253 y 258 de la Constitución Nacional, al contenido de las leyes vigentes en materia de ejecución del laudo arbitral, a los tratados suscritos y ratificados por Venezuela en la materia y, a la influencia de la Convención de Nueva York y de la Convención de Panamá en la ejecución del laudo arbitral en Venezuela.

El capítulo II se centra en la influencia del exequátur en la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros en Venezuela; se define exequátur y se trata acerca de la consecuencia de su aplicación en materia de ejecución de laudos arbitrales.

El capítulo III hace referencia a los recursos procedentes contra el laudo arbitral; centrado en el recurso de nulidad.

El capítulo IV hace mención a la ejecución del laudo arbitral y de la sentencia judicial; en aspectos como el principio de la cosa juzgada, ejecución voluntaria y ejecución forzosa, órgano competente y, intervención de los Tribunales Ejecutores.

Finalmente, se presentan las conclusiones que permiten demostrar que se cumplieron los objetivos de la investigación.

CAPÍTULO I

ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO EN MATERIA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

A. Fundamento Constitucional del Arbitraje.

En Venezuela, jurídicamente el arbitraje había sido tomado en cuenta con cierta indiferencia, siendo la Constitución del año 1830 en la cual se instaura por primera vez; quedando allí plasmado sin ser llevado eficazmente a la práctica.

La citada norma se limitó a reconocer la figura del arbitraje, como un método del cual los particulares podían hacer uso para dirimir parte de sus controversias, lo cual debido a la composición social de la época y a la falta de difusión, aunado a la situación de analfabetismo y esclavitud reinante; no surtió los efectos para la cual estaba destinada. Posteriormente el enunciado de dicha disposición, se repite en la Constitución de 1857 y en la de 1858; pero, desde el texto constitucional de 1858 hasta la Constitución de 1961, inclusive, el constituyente trató con indiferencia al arbitraje.

Pero es en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), vigente en la actualidad; en la cual se elevó a rango constitucional los medios alternativos para la resolución de conflictos, reconociéndolos en sus artículos 253 y 258. Estas novísimas disposiciones jurídico-positivas, permiten a los justiciables elegir en aquellos casos cuyas materias son

transigibles, si acuden a la vía judicial o si bien optan por los medios alternos de justicia, dentro de los cuales se ubica al arbitraje. El contenido de los referidos preceptos es el siguiente:

*“Artículo 253: (...) El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, **los medios alternativos de justicia**, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio”. (Resaltado añadido).*

En concordancia con esta disposición se encuentra el artículo 258 que consagra:

“Artículo 258: La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.

***La ley promoverá el arbitraje**, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”. (Resaltado añadido).*

Estas disposiciones constitucionalizan los medios alternos de justicia, en especial el arbitraje, e impone un mandato directo al legislador por el cual este debe observar en su labor, la promoción de tales medios a fin de que los justiciables puedan hacer uso de los mismos bajo el amparo de su consagración en el ordenamiento jurídico positivo.

De manera que, al contemplar por primera vez la Carta Magna de manera contundente el arbitraje, es relevante hacer énfasis especial en su

efectividad, la cual se plasma mediante la materialización de los laudos arbitrales, y no sólo con el reconocimiento de un derecho.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es preciso señalar; que el arbitraje es el medio alternativo de justicia, por el cual las partes de común acuerdo confieren la potestad de dirimir un conflicto a un tercero de su preferencia, electo directa o indirectamente por ellas con el fin de someterse a su decisión final, a través de un pronunciamiento o laudo arbitral.

Las partes adquieren un papel protagónico mediante la autonomía de su voluntad, lo cual les permite disponer que un tercero neutral sea quien determine la suerte de sus derechos ante una eventual controversia, y a cuya decisión se someten mediante el compromiso arbitral.

Constituye un gran avance para la institución arbitral en Venezuela, el reconocimiento que se hace a los medios alternativos de justicia, como parte del sistema de justicia, lo cual implica una gran ampliación y la apertura de una brecha que permite un importante descongestionamiento de los Tribunales y una mayor efectividad de la justicia; pues para nadie es un secreto que el retardo procesal es consecuencia de una justicia sobresaturada por un gran número de causas y procedimientos que ponen freno a la celeridad que le debe caracterizar. Al respecto es oportuno citar la posición asumida por Gamboa, quien sostiene:

“...Frente a la evidente congestión judicial se han alzado voces que proclaman su proscripción y su cambio por la conciliación y por el arbitraje, como si se tratara de instituciones adversarias, cuando en realidad no lo son (...) la conciliación y el arbitraje no son métodos de descongestión judicial, son métodos de solución de conflictos. La confusión parte desde el comienzo: que al juez

se le ha encomendado la solución de todo tipo de conflictos, como formula impuesta por un simple “convencionalismo” social; se quiere que el juez ordinario resuelva toda clase de controversias, sin importar ni su naturaleza, ni su génesis, ni su desarrollo, ni los intereses de las partes involucradas (...) pero lo que no se toma en cuenta al mirar al juez es su eficiencia (...) lo que sí está claro es que un conflicto debe ser resuelto en el menor término posible, según el conflicto, y por la persona más calificada posible, también según el conflicto. (2005, p. 548).

El autor antes citado, es conteste al poner de relieve el hecho de que los Tribunales se encuentran sobrecargados de asuntos que no les deberían ser asignados, lo cual es consecuencia de haberse sobredimensionado la función jurisdiccional a la que atañe netamente al derecho, por lo que es bastante atractivo desjudicializar aquellos asuntos que no impliquen una verdadera función jurisdiccional para descongestionar los despachos judiciales.

Se hace necesario entonces, el reconocimiento de que no todo asunto debe ir al conocimiento de un juez, sino que puede ser resuelto en otras instancias que se perfilan dentro del sistema de justicia, por lo que los medios alternativos no pueden ser vistos como adversarios de la justicia ordinaria.

En el mismo orden de ideas, la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señala que:

“... la Constitución amplió el sistema de justicia para la inclusión de modos alternos al de la justicia ordinaria que ejerce el poder judicial, entre los que se encuentra el arbitraje. Esa ampliación implica, a no dudarlo, un desahogo de esa justicia ordinaria que está sobrecargada de asuntos pendientes de decisión, y propende al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz, célere

y ajena a formalidades innecesarias.... Así, a través de mecanismos alternos al del proceso judicial, se logra el fin del Derecho, como lo es la paz social, en perfecta conjunción con el Poder Judicial, que es el que mantiene el monopolio de la tutela coactiva de los derechos y, por ende, de la ejecución forzosa de la sentencia...". (Sentencia N° 198 del año 2008.)

Este último criterio, hoy vigente; se complementa con el criterio establecido en Sentencia Sala N° 1.417 de fecha 17-10-2008 donde la misma Sala en interpretación del alcance del último aparte del artículo 258 del texto constitucional y con carácter vinculante advierte:

"...Los medios alternativos de solución de conflictos y, en particular el arbitraje, producen decisiones que se convierten en cosa juzgada - laudo arbitral y, por tanto, son parte de la actividad jurisdiccional y del sistema de justicia, pero no del Poder Judicial (...) y que por tal virtud son capaces de vincular (al igual que lo haría una sentencia) a las partes intervinientes en tales procedimientos."

Así pues, es ineludible indicar el acierto del constituyente al incorporar al sistema de justicia venezolano, de manera categórica; los medios alternativos de justicia, los cuales deben ser vistos en armonía con la justicia ordinaria y nunca como adversarios, ya que ambos conforman el sistema de justicia del Estado, y son a su vez especies de la denominada heterocomposición como sistema para la solución de conflictos, la cual se presenta cuando interviene un tercero, bien para mediar o para resolverlo con carácter de obligatorio cumplimiento, y en el caso del arbitraje mediante el laudo arbitral.

El laudo arbitral al igual que la sentencia materializa la tutela judicial efectiva, establecida en la Constitución Nacional, mediante la cual las partes pueden ver reconocidos sus derechos y hacerlos efectivos a través del cumplimiento de lo decidido.

El laudo arbitral, dice Caivano, (2000, p. 247)

“...es la decisión emanada de los árbitros que pone fin al litigio. Tiene fuerza vinculante y es obligatorio, resolviendo definitivamente el diferendo que las partes les habían sometido. Constituye la expresión más acabada de la jurisdicción que ejercen los árbitros, al imponer a las partes una solución para las diferencias que los separaban, y es el acto que finalmente tuvieron en mira las partes al pactar el arbitraje como medio de resolución de sus conflictos.”

El laudo arbitral, es la parte más determinante del arbitraje, es la última y, sin duda, la más importante fase del proceso arbitral, pues toda la institución arbitral está estructurada para llegar a esta etapa. El laudo arbitral contiene la resolución del conflicto sometido a arbitraje, el cual es de carácter obligatorio toda vez que se le reconoce la fuerza de la cosa juzgada, lo que asegura a las partes que el proceso arbitral no se sigue en vano.

El laudo arbitral puede ser interno, internacional o extranjero. Así, el laudo interno, es el dictado en un proceso arbitral nacional también se le dice laudo doméstico. El laudo internacional es el dictado en un arbitraje internacional, que se da cuando en el mismo no existe ninguna vinculación con la ley nacional, independientemente del lugar donde este se lleve a cabo, teniendo en consideración los criterios establecidos en la ley para determinar que se trate de arbitraje internacional. Y el laudo extranjero, es el dictado en

territorio de otro Estado. De este modo, al igual que en el caso del arbitraje extranjero, el laudo arbitral será extranjero si es dictado fuera del país, independientemente de la legislación aplicable.

B. Consideraciones Especiales a los Artículos 26, 253 y 258 de la Constitución Nacional.

La Constitución Nacional, reconoce el derecho de todas las personas a acceder al sistema de justicia, y lo garantiza en diversas disposiciones entre las cuales se encuentran los artículos 26, 257 y 258. Como se señaló anteriormente, la base constitucional del arbitraje en Venezuela se encuentra establecida expresamente en los artículos 253 y 258 *eiusdem*, que son el marco de referencia en el cual debe proyectarse la legislación venezolana.

Así pues, en el artículo 26 *eiusdem* se encuentra contemplado el derecho de acceso a la justicia, y como corolario en la parte *in fine* del primer párrafo nos habla de la Tutela Efectiva y marca las pautas generales que contempla en Venezuela la administración de justicia. Es importante destacar que el constituyente de 1999, amplía el marco de la tutela efectiva, pues es de hacer notar que la Constitución Nacional de 1961 contemplaba la tutela *judicial* efectiva cuando se refería al derecho a la defensa y dentro de él al derecho de acceso a la justicia; y el texto constitucional vigente estipula la tutela efectiva de los derechos, de manera general, y no sólo desde el punto

de vista judicial, lo cual se traduce en una mayor cobertura y ampliación de este derecho, que no queda relegado al ámbito judicial.

Según se ha citado, la Constitución de 1961 consagraba en su artículo 68, el derecho de acceso a los órganos de justicia, de la forma siguiente:

“Artículo 68: Todos pueden utilizar los órganos de la Administración de Justicia para la defensa de sus derechos o intereses, en los términos y condiciones establecidos por la ley, la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medios suficientes. La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso”.

La inclusión del artículo anterior en la Constitución de 1961, también significó un aporte novedoso para la protección de los derechos subjetivos de los particulares, que se mantuvo por 38 años. Pero es la Constitución de 1999 la que como se señaló ut supra da una mayor cobertura a la tutela efectiva, señalando en su Exposición de Motivos:

“...se consagra la justicia gratuita como un derecho humano, que consagra su principal fundamento en los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución y que tiene por objeto permitir el libre acceso de toda persona a la justicia, sin discriminación alguna...” (p. 3)

Y contemplando en su artículo 26 el contenido del referido derecho, el cual se establece textualmente así:

“Artículo 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e

intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin formalismos ni dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

La constitucionalización del derecho a la tutela efectiva, ha permitido que su alcance se extienda más allá del acceso a la justicia, consagrado como tal dentro de las previsiones del derecho a la defensa de la Constitución de 1961, y su consagración de manera expresa en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ha influido en forma determinante en el desarrollo de la justicia de nuestro país, debiendo constituirse obligatoriamente en el punto de partida de cualquier decisión.

La tutela judicial efectiva es un derecho complejo, porque abarca un conjunto de derechos constitucionales procesales que permiten obtener una justicia tutelada por el Estado de manera efectiva, Bello y Jiménez (2009, p. 42). Por ello no es sencillo dar una definición única.

Pico I Junoy (1997, p. 40) afirma que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende los siguientes aspectos: el derecho de acceso a los tribunales, el derecho a obtener una sentencia congruente fundada en derecho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el derecho al recurso legalmente previsto.

En este mismo orden, Carocca expresa que la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales iniciando un proceso, así como la obtención de una sentencia motivada que declare el derecho de cada una de las partes, la posibilidad de las partes de poder

interponer los recursos que la ley prevé y la posibilidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia. (1998, p.125-133).

Por su parte, Gonzales, manifiesta que la tutela judicial efectiva *“Es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas.”* (1985, p. 27).

La jurisprudencia patria, concibe la tutela judicial efectiva como uno de los derechos esenciales de los individuos, tal como lo establece la Sala Constitucional en sentencia N° 708 de fecha 10 de mayo de 2001, definiéndole como:

“Un derecho de amplísimo contenido, que comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso, sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido”.

En ese sentido, Bello y Jiménez (2009), aclaran que efectivamente para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la tutela judicial efectiva es un derecho bastante amplio que involucra no sólo el acceso a la justicia y a obtener una decisión razonada y justa, sino que también incluye las garantías constitucionales procesales que se encuentran en el artículo 49 de la Constitución (p. 46).

Del contenido del artículo 26 se infiere claramente que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceso a los órganos de

administración de justicia, el derecho a tener una decisión conforme a derecho y el derecho a que esa decisión se haga efectiva; todo lo cual sólo es posible cuando se cumplen en él los principios establecidos en la Constitución, que al verse vulnerados le afecta insoslayablemente.

Por lo antes expuesto, es preciso señalar la importancia de esta disposición constitucional en el campo de los medios alternos de resolución de conflictos, específicamente en el campo del arbitraje, pues de ella se desprende ese derecho de acceso a la justicia para la tutela de los derechos que ya no se circunscribe sólo al campo judicial; y por medio del cual las partes pueden hacer valer sus derechos con el fin de encontrar una respuesta oportuna y ajustada a derecho relacionada con sus pretensiones, ya sea a través de la justicia ordinaria o a través de la justicia arbitral; o por cualquier otro medio de heterocomposición procesal.

Ello queda en relieve, cuando claramente afirma la referida Sala Constitucional en sentencia N° 192 de fecha 28 de febrero de 2008:

“... A esa óptica objetiva de los medios alternativos de solución de conflictos, ha de añadirse su óptica subjetiva, en el sentido de que dichos medios con inclusión del arbitraje, en tanto integran el sistema de justicia, se vinculan con el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz que recoge el artículo 26 de la Constitución. En otras palabras, puede decirse que el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz entraña un derecho fundamental a la posibilidad de empleo de los medios alternativos de resolución de conflictos, entre ellos, evidentemente, el arbitraje...”

En el mismo orden de las ideas anteriores, de incuestionable importancia son las disposiciones constitucionales plasmadas en los artículos 253 y 258 de la

Carta Magna, por cuanto marcan un hito en esta materia, al elevar a rango constitucional los medios alternativos de justicia, donde figura el arbitraje.

Por primera vez el constituyente, desde 1858, vuelve a introducir esta institución en la Ley Fundamental, al señalar, en su artículo 253 al arbitraje como parte del sistema de justicia y en el artículo 258 que La ley promoverá el arbitraje y los otros medios alternativos para la solución de conflictos, imponiendo así una obligación innegable al legislador encuadrada en el principio Pro Arbitraje, todo ello en el marco del artículo 26 eiusdem que regula el acceso a la justicia.

Si bien es cierto, para que los particulares den solución a una controversia fuera de la sede jurisdiccional; no es necesario que el Texto Constitucional prevea tal posibilidad, pues es obvio que por su voluntad autónoma eso suceda, como efectivamente se aprecia a cada día; lo relevante de estas disposiciones es la consagración del rango constitucional, y lo más novedoso; la obligación que se impone al legislador de promover tales medios, de modo que no puede a fortiori ser restringidos, y en cualquier circunstancia deben ser favorecidos por los operadores de justicia. En tal sentido explana Morales:

“En ese contexto el legislador venezolano ha venido acatando ese deber constitucional, mediante la sanción de diversos cuerpos legales que regulan desarrollo y promoción. Inclusive el legislador patrio ha sancionado leyes que promueven los MARC en áreas o materias “sensibles” o consideradas como ortodoxas o clásicas, como la materia tributaria, laboral y administrativa, entre otras”.
(2011, p. 15)

Tal exhorto al legislador, se materializa con el ejercicio de la iniciativa legislativa en la materia, la cual debe buscar el desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos. Con ello no sólo es más amplio el universo de acción del arbitraje en cuanto a las materias en las cuales procede, sino que se amplía el sistema de justicia garante de la paz social.

En cuanto a este último particular, doctrinaria y jurisprudencialmente existe un conflicto en relación con la naturaleza del arbitraje; para algunos autores el arbitraje carece de naturaleza jurisdiccional y justifican su posición en el acto generador del arbitraje como es la voluntad privada de los particulares y/o la falta de imperium de la cual carecen los árbitros que caracteriza a la función jurisdiccional, tal es el caso del autor Mezgravis, (1999, p. 257), quien señala: *“Por nuestra parte (...) hemos manifestado nuestra inclinación por la tesis contractualista”*, según la cual el arbitraje es contrato y no jurisdicción.

Igualmente Pesci, (2006, p. 81), es adepto a esta posición y afirmar que:

“...los árbitros no ejercen función jurisdiccional propiamente dicha sino que son colaboradores en la administración de justicia, y con este carácter forman parte del sistema de justicia a que se refiere el artículo 253 en su segundo aparte. Ellos no ejercen función jurisdiccional alguna. Esta la presta exclusivamente el Estado cuando publica el laudo y luego, si es necesario, lo ejecuta”.

A esta posición en la doctrina patria se suma el profesor Longo; quien fundamenta su tesis en la tridimensionalidad del derecho, sosteniendo que existe un primer plano deontológico, donde se ubica el orden normativo; en segundo lugar, un plano ontológico, relativo al derecho aplicado, lo que acontece, lo que se manifiesta en el mundo del ser donde se ubica el arbitraje; y un tercer plano, que trasciende de los dos anteriores cuando no es

posible acomodarlos, y que denomina proceso, donde se ubica la jurisdicción; incluyendo al arbitraje dentro de los medios no jurisdiccionales de justicia en contraposición a los medios jurisdicciones de justicia, donde se inscribe la actividad llevada a cabo por los órganos del Poder Judicial. (2004, p. 87-126)

En contraposición a esta corriente, se encuentra otros autores que si apuestan por el carácter jurisdiccional del arbitraje, dentro de ellos destacan el maestro Cuenca citado por De Maekelt y Madrid, (2003, p.722), quien sostiene que:

“...Los árbitros designados por las partes desempeñan una verdadera función jurisdiccional y tienen, en principio, el mismo cúmulo de deberes y facultades que los jueces de un Estado; sin embargo, recordemos que tal poder no deriva del Estado sino de un acuerdo privado de las partes...”

En la misma línea de pensamiento, sostiene Borjas (1979 p. 13) que:

“...el derecho a comprometer y el arbitramento, que es su consecuencia, no emanan, como se asevera generalmente, del libre derecho que de contratar y de disponer de sus cosas tienen las personas capaces de obligarse, sino del derecho natural que corresponde a cada cual de pedir y obtener justicia y de que le sea administrada por persona que merezca su confianza. Si sólo se tratara, al comprometer, de celebrar un avenimiento en que se dispusiese del derecho o de la cosa en litigio, el juicio y la decisión arbitrales no serían en fin de fines sino una transacción, una verdadera transacción extrajudicial, y no como realmente son, un juicio y una sentencia susceptibles de revisión en alzada; un arreglo amistoso entre partes, y no un acto jurisdiccional. La ley y no las partes es la que inviste a los árbitros de la autoridad necesaria para ejercer la función de sentenciar, que es un acto de soberanía...”

El insigne procesalista Cuenca, (1980, p. 357) señala que:

“... El laudo es una manifestación de voluntad del Estado y sus efectos jurídicos en nada se diferencian del fallo pronunciado por los jueces oficiales, es una prolongación de la actividad jurisdiccional y alcanza como toda sentencia, la autoridad de la cosa juzgada (...) En cuanto al arbitraje, no es una jurisdicción particular, pues como veremos en su oportunidad, los jueces designados por las partes en litigio desempeñan también una función jurisdiccional y tienen el mismo cúmulo de deberes y facultades que los jueces del Estado...”

Gabaldón, (2002, p. 366) también es conteste en aducir que los árbitros: *“...son jueces privados, cuya creación concreta y funcionamiento es posible por la delegación temporal que el Estado les hace de su poder jurisdiccional, en virtud de este mismo Estado, expresada a través de la Constitución y sus leyes correspondientes”.*

La jurisprudencia de la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, claramente señala que los medios alternativos de solución de conflictos tienen como finalidad dirimir conflictos y en el caso del arbitraje esa actividad se concreta con el laudo arbitral, que es parte de la actividad jurisdiccional y del sistema de justicia, pero es tajante al aclarar en la Sentencia N° 1139 de 5 de octubre del año 2000 lo siguiente:

“...pero no por ello pertenece al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa...”

De estas dos posiciones antagónicas, puede decirse; que a la luz del marco constitucional venezolano surge una respuesta que resuelve el conflicto; y la solución se encuentra en el artículo 253 de la Constitución Nacional, el cual ha puesto punto final a la discusión existente en cuanto a si el arbitraje hace figura de oposición con la jurisdicción ordinaria, pues expresamente establece que el arbitraje forma parte del sistema de justicia de modo que tales figuras se complementan. Esta norma establece en el aparte final, que se institucionaliza el sistema de justicia, dentro del cual se forma parte el arbitraje.

En este sentido la propia Exposición de Motivos del Texto Constitucional, además de afirmar que la administración de justicia no es monopolio exclusivo del Estado, declaró:

“... se incorpora al sistema de justicia, los medios alternativos para la resolución de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello con el objeto de que el Estado los fomente y promueva sin perjuicio de las actividades que en tal sentido puedan desarrollar las academias, universidades, cámaras de comercio y la sociedad civil en general...” (p. 10-11)

Por lo que resulta preciso afirmar a la luz del texto constitucional que *“...las discusiones sobre este particular son ya inoficiosas, al haberse incorporado los medios alternativos de justicia en la nueva Constitución como parte del sistema de justicia venezolano...”*. Torrealba (2001, p. 35),

Atendiendo a los planteamientos indicados, desde la óptica de un análisis conjunto de los artículos 253 y 258 de la CRBV y su Exposición de Motivos, claramente se deduce que el arbitraje, cuyas decisiones se revisten de la

fuerza de la cosa juzgada, no sólo apunta a la resolución de los conflictos; sino que cumple sus funciones en atención a la justicia, como valor superior del ordenamiento jurídico, a tenor de lo establecido en el artículo 2 eiusdem y, de la misma manera, el instrumento fundamental para la realización de la Justicia y por lo tanto para su administración es el proceso, como expresamente se establece en el citado artículo 257.

Igualmente, otra cuestión de importancia que deriva del artículo 258 constitucional, es el principio Pro Arbitraje; que resulta al establecerse que la Ley promoverá el arbitraje. Promoción que como se indicó anteriormente, implica, que el legislador ejerza su iniciativa legislativa en la materia y, procure, a través de dicha iniciativa, el desarrollo y eficacia del arbitraje, la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos; promoción que ha sido reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia, tal como se evidencia en los planteamientos de la citada Sentencia N° 192 de la Sala Constitucional, que determinó el alcance del principio Pro-Arbitraje en el ordenamiento jurídico venezolano, y en la que esboza:

“...el imperativo constitucional de que la Ley promoverá el arbitraje (artículo 258) y la existencia de un derecho fundamental al arbitraje que está inserto en el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz, lo que lleva a la Sala a la interpretación de la norma legal conforme al principio pro actione que, si se traduce al ámbito de los medios alternativos de resolución de conflictos, se concreta en el principio pro arbitraje”.

En la mencionada decisión, la Sala Constitucional sienta criterio en los siguientes particulares:

- Reconoce la naturaleza jurisdiccional del Arbitraje Comercial.

- Destaca la inclusión constitucional del Arbitraje en el sistema de justicia venezolano, lo que implica una nueva concepción de la tutela jurisdiccional efectiva, la cual incluye el derecho fundamental de los justiciables a elegir dirimir sus controversias ante tribunales judiciales o ante tribunales arbitrales.
- Establece la aplicación del principio Pro Arbitraje a la interpretación y calificación de supuestos de hecho y disposiciones normativas relacionadas con la materia.

En la misma tendencia participa Hung, cuando trata acerca de los principios orientadores del arbitraje, quien afirma que el principio Pro Arbitraje manifiesta los criterios del principio Pro Actione, según el cual la interpretación y aplicación de las normas jurídicas sobre arbitraje deben ir con miras a estimular y garantizar la efectividad de tal medio, y que en caso de dudas se sostenga la validez del arbitraje, siempre que tal resultado no conduzca a la violación de normas de orden público, las buenas costumbres o de normas de orden constitucional. (2001, p. 151-156).

De modo que, resulta razonable afirmar; que en caso de duda se favorecerá al arbitraje, y esto es consecuencia del vínculo existente entre el arbitraje y el principio de autonomía de la voluntad de las partes de recurrir a esta vía; lo cual implica indiscutiblemente, que los jueces en el desarrollo de su actividad, deben inclinarse por adoptar las medidas judiciales necesarias encaminadas a la operatividad del sistema arbitral; por lo cual la jurisdicción ordinaria debe desarrollarse eficazmente dentro de su competencias, sin llegar a un intervencionismo, cuando el arbitraje sea el medio elegido por los particulares para ventilar sus diferencias.

Por todo lo expuesto, la correlación de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 2, 26, 257 y 258, obliga al operador e justicia a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles, donde se le respete a los justiciables las manifestaciones de su voluntad enmarcada dentro de las posibilidades que le acuerda el ordenamiento jurídico y respetándole las garantías y derechos reconocidos, en aras de la tutela efectiva de los mismos.

C. Contenido de las Leyes vigentes que regulan la ejecución del laudo arbitral.

La Constitución Nacional, impone la obligación al legislador de promover el arbitraje; lo cual se traduce en la promulgación de leyes que desarrollen la institución y demás medios de justicia alternativa. Esta norma de carácter programático viene a ser el pilar fundamental sobre el cual debe fomentarse un cuerpo de normas legales que regulen esta materia. Sin embargo, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, ya existían textos legales que regulaban el arbitraje como el Código de Procedimiento Civil, la Ley sobre el Derecho de Autor y la Ley de Arbitraje Comercial.

El Código de Procedimiento Civil (CPC, 1986) contempló el arbitraje con importantes modificaciones, y así se mantuvo en las reforma subsiguientes; y en la última de fecha 18 de septiembre del año 1990, que en su Libro Cuarto,

Parte Primera, Título I; trata sobre el Arbitramiento como procedimiento especial, a partir del artículo 608, al cual hacen remisión diversas leyes.

Es importante desde el punto de vista histórico, recordar que en el Código de Procedimiento Civil de 1916, la cláusula compromisoria para someter un asunto a arbitraje carecía de valor si la parte a quien se le exigía su cumplimiento se negaba, no había sanción alguna lo cual se tradujo en una inobservancia a esta institución; al no brindar seguridad jurídica a las partes, situación resuelta en el Código de Procedimiento Civil de 1986 en el cual se le otorga carácter obligatorio a la cláusula compromisoria que despertó cierto interés por el arbitraje. Al respecto señala Mantellini, (1986, p. 175-176) lo siguiente:

“El Código de Procedimiento Civil del 16 sobre arbitraje o arbitramiento, por haber consagrado la falta de sanción a la violación o incumplimiento de la “Cláusula Compromisoria” impidieron el desarrollo del arbitraje en nuestro país, no sólo a nivel nacional sino también nuestra concurrencia al arbitraje internacional. La expectativa es, con las modificaciones realizadas en las normas sobre arbitraje contenidas en el Código del 86, que la institución de arbitraje tanto a nivel nacional como internacional facilitaran la presencia de Venezuela en ese campo tan necesario para la expansión de la economía.”

En este cuerpo legal, claramente se establece que sólo las materias susceptibles de libre disposición por las partes; son las que pueden ser sometidas a arbitraje, quedando así excluidas las que interesa al orden público. Asimismo, establece que los árbitros deben ser designados ante el juez aún cuando sean designados por las partes e igualmente, después de la reforma, sólo se permite ejercer la cualidad de árbitros de derecho, a los que sean abogados en ejercicio, lo que resulta lógico, ya que son estos los que

conocen el ordenamiento jurídico y están en capacidad de resolver los problemas, adaptando las normas al caso concreto.

En cuanto a la ejecución del laudo arbitral, no contiene disposiciones precisas en el capítulo destinado al arbitramento; sin embargo, las normas relativas a la ejecución de la sentencia le son aplicables, aún para los arbitrajes previstos en los demás textos legales por remisión expresa de los mismos; en especial las normas para la ejecución forzosa, que por lo general se aplican íntegramente.

Elaborado y firmado el laudo arbitral, debe pasarse con los autos al juez ante quien fueron designados los árbitros (que como ya se señaló es el que hubiere conocido en primera instancia la causa sometida a arbitramento, conforme al artículo 628 del CPC), para que este lo publique al día siguiente de su consignación a la hora que se indique en el mismo y es a partir de allí que comienzan a correr los lapsos para los recursos a que haya lugar. En cuanto a la ejecución del laudo arbitral continúa diciendo Mantellini, que:

“... de acuerdo con el Código del 86 una vez que el Laudo Arbitral haya sido emitido, el juez lo publicará sin citación de las partes, lo cual acelera en mucho el procedimiento. Se presupone que las partes están a derecho y que por ello no se hace necesaria ninguna otra citación...” (1986, p. 186).

Cabe agregar, que el artículo 618 del CPC, prevé que los árbitros de derecho deben observar el procedimiento legal y en los laudos las disposiciones del derecho, de modo que deben en todo caso cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 243 eiusdem que establece los requisitos de toda sentencia, debiendo contener los fundamentos del mismo, sin

contradicciones que imposibiliten su ejecución, por lo que el juez procederá a la ejecución de los laudos arbitrales verificada tales condiciones.

Sin embargo, indica el referido artículo en cuanto a los árbitros arbitradores, que estos pueden proceder con entera libertad atendiendo a la equidad, por lo que no están sujetos a las formalidades de las reglas de procedimiento, por lo que en este último caso es conveniente que en lo posible se apeguen al contenido del artículo 243 y 244 del CPC como muestra de esa equidad y a los fines de convencer a las partes de su apego a la legalidad, salvo que estas convengan lo contrario, y busquen sólo un pronunciamiento que les confiera la razón a alguna según sea el caso.

El laudo arbitral o “sentencia” como abiertamente le llama el código, una vez que adquiera firmeza es ejecutable, y la ejecución como se indicó, la llevará a cabo el juez que hubiere conocido en primera instancia la causa sometida a arbitramento, y la interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución del mismo por tratarse de un recurso extraordinario.

Sánchez (2001, p. 105), al respecto afirma:

“En nuestro Código de Procedimiento Civil, una vez dictado el laudo por los árbitros, si bien debe pasarse con los autos al juez competente para su publicación a los fines de la apertura del lapso para interponer los recursos a que haya lugar, ese laudo constituye una sentencia propiamente dicha y asimismo la califica el mismo legislador patrio, de modo que el poder jurisdiccional por excelencia que es el de decisión ha sido ejercido plenamente por el tribunal arbitral.”

Es importante señalar, que la entrada en vigencia de este código, fue de gran ayuda en la época; consolidando la presencia del arbitraje como proceso

alternativo; era novedoso y proporcionó un nuevo tratamiento al sistema arbitral, dotando de pleno valor a la cláusula arbitral la cual es de obligatorio cumplimiento y ley entre las partes, tal cual un verdadero contrato; asimismo, dada tal novedad acaparó la atención del foro venezolano, pero posteriormente se fue haciendo evidente la escasa recurrencia de las partes al arbitraje quizá por la falta de promoción.

Al respecto advirtió Gabaldón, (1987, p. 26-27):

“Con el arbitraje creemos que el estado persigue fundamentalmente otorgar en lo posible a los litigantes facilidades adicionales a las ordinarias para la solución de sus controversias (....) Por lo expuesto, sería altamente deseable una campaña de difusión del arbitraje a todos los niveles: entre los estudiantes de derecho, abogados, agrupaciones empresariales y profesionales y en los medios de comunicación para que el público se entere de sus existencia y utilidad...”

En el orden de las ideas anteriores, la normativa que regula al arbitramento en el CPC, resultan deficientes al no tomar en consideración cuestiones de marcada relevancia, dentro de las cuales destaca, que al ser de las primeras disposiciones que tratan la materia no proporcionan una definición del arbitramento, sino que se limita a detallar algunas de sus características, no toma previsiones en cuanto a la posibilidad de dictar medidas cautelares que aseguren la ejecución del laudo ante cualquier eventualidad, tampoco contempla previsiones en cuanto el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, siendo así cuna de algunas lagunas legales que le han restado su operatividad.

Asimismo, el ordenamiento jurídico venezolano, cuenta con la Ley de Arbitraje Comercial (LAC, 1998), que es una ley inspirada en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), cuyo objeto es armonizar y perfeccionar las leyes de los distintos ordenamientos jurídicos en materia de arbitraje comercial, en el contexto de la globalización; la cual pretende unificar conceptos, promover la validez universal de las cláusulas arbitrales, eliminar el exequátur y en suma homogeneizar las reglas arbitrales en el mundo para una unísona promoción. Esta ley de Arbitraje Comercial, tiene como objetivo consagrar el arbitraje, bien sea institucional o independiente; como método alternativo de solución de controversias, realzando los principios universales que afianzan la operatividad del arbitraje en el ámbito comercial.

Su principal aporte radica en lo expedito del procedimiento, la seguridad que brinda a las partes y para el comercio internacional respecto a los derechos y su satisfacción y a la eficacia de los laudos que ventila la controversia. El Arbitraje Comercial, a la luz de este texto legal, busca solventar aquellas controversias que nazcan con motivo del ejercicio del comercio, entre comerciantes; se modo que si el arbitraje tiene como objeto una operación económica, entonces, éste será un arbitraje comercial.

Es importante resaltar que esta ley presenta grandes mejoras en cuanto al arbitraje internacional, que es hoy día el sistema de resolución de conflictos comerciales internacionales más usado. Doctrinariamente hay un doble criterio para determinar un arbitraje como internacional, un criterio económico y uno jurídico

Los criterios jurídicos se caracterizan según Chillón y Merino (1991, p. 339) *“...por concentrarse en elementos específicos del arbitraje que, por estar conectados con más de un ordenamiento jurídico, determinarán la internacionalidad del arbitraje...”*. Estos criterios jurídicos están referidos al domicilio, la nacionalidad, lugar de celebración del contrato, objeto de la controversia, lugar donde el laudo arbitral será ejecutado, derecho escogido, entre otros.

En cuanto a los criterios económicos para ver si se está en presencia de un arbitraje extranjero, se requiere tomar en cuenta: *“...i) criterios más objetivos, basados en la naturaleza internacional de la disputa misma y, ii) los efectos que la transacción sometida a arbitraje produce en la relaciones económicas internacionales”*. Fouchard, citado por Sánquiz (2005, p. 26).

En relación a esta dualidad de criterio nos dice Henríquez (2000, p. 91):

“...Pensamos que este criterio funcional, se impondrá sobre el criterio meramente locativo de los sujetos o el objeto litigioso. La ubicación de las partes, la del objeto, la del pago o la localización del proceso van perdiendo importancia respecto al tema crucial de reconocimiento y eficacia del laudo (cualquiera que sea el país donde haya sido dictado el laudo, expresa el artículo 48 Lac), al ser cada vez más amplias en las legislaciones internas las posibilidades de reconocimiento y ejecución del laudo, dado el fundamento eminentemente convencional y la naturaleza disponible del tema decidendum. A mayor facilidad del pase del laudo menos diferencia habrá entre el arbitraje doméstico y el foráneo...”

A tal efecto, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que administra en el continente americano un sistema reglamentario para la

solución de las controversias comerciales internacionales, bien sea por medio de la conciliación o por medio del arbitraje y de la cual es parte Venezuela, en cuanto al arbitraje internacional señala:

“El arbitraje será internacional cuando se encuentre enmarcado dentro de los criterios que cada legislación haya acogido para tal fin. A manera de ejemplo, existen legislaciones que entienden que se trata de arbitraje internacional, cuando el arbitraje tenga por objeto una controversia derivada de relaciones de comercio internacional (criterio económico - material); ó cuando las partes ó los árbitros sean de nacionalidades diferentes ó cuando el domicilio o residencia de las partes se encuentren en Estados distintos (criterio jurídico - formal); ó cuando así se derive de factores directamente relacionados con la controversia, tales como el lugar de celebración del contrato, lugar de ejecución del contrato, nacionalidad o ubicación de la institución arbitral, lugar en que se llevará a cabo el arbitraje, lugar en donde se hará efectivo el laudo, la ley seleccionada como ley sustantiva, ó la ley seleccionada como ley de procedimiento, entre otros.” (párr. 3)

En la misma línea de pensamiento, en el arbitraje comercial comenta Sarmiento que:

“...Debe haber un elemento extranjero en el caso para que se trate de un arbitraje internacional, debe haber un elemento de comercio internacional este es un aspecto o característica netamente económico que puede estar representado por la divisa en la que se celebró el contrato, una entrega de la mercancía en el extranjero, adquisición de un producto extranjero, etc. Debe crearse un movimiento transfronterizo de valores para que el objeto litigioso goce de una característica “internacional” o extranjera. Puede tratarse de una transferencia fronteriza de divisas, de servicios y de productos. El arbitraje internacional pone en tela de juicio intereses de comercio internacional. El carácter internacional del arbitraje no depende del procedimiento arbitral sino del objeto litigioso.” (1999, p. 193).

De Maekelt, (1999, p. 277), a los fines de calificar un arbitraje como internacional se pronuncia de la siguiente manera:

“En nuestra opinión, la calificación del arbitraje como internacional debe hacerse partiendo de criterios amplios, tal como lo hace la Ley Modelo UNCITRAL ya que, cualquier elemento de conexión extranjero en relación a una controversia que se desea someter al arbitraje o a la conexión foránea de este último son determinantes para considerarlo internacional.”

Tales concepciones resultan relevantes, toda vez que cada día se hace más patente la recurrencia al arbitraje en el ámbito internacional, y no sólo en el campo comercial sino en las demás áreas permitidas por el ordenamiento jurídico, de modo que ante cualquier circunstancia que haga necesaria la presencia de cualquier elemento de conexión extranjero claramente se está en presencia de un arbitraje internacional. Sin embargo, en el caso venezolano, resulta de la interpretación del ordenamiento jurídico y en modo especial del contenido de la Ley de Arbitraje Comercial que gracias al reconocimiento y ejecución del laudo arbitral sin mayores formalidades, el arbitraje internacional está reconocido de plano siempre y cuando exista la voluntad de las partes de someter determinada controversia a arbitraje y que tal controversia sea susceptible de disposición.

La Ley de Arbitraje Comercial, en cuanto a la ejecución del laudo arbitral es la primera que toma la iniciativa de desarrollar aspectos importantes en su contenido; que va desde la emisión del laudo y las condiciones que le rodean hasta el aseguramiento de la ejecución del mismo. Hace aportes importantes en materia de ejecución de los laudos arbitrales, tanto domésticos como internacionales, brindando seguridad jurídica a las partes involucradas, al

reconocer el efecto de cosa juzgada del laudo, en los artículos 31, 46 y 48, cuando estipula la obligatoriedad de su cumplimiento.

Los laudos arbitrales extranjeros, a tenor del artículo 48 de la citada Ley, serán reconocidos por los tribunales ordinarios como vinculantes e inapelables, y son susceptibles de ser ejecutados forzosamente tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente de acuerdo a las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias, sin requerir exequátur. Asimismo, el artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial, señala que la misma se aplicará sin perjuicio de los tratados vigentes suscritos y ratificados por Venezuela lo cual es válido para el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, cuyo análisis se desarrollará más adelante.

En materia laboral también se hace presente el arbitraje, la Ley Orgánica del trabajo del año 1997 y su Reglamento (ya derogadas) albergaban en su seno al arbitraje como medio para solucionar conflictos colectivos surgidos con motivo de la relación de trabajo. Sin embargo, la normativa vigente ha sido dictada con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Nacional de 1999.

En la actualidad, tanto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT, 2002), como el novísimo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT, 2012), contemplan un conjunto de normas que tratan sobre el arbitraje.

Mención importante merece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; cuya finalidad por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresado en la Disposición Transitoria Cuarta, Numeral 4°, es

reformular el régimen adjetivo en materia laboral, para que asegure el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, en aras a la protección de los trabajadores, para garantizar el acceso a una justicia expedita y eficaz. Con su modificación más importante que es la sustitución del proceso escrito por un proceso oral.

Como nota importante y característica del procedimiento arbitral en la LOPT, se encuentra, que el sometimiento a arbitraje (no la cláusula compromisoria) ocurre en la audiencia preliminar, en la cual, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución debe promover la conciliación y el arbitraje (artículos 133 y 135 LOPT), y en caso de que este sea solicitado por las partes (artículo 138), deberá proceder a la conformación de la junta arbitral. En este sentido, se desprende que la conciliación es una etapa previa, obligatoria para dar curso al procedimiento arbitral.

De igual modo, el procedimiento arbitral en sede laboral a tenor de lo establecido en el texto legal in comento, presenta otras peculiaridades, que en vez de favorecerlo son consideradas como obstáculos para su promoción.

Por una parte, debe constituirse obligatoriamente una junta arbitral por el juez y no por las partes, con el fin de resolver el conflicto encomendado en arbitraje, que se traduce en mayores gastos para las partes; y por la otra, aunque se suprime el recurso de apelación como en el arbitramiento regulado por el Código de Procedimiento Civil, se abre las puertas al recurso de casación, por las causas tasadas en el artículo 149 LOPT, con todas las eventualidades que el mismo implica desnaturalizando la institución arbitral, que como regla general sólo admite el recurso de nulidad.

Cabe destacar, que en la Exposición de Motivos de la Ley adjetiva laboral se explica que la razón principal de esta novedosa forma de constituir la junta de arbitraje obedece a la imparcialidad que necesariamente debe poseer los especialistas que integran la lista del Tribunal Supremo de Justicia.

En cuanto al laudo arbitral, deberá dictarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la constitución de la Junta de Arbitraje. La LOPT no regula lo relacionado con la publicación del laudo y la vigencia del mismo, pero señala deberá ser dictado conforme a los principios generales de la Ley que se señalan en su artículo 2. *“Artículo 2: El juez orientará su actuación en los principios de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad.”*

En lo referente a este documento legal; puede decirse en principio que promociona al arbitraje como un medio alternativo para la resolución de conflictos; sin embargo, vemos como se suprime el principio de autonomía de la voluntad de las partes como eje del sistema arbitral, dada la marcada injerencia del Juez de Sustanciación, Mediación y ejecución, quien es el que debe seleccionar los árbitros de una lista asignada por el Tribunal Supremo de Justicia, suprimiéndole esa facultad a las partes, que forma parte de la naturaleza misma del arbitraje; de modo que tales intromisiones hacen que el arbitraje no parezca un medio alternativo, sino más bien otro procedimiento como viene estructurado en la ley, que a su vez es llevado en sede judicial.

Al respecto, Meza y Navarro (2004, p. 9), aseveran:

“En consecuencia, si se niega a las partes la facultad de designar los árbitros, y, además, aquellas también desconocerán quiénes

puedan resultar electos como tales, creemos que el arbitraje previsto en la LOPT podría terminar en la práctica generando mayor incertidumbre que expectativas favorables para que el mismo sea acogido por las partes en conflicto. Por ello, aunado al hecho de que el arbitraje resultará más costoso que el proceso laboral tramitado judicialmente porque implicará también el pago de los honorarios de los árbitros, al tiempo que limita a las partes los recursos de que pueden hacer uso pues en lugar de dos instancias más el recurso de Casación y el eventual Recurso de Control de Legalidad, en el arbitraje sólo cabría la posibilidad del Recurso de Casación, creemos que la utilización del arbitraje para resolver las controversias laborales podría resultar siendo escasa.”

También es cuestionable, que necesariamente deba constituirse una junta arbitral, toda vez que de plano niega la posibilidad de que un solo árbitro resuelva el conflicto, que perfectamente podría ser pactado por las partes; lo cual se traduce en mayores gastos, ya sea para las partes o para el Estado; en caso de que el trabajador solicite el arbitraje y no pueda costear los honorarios fijados, como lo estipula el único aparte del artículo 143 que establece expresamente *Artículo 43: “... Si el arbitraje es solicitado por el trabajador y éste no pudiere pagar los honorarios fijados, serán pagados por el Estado”*.

Cabe destacar, que la Ley adjetiva in comento, no contiene disposiciones específicas que regulen la ejecución del laudo arbitral en sede laboral, por lo que debe seguirse el procedimiento de ejecución de sentencias previsto en su Título VII, Capítulo VIII, artículos 180 y siguientes, que remite supletoriamente a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil aplicables a la ejecución de las sentencias, siempre que no sean contrarios a los principios de brevedad, oralidad, inmediación y concentración establecidos en la ley.

Igualmente, la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT, 2012), en el Título VII, Capítulo III de la Sección Cuarta, en los artículos 465 y 492, contempla la posibilidad de acudir al arbitraje, en sede administrativa en los siguientes casos:

- Cuando en la reunión normativa laboral que se realiza con el fin de acordar una convención colectiva determinada, no culmine con un acuerdo y no sea posible la mediación, en cuyo caso el ministerio del Poder Popular con competencia en materia del trabajo y seguridad social, a solicitud de parte o de oficio someterá el conflicto a arbitraje, salvo que se ejerza el derecho a huelga, conforme al artículo 465 LOTT; en tales casos el laudo arbitral surte los mismos efectos tal cual la convención colectiva.
- En caso de huelga que ponga en peligro la seguridad de la población o parte de ella, en cuyo caso el ministerio del Poder Popular con competencia en materia del trabajo mediante resolución motivada, dará por terminado el procedimiento conflictivo y por tanto la huelga, sometiendo el conflicto a arbitraje obligatorio, tal como lo dispone el artículo 492 eiusdem.

De modo, que en caso de que un conflicto colectivo se someta arbitraje ya sea voluntario o obligatorio; se designará una junta de arbitraje compuesta por tres miembros, que serán designados de la siguiente manera: Un (01) árbitro por parte de los trabajadores, otro árbitro por parte el patrono; y un tercero designado por ambas partes, que admite en caso de no existir acuerdo que intervenga la Inspectoría de Trabajadores.

Este Decreto con Fuerza de Ley Orgánica, en cuanto al laudo arbitral señala en el artículo 494 en su parte in fine, que será el resultado de la decisión tomada por la mayoría de votos y para que surta sus plenos efectos como una convención colectiva a la cual se asemeja, debe ser homologado mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del trabajo y seguridad social, resolución que deberá publicarse en Gaceta Oficial.

De la misma manera, en el año 2001, en Venezuela se comenzó a modernizar el sistema jurídico tributario. En este contexto, el arbitraje se presenta como esa opción diferente, diversa, y en muchas ocasiones efectiva y eficiente en las actividades mercantiles; el Código Orgánico Tributario (2001), desarrolla el arbitraje en el contencioso tributario; en el Capítulo VI, denominado “DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO” contenido en el Título VI “DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES”, artículos 312 al 326.

El arbitraje en este caso, podrá proponerse y deberá acordarse una vez interpuesto y admitido el recurso contencioso tributario. Las partes de mutuo acuerdo formalizarán el arbitraje en el mismo expediente de la causa, debiendo expresarse con claridad las cuestiones que se someterán al conocimiento de los árbitros. Siendo muy clara la norma contenida en el artículo 313 al señalar que por vía del arbitraje no podrán reabrirse los lapsos para la interposición de los recursos administrativos y judiciales que hubieren caducado por inactividad del contribuyente o responsable.

En cuanto al tema que compete sobre la ejecución del laudo, indica el artículo 321 del Código Orgánico Tributario, que corresponderá a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario y para ello se aplicarán

las normas de ejecución de sentencia contenidas en la Sección Quinta, Capítulo I, Título VI del Código Orgánico Tributario.

Al referirse al laudo arbitral, dispone el artículo 322 del Código Orgánico Tributario que los árbitros deberán dictar su decisión en el lapso de seis (06) meses contados a partir de la constitución del tribunal arbitral, lapso que podrá ser prorrogado hasta por igual tiempo a petición de parte o de oficio. El laudo será publicado al día siguiente de ser consignado por los árbitros ante el Tribunal Superior Contencioso Tributario a quien corresponderá también su ejecución.

Este texto legal, no incluye variaciones en materia de ejecución del laudo arbitral tributario, sigue la línea de todos los textos legales en consagrar el laudo arbitral como de obligatorio cumplimiento; sin embargo, presenta algunas cuestiones especiales en aspectos relevantes.

En primer lugar, sólo consagra el arbitraje independiente, de derecho, y colegiado; en segundo lugar, exige que el conflicto deba estar en etapa judicial para que se pueda proponer y llevar a cabo el arbitraje, lo cual es criticable ya que los medios alternos de resolución de conflictos buscan una solución para evitar las controversias judiciales; y en tercer lugar, en cuanto a los recursos, admite el recurso de nulidad y la interposición del recurso de apelación, el cual está supeditado no a las razones procesales que normalmente lo inspiran, sino a la existencia de una decisión no unánime; lo cual rompe el esquema tradicional moderno de inapelabilidad del los laudos arbitrales.

Sin embargo, es importante resaltar que el legislador en materia tributaria se había mostrado reacio a permitir la utilización del arbitraje, pero dadas las modernas corrientes que apuntan a los medios alternos de justicia como fórmula favorable para resolver conflictos; y al rango constitucional que en el ordenamiento jurídico venezolano se les reconoce, se legisla sobre el arbitraje en este campo que ha sido considerado como ortodoxo y donde existía tanta celosía. En relación al arbitraje tributario comenta Bóveda (2004, p. 302), lo siguiente:

“El arbitraje tributario en Venezuela alcanzará sus objetivos si resulta en mayor celeridad, eficiencia, sencillez, transparencia, menor formalidad, reducción de costos, facilidad en la producción de pruebas, confiabilidad y eficacia en la obtención de resultados. Es decir, si satisface los intereses generales y beneficia al Fisco y a los contribuyentes, al lograr una decisión equitativa e imparcial en menor tiempo. El arbitraje tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si las ventajas que ofrece no son aprovechadas, sus desventajas (como podrían ser los elevados costos y honorarios de los árbitros y la eventual apelación en casos de decisiones no unánimes) pueden conducir a un gradual rechazo como método alternativo para resolver disputas tributarias.”

La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (2001), también contiene normas que interesan al arbitraje. En su contenido promueve la Integración de las Cooperativas, que es definida en el Capítulo VIII, artículo 55 como un proceso económico y social, dinámico, flexible y variado que se desarrolla entre las cooperativas, entre éstas y los entes de la Economía Social y Participativa, y con la comunidad en general. Asimismo, en el artículo 60 contempla los organismos de integración de la siguiente manera:

Artículo 60: Los organismos de integración, constituidos por las cooperativas y otros entes de la Economía Social y Participativa, son entes cooperativos, de hecho y derecho y tienen como finalidades:

- 1. La representación de sus afiliados.*
- 2. La articulación, coordinación y ejecución de políticas y planes de sus afiliados.*
- 3. La coordinación de los sistemas de: conciliación y arbitraje, auditorías, vigilancia y control, estadísticas, comunicación e información y el de reconocimiento y acreditación de educación cooperativa.*
- 4. Los organismos de integración podrán para el cumplimiento de sus finalidades realizar actividades de carácter técnico, educativo, económico, social y cultural.*

Igualmente, en el artículo 61 prevé que los organismos de integración pueden establecer sistemas de arbitraje que pueden resolver sobre los siguientes particulares: 1. Las impugnaciones que los asociados de las cooperativas hicieren acerca de los actos de cualesquiera de las instancias por presunto incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, el estatuto y otras normas de la misma cooperativa. 2. Los reclamos que los asociados hicieren a sus cooperativas en relación con su trabajo, por presunto incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, el estatuto y demás normas de la cooperativa. 3. Los reclamos y conflictos en el proceso de integración.

Esta Ley contempla el arbitraje para resolver las controversias que se susciten en las materias antes señaladas, y en el mismo artículo 61 señala que las normas de los sistemas de conciliación y arbitraje, u otros mecanismos, se establecerán en el estatuto y reglamentos internos. Se trata de una ley que no pone mayores límites al sistema arbitral, sino que deja a voluntad de los asociados el desarrollo de las normas que regule al arbitraje, que podrá ser institucional o independiente, de derecho o de equidad, aquí juega un papel fundamental el principio de autonomía de la voluntad de las

partes quienes son las que van a crear sus propias normas para resolver el conflicto por la vía del arbitraje.

Las decisiones finales que alcancen los sistemas de conciliación y arbitraje, serán inapelables y de obligatorio cumplimiento para las partes. Contra ellas sólo procederá el recurso de nulidad, el cual deberá interponerse por escrito, independientemente de la cuantía del asunto, ante el tribunal competente del lugar en donde se hubiese dictado el laudo arbitral, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

Como bien se dijo, esta ley deja a voluntad de las partes la manera cómo va a ser desarrollado el arbitraje, en vista de lo cual; no hace mención al laudo arbitral y su ejecución, cuyas normas deberán desarrollarse en los estatutos o reglamentos internos que los socios establezcan.

Sin embargo, en la práctica las asociaciones cooperativas poco optan por el arbitraje, pues al ser las cooperativas asociaciones autónomas de personas que voluntariamente unen esfuerzos para hacer frente a las necesidades económicas mediante el trabajo en equipo, organizadas democráticamente, y basadas en la confianza de sus miembros que por regla general presentan las mismas condiciones e intenciones de superación, es poco frecuente que los socios se enfrenten entre sí recurriendo al arbitraje; por cuanto de su organización interna derivan procedimientos de control, como es el caso del procedimiento de suspensión o exclusión de socios a que se refiere el Capítulo IX, que es a la vía a que normalmente acuden ante una situación de inconformidad que dificulte su armonía, quedando a salvo las sanciones legales a que en definitiva haya lugar.

Igualmente, el Decreto Con Rango y fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones (1999), contempla el arbitraje, en esta importante materia que hoy está en pleno auge; al respecto comenta Tejera (2008. p. 146) que:

“..Hasta hace relativamente poco tiempo, eran muy pocos quienes en el mundo entero conocían el llamado ‘arbitraje de inversiones’ y mucho menos quienes lo manejaban técnicamente. De modo general podemos decir, que mediante este tipo de arbitraje se solucionan las controversias entre inversionistas nacionales de Estados extranjeros y los Estados receptores de la inversión. Es decir, este ángulo del arbitraje internacional es el que primordialmente resuelve las controversias relacionadas con la inversión extranjera...”

Esta controvertida Ley juega un papel importante en el ordenamiento jurídico venezolano, por cuanto abarca cuestiones de marcada importancia como es las inversiones internacionales en el país. Así en su artículo 21 prevé la posibilidad de que las controversias con gobiernos inversionistas extranjeros sean sometidas a arbitraje, el artículo 22 concede a los inversionistas el derecho de someter las controversias a arbitraje internacional y, el artículo 23 otorga a los inversionistas el derecho a someter las controversias a arbitraje en Venezuela. Así establecen los mencionados preceptos:

“Artículo 21: *Cualquier controversia que surja entre el estado venezolano y el país de origen del inversionista internacional con el cual no se tenga vigente un tratado o acuerdo sobre inversiones, en relación con la interpretación y aplicación de lo previsto en el presente Decreto-Ley, será resuelta por vía diplomática. Si no se llegase a un acuerdo dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de inicio de la controversia, el estado venezolano propiciará el sometimiento de la controversia a un Tribunal Arbitral cuya composición, mecanismo de designación, procedimiento y régimen de gastos serán acordados con el otro*

Estado. Las decisiones de ese Tribunal Arbitral serán definitivas y obligatorias

Artículo 22: *Las controversias que surjan entre un inversionista internacional, cuyo país de origen tenga vigente con Venezuela un tratado, o acuerdo sobre promoción y protección de inversiones, o las controversias respecto de las cuales sean aplicables las disposiciones del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI – MIGA) o del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), serán sometidas al arbitraje internacional en los términos del respectivo tratado o acuerdo, si así éste lo establece, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso, cuando proceda, de las vías contenciosas contempladas en la legislación venezolana vigente.*

Artículo 23: *Cualquier controversia que suscite en relación con la aplicación del presente Decreto-Ley, una vez agotada la vía administrativa por el inversionista, podrá ser sometida a los Tribunales Nacionales o a los Tribunales Arbitrales venezolanos a su elección.”*

Esta es la base legal para acudir al arbitraje de inversiones; sin embargo, en la práctica se ha presentado varios inconvenientes cuando se trata de contratos públicos o contratos de Estado; que de acuerdo al artículo 150 Constitucional pueden ser considerados como contratos de interés público nacional, para lo cual el artículo 18 de Ley in comento estipula que las controversias que surjan entre las empresas o inversionistas que suscriban los contratos de estabilidad jurídica y el Estado venezolano, a propósito de la interpretación y aplicación del respectivo contrato, pueden ser sometidas a arbitraje institucional de conformidad con lo previsto en la Ley de Arbitraje Comercial.

En cuanto a las disposiciones transcritas, aduce Brewer Carías:

“Debe recordarse que de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución, si bien en todos los contratos públicos aún cuando no esté expresamente en el texto del los mismos, debe considerarse incluida una cláusula conforme a la cual las controversias que puedan surgir de su ejecución que no puedan ser resueltas amigablemente entre las partes, deben ser decididas por los tribunales competentes venezolanos de acuerdo con la ley venezolana; en la misma norma se establece la excepción respecto de contratos públicos en los cuales, por ‘su naturaleza’, dicha cláusula no sea procedente. En virtud de esta excepción, en Venezuela se abandonó el sistema absoluto de inmunidad de jurisdicción, sustituyéndose por el principio de la inmunidad relativa permitiéndose entonces la posibilidad de que los entes públicos, como consecuencia de la ejecución de ciertos contratos públicos, puedan estar sometidos a jurisdicciones extranjeras o a arbitraje e incluso a la legislación extranjera, como sucede con muchos contratos públicos en relación con la industria petrolera o la Ley de protección de inversiones”. (2005, p. 288)

Tal posición es reforzada por Tejera (2008, p.148), quien señala:

“Esto supone de parte de los Estados - y Venezuela no es la excepción - abandonar el régimen de inmunidad absoluta de la jurisdicción, especialmente arraigado entre países de nuestro subcontinente, lo que básicamente implica que los Estados soberanos sólo pueden ser demandados ante sus propios tribunales y bajo sus propias leyes. Es decir, supone apartarse de la ya tradicional doctrina ‘Calvo’ incluida en nuestras constituciones desde hace ya unas cuantas décadas. En efecto, la Constitución venezolana de 1999 contiene una modalidad, aunque relativa, de cláusula ‘Calvo’ (art. 151) pues la propia norma contiene una excepción inherente a la naturaleza del contrato”.

Los inconvenientes surgidos radican en que aunque la Ley establece el acceso al arbitraje internacional, se ha querido hacer ver bajo la norma contenida en el artículo 22 antes transcrito, una sumisión por parte de Venezuela al arbitraje, bajo al compromiso de someter las disputas a

arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones CIADI, (convenio del cual ya no es parte Venezuela, a partir de Enero de 2012), donde influyó la polémica surgida en varios casos como en Cemex ExxonMobil, Brandes Investment Partners, LP; donde el Tribunal arbitral llegó a la conclusión que la Ley de Protección de Inversiones Venezolana no compromete al Gobierno de Venezuela a permitir que las disputas se sometan a arbitraje en el CIADI.

En la doctrina Venezolana, hay quienes consideran que se desprende la sumisión del Estado venezolano al arbitraje, mediante una interpretación literal u objetiva del contenido del artículo 22 de la citada ley, según el cual “...*las controversias serán sometidas a arbitraje internacional*”, lo que significa de hecho, una referencia imperativa al arbitraje, que evidencia el consentimiento de la República de resolver controversias que surjan con inversionistas internacionales a través de arbitraje CIADI. Hernández-Bretón: (2005. p. 283).

Al efecto, el artículo 22 antes transcrito, no puede interpretarse en el sentido de que contenga una manifestación de voluntad o consentimiento por parte del Estado venezolano al sometimiento de las controversias a arbitraje, pues de ser así todas las controversias que se susciten entre los inversionistas extranjeros y el Estado venezolano deberían forzosamente resolverse por esta vía, excluyendo los demás medios de solución de conflictos, y negando las mismas opciones que claramente señala el artículo en su parte final cuando alude a “*las vías contenciosas contempladas en la legislación venezolana vigente.*”

La interpretación del referido artículo 22, conlleva a concluir que:

“La inflexión verbal imperativa ‘SERAN’, empleada en el artículo antes transcrito, no puede ser tomada en su sentido gramatical estricto. Si así se interpretara no quedaría ningún conflicto entre inversionistas extranjeros y el Estado, que no debiera ir al arbitraje, (...) Los propios términos del artículo destruyen la pretensión de que él contenga una aceptación general anticipada de arbitraje. Se puede afirmar, tajantemente que no la contiene (...) si no hay ninguna manifestación expresa de consentimiento, este no se puede presuponer o inferir”. (Rondón, 2010, p. 366-367).

En el mismo sentido, conforme al artículo 155 de la Constitución Nacional, resulta absurdo señalar que en todo convenio de inversiones esté implícita la cláusula arbitral, por cuanto el citado precepto exige la inclusión expresa de la misma y porque la previsión del arbitraje en la citada Ley de Inversiones no conforma una manifestación de consentimiento, sino la posibilidad de acudir a este medio alternativo de justicia.

Se precisa en la propia Ley de Inversiones, en el artículo 5, que Venezuela puede celebrar tratados o acuerdos que pueden contener disposiciones que ofrezcan una protección más amplia a las inversiones que la prevista en la Ley, así como mecanismos de promoción de inversiones distintos a los en ella consagrados, en tal virtud Venezuela cuenta con una gran variedad de tratados suscritos y ratificados en materia de inversión vigentes hoy en día con países como Alemania, Argentina, Barbados, Belarús, Bélgica, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, la República Checa, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Holanda, Italia, Irán, Lituania, Luxemburgo, Paraguay, Perú, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza y Uruguay.

Con respecto al CIADI, el 24 de enero de 2012 Venezuela formalizó ante el Banco Mundial la denuncia del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados del año 1966, el cual instituye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del cual Venezuela formaba parte desde el año 1993.

La jurisprudencia patria de la Sala Constitucional, vinculante en cuanto a este particular, en Sentencia N° 1.417 de fecha, 17 de octubre de 2008, señaló que:

“...la Ley sobre Promoción y Protección de Inversiones no contiene en sí misma una manifestación unilateral general de sometimiento al arbitraje internacional regulado por el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA) o el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI) (...). Una interpretación del artículo 22 de la Ley sobre Promoción y Protección de Inversiones, que concluya que el mismo realizó una oferta general en materia de inversiones extranjeras para someterse a los procedimientos del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados llevaría al absurdo de considerar que el Estado no puede elegir un foro o jurisdicción de conveniencia o más favorable para sus intereses (Forum Shopping), ya que sometería todas sus controversias en materia de inversiones a las previsiones del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados y al Reglamento del Mecanismo Complementario en violación del principio de buena fe y del principio indubio mitius.”

En cuanto a la ejecución del laudo arbitral, la referida Ley sigue la línea de la mayoría de los textos legales al no contemplar previsiones específicas, sólo

se limita a reconocer al arbitraje como medio para la solución de controversias en el Capítulo VI.

Asimismo, el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones (1999), que prevé el régimen jurídico de esos contratos administrativos, contempla en el primer aparte del artículo 61 el arbitraje, en el sentido de que las partes pueden someter a la decisión de una junta arbitral los conflictos que surjan con motivo de la ejecución, desarrollo o extinción de los contratos regulados por dicha Ley. En cuyo caso la composición, competencia, procedimiento y derecho aplicable serán determinados de mutuo acuerdo por las partes, de conformidad con la normativa que rige la materia adquiriendo la decisión adoptada carácter definitivo.

De allí, que corresponde a las partes determinar las reglas de procedimiento a seguir para tramitar el arbitraje, y en materia de ejecución del laudo arbitral rigen en todo caso para la ejecución forzosa de los laudos las pautas previstas en el Código de Procedimiento Civil, en atención a las reglas convenidas por las partes.

De la misma forma, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (1999), el Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (2000), la Ley Orgánica de Hidrocarburos (2006), y el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas (1999) contienen disposiciones que aceptan expresamente el arbitraje como mecanismo idóneo para la resolución de conflictos; sin embargo, sólo se limitan a su reconocimiento, pero no hacen alusión a reglas de procedimiento ni en modo alguno al laudo arbitral ni a su ejecución.

Estos textos legales contemplan la previsión de que se considera implícita la condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la realización de actividades de hidrocarburos, o actividades de la concesión (en el caso de la Ley de Minas) que no puedan ser resueltas amigablemente por ambas partes, incluido el arbitraje, serán decididas por los Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.

Igualmente en Venezuela, encontramos en algunas leyes los denominados procedimientos administrativos arbitrales, los cuales no se refieren a un arbitraje propiamente dicho sino al uso de un mecanismo de naturaleza arbitral en el marco de un procedimiento administrativo común; en tales procedimientos la Administración Pública se erige como árbitro, pero no es parte en conflicto. El procedimiento administrativo arbitral funciona en los denominados procedimientos triangulares en los cuales la Administración decide controversias suscitadas entre los administrados que versen sobre derechos privados o administrativos de éstos.

Este procedimiento no nace de un acuerdo arbitral previo, sino que es aplicado por mandato legal para solventar conflictos actuales llevados por la Administración y no culmina con un laudo arbitral propiamente dicho, sino con un acto administrativo propio de todo procedimiento administrativo.

Tal es el caso de lo previsto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000), la cual atribuye a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) funciones de árbitro en la solución de conflictos suscitados entre los operadores de servicios, cuando ello

sea solicitado por las partes involucradas o ello se derive de la aplicación de la Ley conforme al numeral 23 del artículo 37. Igual sucede en la Ley Sobre el Derecho de Autor (1993) y en la Ley de la Actividad Aseguradora (2010).

La Ley Sobre el Derecho de Autor, establece la posibilidad de someter a arbitraje las controversias que se susciten entre las entidades de gestión de los derechos autorales y las organizaciones de usuarios o las empresas de radiodifusión, con motivo del monto de las tarifas establecidas por tales entidades que deberán ser cobradas en los casos de comunicación pública de las obras, conforme al artículo 62 en concordancia con el artículo 130 numeral 6º. El carácter de árbitro corresponde a la Dirección Nacional del Derecho de Autor; y como no contempla un procedimiento especial para estos casos, en el artículo 131 remite al procedimiento breve contemplado en el Código de Procedimiento Civil para su tramitación.

En el mismo orden de las ideas, en el año 2001, con la promulgación del Decreto con Fuerza de Ley N° 1.545, por el cual se dictó el Decreto Fuerza de Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, se incorporó igualmente la figura del arbitraje prevista en la ley del año 1995; sin embargo, luego del ejercicio de un Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad con medida cautelar, el Tribunal Supremo de Justicia decidió la admisión de tal Recurso y el otorgamiento de una medida cautelar mediante la cual se suspenden los efectos de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros promulgada en el año 2001, quedando vigente nuevamente la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del año 1995.

Transcurrido siete (07) años de la suspensión del citado Decreto y, considerando el crecimiento sostenido de la economía nacional y en

particular del sector asegurador, es por lo que la Asamblea Nacional sancionó la Ley de la Actividad Aseguradora Gaceta Oficial N° 5.990 Extraordinario del 9 de julio de 2010, que derogó la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del año 1995 y el Decreto con Fuerza de Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del año 2001.

Esta ley regula el arbitraje en el artículo 133, que textualmente dice:

“Artículo 133: El o la Superintendente de la Actividad Aseguradora podrá actuar como conciliador o árbitro arbitrador en aquellos casos de conflicto entre los sujetos regulados por la presente Ley y los tomadores, asegurados o beneficiarios del seguro o contratantes de planes o servicios de salud, de conformidad con las normas previstas en su Reglamento y las normas prudenciales que se dicten al efecto.”

Así pues, la referida Ley, prevé el arbitraje voluntario en sede administrativa, y atribuye el carácter de arbitro arbitrador al o a la Superintendente de la Actividad Aseguradora, tal como se depende del numeral 40 del artículo 7 de la citada Ley, correspondiendo la coordinación de los procesos de arbitraje, a la Dirección Legal de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora; conforme al numeral 16 del artículo 13 del Reglamento Interno de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de fecha 5 de diciembre de 2011, otorgándole la ley la facultad para resolver mediante arbitraje las controversias que se susciten entre los sujetos regulados y entre éstos y los tomadores, asegurados, beneficiarios de seguros, contratantes de medicina prepagada, asociados y las financiadoras de prima, cuando las partes lo hayan establecido de mutuo acuerdo.

Asimismo, el arbitraje que regula es un arbitraje de carácter triangular, en el cual a petición de las partes en conflicto, el Superintendente de la Actividad Aseguradora, actuará como árbitro arbitrador, para resolver la controversia planteada, sobre aquellas materias en que sea procedente.

En ese supuesto, las partes podrán escoger el procedimiento a seguir, aplicando supletoriamente la regulación vigente en materia de arbitraje. Pero la referida Ley, no establece el procedimiento a seguir en casos en los que las partes no lo hagan, sin embargo; aún se encuentra vigente el Reglamento de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, publicado el 27 de abril de 1999, que en el Capítulo II, Sección IV, establece el procedimiento de arbitraje, y en cuanto a la ejecución el laudo arbitral como expresamente señala, establece el artículo 27 del reglamento, los siguientes particulares:

- El laudo puede ser cumplido voluntariamente por la parte que resulte vencida.
- De no ser cumplido voluntariamente, por remisión del mismo artículo 27, el procedimiento a seguir es el de ejecución de sentencias previsto en el Código de Procedimiento Civil, de modo que no ha habido una supresión de la potestad discrecional dada el interesado de presentar el laudo para que fuere ejecutado por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el Código de Procedimiento Civil.
- La solicitud de ejecución del laudo, deberá realizarse ante el juez del domicilio de la persona contra la cual habrá de ejecutarse y que sea competente en razón de la cuantía, ya no se trata del juez que hubiere conocido en Primera Instancia el asunto sometido a arbitraje, sino que

además debe ser el juez del domicilio de la parte contra quien obre la ejecución del laudo.

- Cuando la parte que haya sido declarada perdidosa por el laudo, sea una empresa de seguros, la Superintendencia de Seguros, (hoy Superintendencia de la Actividad Aseguradora); remitirá al juez competente el listado de los bienes sobre los cuales podrá ejecutarse la decisión, si ésta no fuese cumplida voluntariamente; lo cual constituye una regla excepcional en materia de ejecución, ya que no es el ejecutante quien indica al juez los bienes sobre los cuales hará efectivo el derecho reconocido en el laudo, como prevé el artículo 534 del Código de Procedimiento Civil.

Es preciso indicar, que la Ley de la Actividad Aseguradora, al haber incorporado nuevas materias en su normativa, debe ser abordada por el Ejecutivo Nacional, quien deberá establecer el nuevo procedimiento reglamentario que entre a conformar *“las normas prudenciales que se dicten al efecto”*, como lo preceptúa la parte final del artículo 133 arriba transcrito, ya que la sección IV del capítulo II del reglamento vigente no contiene, realmente pautas procedimentales concebidas con un grado suficiente de detalle.

En igual forma, el reglamento actualmente en vigor carece de regulación para aquellos casos en los cuales existe un acuerdo de arbitraje previo, ya que la escasísima regulación adjetiva reglamentaria presupone que se trate de un arbitraje en el cual las partes, que ya están enfrentadas en una controversia, aceptan suscribir un documento mediante el cual someten a arbitraje los puntos concretos en discusión, lo que no siempre ocurre, ya que

alguna de ellas puede negarse a suscribir el compromiso arbitral previsto en el artículo 24 del reglamento vigente, a pesar de haber celebrado previamente un acuerdo arbitral, caso en el cual este resultaría inaplicable.

Analizadas las diversas leyes vigentes en el ordenamiento jurídico venezolano que contemplan al arbitraje como medio alternativo para la resolución de conflictos, es evidente que el legislador patrio ha dado preeminencia al principio Pro Arbitraje; al materializar diversos cuerpos normativos que apuestan por el mismo como medio idóneo para la resolución de las controversias. Sin embargo, del contenido de tales leyes se evidencia que sólo se limita a consagrar el arbitraje sin prever un procedimiento para desarrollar al mismo, o se limitan a remitir al Código de Procedimiento Civil o a la Ley de Arbitraje Comercial; pero lo que más llama la atención, es que a consecuencia de ello; son escasas las normas que regulan la ejecución del laudo arbitral siendo cada vez más numerosas las dudas en torno al tema.

D. Tratados suscritos y ratificados por Venezuela en materia de ejecución del laudo arbitral.

En materia de ejecución de laudos arbitrales extranjeros, juega un papel determinante los tratados o convenios suscritos y ratificados por la República; al ser ellos los que marcan las pautas para que el laudo no quede ilusorio.

Venezuela, en el ámbito internacional; forma parte de un conjunto de tratados que promueven la resolución alternativa de los conflictos mediante la figura del arbitraje. En este sentido, la República ha suscrito, aprobado y ratificado diversos Tratados, que la ubican entre los países promotores y afines con el arbitraje, convirtiéndola en lo que comúnmente se denomina *foro amigable*, dentro de los cuales cabe destacar:

La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros, suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979 (Convención de Montevideo), Gaceta Oficial N° 33.144 del 15 de enero de 1985. Con más de 27 años de vigencia en el ordenamiento jurídico Venezolano, esta convención fue producto de la necesidad de mutua cooperación de los estados americanos, para asegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales, dictados en sus respectivas jurisdicciones territoriales.

Según el artículo 1 de la mencionada Convención, esta se aplica a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en los Estados parte, las normas de la Convención son aplicables a los referidos laudos arbitrales, en todo lo no previsto en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional del año 1975, también conocida como Convención de Panamá.

En cuanto al laudo arbitral, además de marcar diferencia en relación al laudo arbitral comercial a cuyo efecto no se aplica esta Convención; prevé el artículo 2 los requisitos que el mismo debe cumplir para que surta eficacia en los Estados partes de la convención, siendo los siguientes:

“Artículo 2: Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las condiciones siguientes:

- a. Que vengán revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden;*
- b. Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto;*
- c. Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto;*
- d. Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto;*
- e. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto;*
- f. Que se haya asegurado la defensa de las partes;*
- g. Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados;*
- h. Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución.”*

Este artículo contempla una serie de requisitos que debe cumplir el laudo arbitral extranjero para que surta efectos en el país, requisitos que atiende a las garantías mínimas que debe cumplir toda sentencia para ser válida, legalización, autenticación de la sentencia original o de la copia, traducción oficial si la sentencia se dictó en idioma distinto al del Estado donde se invoca la eficacia y cumplimiento, la notificación al demandado en forma legal y haberle garantizado el derecho de defensa, constancia de la ejecutoria de

la sentencia y que en ningún caso la sentencia contraría normas de orden público del Estado donde se solicite su cumplimiento.

Igualmente, la referida Convención; a los fines de que la parte gananciosa no vea enervado su derecho a ejecutar el laudo arbitral, contempla la posibilidad de que aún cuando un laudo no pueda ser ejecutado en su totalidad; lo pueda ser en forma parcial, claro está siempre y cuando revista las garantías mínimas de validez y medie petición de parte interesada, tal como lo estipula el artículo 4, lo cual se encuentra en armonía con el artículo 54 de la ley de Derecho Internacional Privado; que en su artículo 54, reconoce la eficacia parcial de la sentencia extranjera.

Esto marca la importancia que para el derecho internacional tiene la institución arbitral la cual se cimienta en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, cuyo fin perseguido es la resolución de una determinada controversia, mediante un laudo arbitral que tiene pleno valor como título ejecutivo y que le confiere a la parte gananciosa el derecho de exigir su cumplimiento.

Otro tratado que regula aspectos importantes acerca de la ejecución del laudo arbitral en Venezuela es el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones; Gaceta Oficial N° 4.634 Extraordinario, del 22 de septiembre de 1993; si bien no es un tratado exclusivo en materia de ejecución de sentencias o laudos arbitrales, por tratar cuestiones relativas a la garantía de inversiones; en el Anexo II, trata sobre el Arreglo de diferencias entre un miembro y el Organismo en virtud del Artículo 57, que trata de las cuestiones relativas a las diferencias entre el organismo y sus miembros, contemplando el arbitraje como medio para

solventar esas diferencias en el artículo 4, el cual contempla el procedimiento a seguir.

En relación al laudo señala, que debe emitirse por escrito y estar firmado mínimo por dos árbitros; haciendo énfasis en que el mismo será definitivo y obligatorio para las partes y no estará sujeto a apelación, anulación o enmienda; lo cual resulta interesante a la luz de su ejecución pues no está sujeto a recurso alguno que enerve su ejecutoriedad; sin embargo, el literal “i”, del citado artículo, contempla el mecanismo a seguir en aquellos casos en los cuales se presentare alguna objeción con respecto al significado o alcance del laudo arbitral en cuyo caso, dentro de los sesenta (60) días después de dictarse el laudo cualquiera de ellas puede pedir interpretación del mismo mediante solicitud por escrito al Presidente del Tribunal que dictó el laudo.

Si bien es cierto, se niega la posibilidad del recurso de apelación o nulidad; no es menos cierto que ante cualquier discrepancia sobre el laudo arbitral, por escrito puede pedirse la interpretación del mismo al Presidente del Tribunal arbitral. Tal solicitud debe hacerse en el lapso perentorio de sesenta (60) días contados a partir de la notificación respectiva.

Como punto importante, cabe destacar, que la interpretación que se solicite solamente debe versar sobre el significado o alcance del laudo, no se trata de dictar un nuevo laudo ni de modificar sobre lo decidido, ni mucho menos a cuestionar su validez; sino de una aclaratoria ante la falta de claridad y concisión del mismo; se trata de una especie de complemento que aclare los términos en los cuales fue dictado, y que aunque no lo diga la Convención, una vez producida tal aclaratoria, la misma forma parte del fallo, en vista de

que el mismo debe ser autosuficiente para su ejecución tal como ocurre con su equivalente que es la sentencia.

La Convención in comento, prevé la posibilidad de que la junta arbitral presente inconvenientes para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, caso en el cual; primero si fuere posible, el Presidente presentará la solicitud al Tribunal que dictó el laudo y le convocará dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de la solicitud y, segundo, si no fuera posible, se constituirá un nuevo tribunal de conformidad con las disposiciones de la misma Convención.

En tal caso, la constitución de un nuevo tribunal arbitral en ningún modo debe entenderse como la constitución de la junta arbitral para dictar un nuevo laudo; sino que a los fines de garantizar a las partes una tutela efectiva de sus derechos en resguardo del derecho a la defensa que debe estar protegido en todo proceso, su labor deberá circunscribirse únicamente a la interpretación del significado y alcance del laudo arbitral.

Esto es comprensible y deducible del hecho de que expresamente se niega el recurso de apelación y el de nulidad, y debido a tal circunstancia, a la necesidad de brindar seguridad jurídica a las partes, y a fin de fomentar la confianza en el arbitraje como medio útil para dirimir conflictos, se prevé esta posibilidad de aclaratoria o interpretación del laudo, para que el mismo sea claro, lacónico, conciso, preciso, y no remita a dudas al momento de su ejecución, siendo tan imperativo que el tribunal arbitral podrá suspender la ejecución del laudo hasta que adopte una decisión sobre la interpretación solicitada como claramente señala la Convención, siendo un requisito indispensable para su firmeza.

Una vez firme el laudo, señala el literal j del artículo 4 del Anexo II, de la referida Convención

“j). Todo miembro reconocerá como obligatorio y ejecutable dentro de sus territorios un laudo dictado de conformidad con este Artículo, tal como si se tratase de sentencia definitiva de un tribunal de ese miembro. La ejecución del laudo se regirá por las leyes relativas a la ejecución de sentencias que se encuentren en vigor en el Estado en cuyos territorios se pretenda tal ejecución y no se entenderá como derogatoria de la ley vigente relativa a la inmunidad en materia de ejecución.”

La Convención sigue la corriente tradicional y predominante de equiparar el laudo con la sentencia judicial, el cual una vez firme debe ser reconocido como obligatorio y ejecutable por el estado miembro ante el cual se presente para su ejecución; a cuyo ordenamiento jurídico queda sometida la ejecución, siendo aplicables las normas sobre la ejecución de las sentencias.

En el mes de Octubre del año 2008, se celebró en Margarita, Nueva Esparta la III Cumbre de Presidentes de los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur; durante la cual discutieron temas de marcada importancia para el poder judicial entre ellos lo referente al narcotráfico, la extradición, el exhorto, y en especial sobre los medios alternativos de justicia; lo cual dio como resultado la llamada Declaración de Nueva Esparta; y la siguiente propuesta:

*“...PROPONEMOS a los Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, que se considere en el temario de sus reuniones: (...)
b) la creación de un centro de conciliación, mediación y arbitraje, que contribuya a la resolución de los conflictos que pudieran suscitarse con ocasión a las relaciones de los Estados miembros; y éstos y sus respectivos nacionales y los nacionales de otros*

países...” Declaración de Nueva Esparta, citada por Morales, (2011, p. 28).

La citada propuesta es de marcada importancia, por cuanto pretende la creación de un Centro de Conciliación, Mediación y Arbitraje, para que los Estados miembros puedan dirimir sus controversias, se trata de un centro especializado, que debe considerar los valores de los pueblos suramericanos buscando la armonía entre los mismos, en pro de la integración que han tomado como consigna; lo cual de concretarse sería de gran éxito, por cuanto se contaría con un centro especializado, un procedimiento y todo un sistema que atienda y promueva la operacionalización de los medios alternativos de resolución de conflictos, el cual perfectamente puede adoptar una normativa unificada vinculante en materia de ejecución de los laudos arbitrales y no dejarlos a la suerte de los diversos ordenamientos jurídicos que en la mayoría de los casos presentan diversos contrastes que amenazan con la inejecución de los mismos.

Morales (2011, p. 28); al respecto señala:

“...la propuesta elevada a la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) trasciende la necesidad común para justificar la creación de estas instancias o instituciones para la resolución de controversias, tales como la flexibilidad, celeridad y especialidad de los mismos y se erige como una respuesta para lograr que la integración suramericana sea alcanzada a través de un proceso innovador (...) que responda a las características propias de la región y que tenga como objetivo lograr el desarrollo sostenible de los Estados que conforman Unasur.”

No puede perderse de vista la propuesta contenida en la Declaración de Nueva Esparta, por cuanto la misma es el resultado de las exigencias sociales que han dado confianza a los medios alternos de justicia para dirimir sus controversias, de modo que tal expresión refrenda la necesidad de que esa propuesta se materialice, siendo importantísimo que los presidentes de los poderes judiciales de los países sean sus promotores; lo cual ratifica que se ha considerado a tales medios como parte de los sistemas de justicia, como expresamente lo ha hecho Venezuela en su Carta Magna, siendo ellos los portavoces de la colectividad que pide mayor celeridad, participación y dinamismo en los procesos de justicia.

Así pues, por un lado Venezuela se hace a un lado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), pero a su vez es parte de esa propuesta de creación de un Centro de Conciliación, mediación y Arbitraje en el seno de la Unión Suramericana de Naciones, que en respeto al principio de autonomía de la voluntad de las partes y a la Soberanía de las Naciones; debe considerarse como una oferta que invita al arbitraje y no como un mecanismo de imposición directa, dejando abierta la posibilidad de que sus miembros pacten el arbitraje y las materias que consideren puedan ser arbitrables.

Aunque Venezuela ratificó el Tratado de Derecho Internacional Privado, suscrito en la Habana en 1928, también conocido en el foro como Código Bustamante; a su vez reservó todas las disposiciones referentes al reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras (artículos 423 al 435), lo que excluye la aplicación de este capítulo, Guerra (2001, p. 467).

En el orden de las ideas anteriores, existen dos convenciones de marcada relevancia en materia de ejecución de laudos arbitrales, que han sido inspiradoras de leyes internas en diversos ordenamientos jurídicos; y que en el caso de Venezuela son parte del ordenamiento jurídico, y fungen como pilares fundamentales para la ejecución de laudos extranjeros; se trata pues de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958, también conocida Convención de Nueva York y la Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmada en Panamá el 30 de enero de 1975, también conocida como Convención de Panamá.

E. Influencia de la Convención de Nueva York y de la Convención de Panamá en la ejecución del laudo arbitral en Venezuela.

La Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, fue adoptada por las Naciones Unidas en el año 1958, y fue ratificada por Venezuela el 29 de diciembre del año 1994. Su objetivo primordial es facilitar la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros a través de normas claras y simples; y se aplica a los laudos arbitrales dictados en cualquier Estado ratificante distinto del país donde se promueve la ejecución, en términos simples su objetivo es facilitar la circulación internacional de los laudos arbitrales extranjeros.

Aunado a ello, sus normas han sido el marco de referencia de importantes documentos, como es el caso de la Ley Modelo Uncitral; que a su vez ha sido inspiradora de varias leyes en el orden interno de los países miembros, y en el caso de Venezuela es casi la reproducción exacta en la Ley de Arbitraje Comercial (1998).

Este instrumento reviste gran importancia en el ordenamiento jurídico venezolano, por dos razones importantes.

- 1- Tiene como finalidad que los acuerdos arbitrales sean exigidos según sus términos; es decir, protegen los pactos arbitrales legalmente constituidos para que sean cumplidos tal cual como fueron suscritos, y
- 2- Impone a los Estados ratificantes la obligación de ejecutar los laudos arbitrales dictados en países distintos a su sede, sin que sea necesario una revisión de fondo sobre los mismos.

Tales consideraciones son determinantes, porque los Estados contratantes; una vez pactado el compromiso arbitral, asumen la obligación de reconocerlo, lo cual le otorga seguridad jurídica. Ese rígido respeto a la cláusula arbitral, es lo que permite en principio recurrir al arbitraje, toda vez que impide la desviación hacia la vía judicial o hacia los tribunales judiciales para ventilar las controversias. La exigencia de la Convención de Nueva York como lo preceptúa en su artículo 2 es que debe tratarse de un acuerdo por escrito; es decir, una cláusula compromisoria susceptible de no dejar dudas para exigir su cumplimiento, y que bien puede estar contenida en un contrato o acuerdo bilateral, mediante canjes de carta o telegramas.

Así pues, una vez resuelta la controversia a través del arbitraje, juega otro papel fundamental la referida Convención, por cuanto el laudo arbitral que resulte viene impregnado de una garantía de cumplimiento palpable mediante el reconocimiento y ejecución al cual se comprometen los Estados miembros, quienes deben conceder su ejecución sin entrar a realizar observaciones de fondo; que amenacen con dejarlo en letra muerta.

De modo que, para obtener el reconocimiento del laudo la Convención exige algunos requisitos de forma como es el original o copia certificada de la sentencia que reúna los requisitos para su autenticidad, como sería la firma de los árbitros, el idioma castellano que es el oficial en Venezuela como lo establece el artículo 9 de la Constitución Nacional, entre otros. Asimismo, debe contener el acuerdo o cláusula compromisaria por la que las partes se comprometen a someter sus diferencias a arbitraje.

Bajo el amparo de esta Convención los Estados sólo podrán denegar el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, en los casos permitidos por el artículo V, que son:

“...Artículo V: 1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución del laudo, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:
a. Que las partes en el acuerdo arbitral estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la Ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la Ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya dictado la sentencia; o
b). Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa, o

- c). Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria (...); o*
- d). Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la Ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o*
- e). Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya Ley, ha sido dictada esa sentencia.*
- 2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide la ejecución comprueba*
- a). Que según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o*
- b). Que el reconocimiento o ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.*

Este artículo contempla lo que podría llamarse excepciones al reconocimiento y ejecución del laudo extranjero, que devienen de circunstancias inherentes al proceso mismo de arbitraje, tales como la falta de compromiso, violación a las reglas estipuladas para la constitución del tribunal arbitral, violación al derecho a la defensa como es la falta de notificación, que el laudo este sometido a alguna circunstancia que le niegue el carácter de firmeza como estar supeditado a un recurso de nulidad, entre otros que en ningún momento aluden al fondo de la controversia.

Particular importancia reviste el concepto de orden público en la Convención de Nueva York, que en vez de ser un elemento que coadyuve a sus objetivos, se ha convertido en el punto más vulnerable, por cuanto se ha tomado como bandera para retardar y en muchos casos negar la ejecución de los laudos arbitrales, alegando su violación y vinculándolo con nociones

de naturaleza tan compleja como lo es la soberanía, la jurisdicción o los intereses esenciales del Estado.

La facultad de determinar si un laudo arbitral contraría el orden público corresponde al país que debe reconocerlo y ejecutarlo, pues no está sometido a parámetros comunes a todos los Estados, por lo que un laudo puede ser válido a la luz de la legislación aplicable al arbitraje, y ser luego negado su reconocimiento y ejecución por razones de orden público conforme a la legislación del Estado ante el cual se solicita.

Por lo tanto, al contemplarse en la Convención de Nueva York, el orden público, como causal de denegación del laudo arbitral, a su vez coexiste la posibilidad de que en amparo a dicha causal la parte vencida recurra al mismo para obstaculizar su ejecución, al respecto señala Mezgravis:

“...el orden público se ha convertido en una de las principales excusas utilizadas por quienes luego de perder un arbitraje se resisten a cumplir lo decidido por los árbitros. Y cuando la parte que pierde el arbitraje es un ente o empresa estatal, estas causales de arbitrabilidad y orden público parecieran convertirse, especialmente en América Latina, en verdaderos e insuperables obstáculos para el reconocimiento y ejecución del laudo en el Estado al que pertenecen dichas empresas y en el que se encuentran generalmente la mayoría de sus bienes.” (2008, p.32).

La posición del autor citado tiene su asidero en el foro venezolano, y es que el Máximo Tribunal ha negado el reconocimiento de algunos laudos arbitrales alegando razones de orden público, donde figura algunos casos citados por el referido autor como son Sentencia de fecha 14 de febrero de 2006 caso HAAGEN-DAZ INTERNATIONAL vs. Corporación Todosabor y Sentencia del 5 de abril de 2006, caso VTV vs Elettrónica Industriale S.P.A, adoptando así

una posición rígida, es decir; de negar un laudo por relacionarse con cuestiones de orden público, donde se producen graves lesiones a la parte vencedora, pues no sólo debe tratarse de que el asunto litigioso se relacione con el orden público, por cuanto lo que es decisivo, es que se contraría ese orden público y por ende vaya en contravención al ordenamiento jurídico vigente, o como bien enseñó el maestro Herrera (1960, p.36) *“no basta que la ley extranjera sea distinta del precepto propio de orden público; es preciso que sea adversa, incompatible”*.

El Convenio CIADI, denunciado por Venezuela en enero de 2012, erige como ventaja la eliminación de la causal de orden público para denegar la ejecución del laudo arbitral, y aunque no se discute el éxito de la Convención de Nueva York, más aplaudida sería si introdujera algunas modificaciones que apunten a flexibilizar las cuestiones relativas al orden público, sería un gran acierto que instauraría nuevas tendencias en el marco del derecho internacional.

Venezuela también es Estado miembro de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, preparada por la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, firmada en Panamá el 30 de enero de 1975, también conocida como Convención de Panamá, ratificada por Venezuela el 21 de febrero del año 1985.

Esta convención es de carácter especial, pues rige sólo en materia comercial, y le ha servido de motor propulsor en el continente americano, consta de 13 artículos, los seis primeros hacen referencia a las normas sustanciales que deben gobernar el arbitraje comercial internacional. Aunque no define expresamente su objeto, está orientada a dinamizar el arbitraje

comercial mediante el reconocimiento o acuerdo arbitral como convenio válido para solucionar las controversias mercantiles que se susciten entre los Estados miembros.

De su contenido se desprende que es casi una réplica de la Convención de Nueva York; sin embargo, dada su especialidad en la región americana ha servido como fuente de proyección del arbitraje comercial al ser la primera vez que colectivamente los Estados americanos convinieran en esta materia.

En Venezuela es de gran importancia, porque aunque si bien es cierto que en el año 2008 se publicó la Ley de Arbitraje Comercial cuyos comentario antecede, no es menos cierto que dicha Ley da preeminencia a los tratados bilaterales o multilaterales vigentes en la materia, y en su artículo 1 ordena su aplicación “...*sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente...*”. Lo que implica que ante la existencia de dichos tratados, estos se aplicarán con prioridad a la Ley de Arbitraje Comercial si sus normas son más favorables.

El artículo 4 de la citada Convención, estatuye que los laudos no impugnables según la Ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada y que su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales; y para denegar el reconocimiento de las sentencias arbitrales acoge lo dispuesto en la Convención de New York, cuyas causales ya se han comentado.

En cuanto a la aplicación de las convenciones citadas, estas no son excluyentes entre sí, y dado que ambas tratan sobre el mismo tema, salvo la especialidad de la Convención de Panamá, deben aplicarse en forma complementaria, y siempre en procura de la materialización del principio Pro Arbitraje, para lo cual debe aplicarse la disposición más favorable para lograr los objetivos comunes de ambas.

Asimismo, es común a ambos instrumentos la adopción de un sistema que reconoce al laudo arbitral como de obligatorio cumplimiento, aunque la Convención de Panamá considera al laudo como sentencia judicial ejecutoriada y la de Nueva York sólo habla de la obligación de reconocer y ejecutar la sentencia arbitral; para los Estados miembros es una garantía preconstituida que impone seguridad jurídica para la ejecución de la decisión arbitral.

CAPÍTULO II

INFLUENCIA DEL EXEQUÁTUR EN LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS EN VENEZUELA.

A. Que es el Exequátur.

Cuando se habla del exequátur o procedimiento de exequátur se entra en el ámbito de una sentencia o acto equivalente dictado en el extranjero o al cual se le han aplicado leyes distintas a las internas; sentencia que debe ser reconocida en el Estado en el cual se pretenda ejecutar para que surta plena eficacia y cumpla con el principio de la universalidad de los efectos de la cosa juzgada que trasciende al territorio nacional.

En Venezuela, el procedimiento de exequátur se consagró en el ordenamiento jurídico a partir de 1.873, Herrera (1960, p. 298), debido a la necesidad que privó en la comunidad internacional de que los diversos países flexibilizaran el principio de territorialidad de la ley, como consecuencia de las diversas negociaciones internacionales que ameritan de la convivencia armoniosa entre los Estados: de modo que su razón de ser se justifica ante la necesidad de brindar solución a las controversias que surgen entre sujetos de distintas o iguales nacionalidades, quienes se someten a la autoridad de un determinado órgano jurisdiccional o arbitral, en procura de que les decida sus diferencias.

El exequátur, es un procedimiento reconocido en el ordenamiento jurídico venezolano, cuyo fin es introducir al mismo una decisión dictada por una autoridad extranjera, para admitir judicialmente la fuerza ejecutoria de la misma, a los fines de brindarle eficacia, ejecución y obligatoriedad en su cumplimiento.

En la doctrina patria, Sánchez (2008, p. 567), define el exequátur como:

“...el procedimiento especial mediante el cual se tramita la solicitud de aplicación de los efectos de cosa juzgada y ejecución de las sentencias definitivamente firmes en materia privada dictadas en el extranjero, a fin de que surtan efectos en el territorio del país ante el cual se quieren hacer valer tales decisiones...”

Esta definición la complementa Guerra (2001), quien señala que cuando en el extranjero se dicten sentencias judiciales o arbitrales definitivamente firmes y de las cuales se pretende que tengan eficacia extraterritorial el procedimiento a aplicar para que produzca el efecto de la cosa juzgada es el exequátur, siempre que sus pronunciamientos se refieran a materias de carácter privado; es decir, civil o mercantil y de acuerdo a la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales se extiende a los fallos provenientes de tribunales laborales, pero excluyéndose las de carácter penal, para los cuales no aplica el arbitraje, (p. 425).

El exequátur es el procedimiento por el cual se pretende obtener el reconocimiento de una sentencia o acto dictado por un tribunal extranjero en el territorio cuya ejecución se pretenda hacer valer; es decir, es el medio

judicial para hacer posible que fallos dictados en un estado extranjero tengan fuerza ejecutiva en otro, este es el criterio plasmado en la Sentencia N° 187 de fecha 23 de febrero del año 2000 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ratificado en Sentencia N° 50, de fecha 15 de enero de 2003.

La competencia para conocer el exequátur, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia tal como lo establece en el ordinal 2 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010) que señala “...*Son competencias de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 2º. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la Ley.*”; con la excepción prevista en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, que establece la competencia de los Tribunales Superiores en lo civil para conocer de la solicitud de exequátur de los fallos extranjeros en los asuntos de naturaleza no contenciosa.

El trámite del exequátur, se circunscribe a la verificación de los requisitos exigidos en la Ley patria para otorgar eficacia al pronunciamiento extranjero y proceder a su ejecución. De modo, que existen dos momentos; uno que es el del reconocimiento de la sentencia extranjera como si se tratara de una sentencia nacional que es donde se aplica el exequátur y el otro momento que es el de la ejecución de la misma.

El exequátur, es por consiguiente, un procedimiento independiente y autónomo del juicio previo que resolvió el asunto de fondo, en el cual se revisa si la sentencia extranjera cumple o no con ciertos requisitos previstos en la Ley.

La doctrina, habla de cuatro sistemas con respecto a la validez de los fallos extranjeros; los cuales han sido acogidos en las diversas legislaciones de los países, y de cuya vigencia depende el régimen aplicable a cada caso.

Los referidos sistemas son: El sistema de exclusión o inejecución absoluta, que niega totalmente el carácter de cosa juzgada de una sentencia extranjera, como sucede en algunos países anglosajones. El sistema de aceptación plena o ejecución absoluta, por el cual las sentencias extranjeras surten plenamente sus efectos sin requerir exequátur. El sistema de la reciprocidad legal o diplomática, que reconoce la eficacia en cuanto a la cosa juzgada y ejecución de las sentencias extranjeras siempre que el país donde fueron dictadas conceda la ejecución igualmente a las sentencias del país donde se quieran hacer valer aquellas. El sistema de aceptación previo exequátur, que somete los efectos de la cosa juzgada y la ejecución de las sentencias extranjeras a la verificación de ciertos requisitos de forma. Sánchez (2008, p. 568-569).

Venezuela en un principio acogió el tercer sistema; es decir, el de reciprocidad, cuando adoptó el Código de Procedimiento Civil de 1986, a tenor del artículo 850, según el cual *“...sólo las sentencias dictadas en países donde se conceda ejecución a las sentencias firmes pronunciadas por tribunales venezolanos, sin previa revisión en el fondo, podrán declararse ejecutorias en la República...”*

Criterio que fue abandonado, con la aprobación de la Ley de Derecho Internacional Privado (1998), que no contiene la previsión de reciprocidad del artículo 850 del Código de Procedimiento Civil para conceder el exequátur, siendo adoptado el sistema de aceptación de la sentencia previo exequátur,

quedando derogado el citado artículo y todas las disposiciones que ahora son reguladas por la referida Ley; pero quedando vigentes las demás disposiciones del mencionado código en cuanto al procedimiento, siempre que no colidan con esta norma que es la especial en la materia.

Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1.561 de fecha 4 de julio del año 2000, señaló que debe aplicarse lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, quedando derogados los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, donde señala los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela.

El artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, hoy vigente, establece los requisitos que debe reunir una sentencia extranjera para que surta efecto en Venezuela, que son en términos generales los mismos requisitos contenidos en los diversos tratados suscritos y ratificados en el país, estableciendo lo siguiente:

“Artículo 53. Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- 1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas;*
- 2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;*
- 3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio;*
- 4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;*

5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;

6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera.

A estos requisitos se suman los establecidos en la Convención Interamericana Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros, la cual exige:

- Que las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones judiciales cumplan con las formas externas exigidas en el Estado de donde proceden.
- Que estén debidamente traducidos en el idioma oficial del Estado donde se quieran hacer valer y,
- Que se presenten debidamente legalizados conforme a la Ley del Estado donde deban surtir efecto.

Dos cuestiones importantes resaltan de la citada norma; por un lado como ya se comentó no exige el requisito de reciprocidad para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y por otro lado también suprimió el requisito de orden público internacional sustantivo.

El orden público internacional sustantivo, de acuerdo a los planteamientos esbozados por Mezgravis (2008, p. 25), se refiere a que las sentencias o laudos extranjeros, no contenga declaraciones que vulneren principios fundamentales del ordenamiento jurídico sustantivo del Estado en que se solicita el exequátur, lo cual no tiene que ver con el orden público internacional procesal, que es al que atañe las garantías fundamentales procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa y un juicio imparcial, cuya violación impone que deba negarse la ejecución de un laudo cuando éste es producto de corrupción, soborno, fraude o casos similares.

En efecto, en Venezuela existe la tendencia de facilitar la eficacia de las sentencias extranjeras, pero para tal fin se requiere del cumplimiento de los requisitos mencionados, con la ventaja de no exigir la reciprocidad; es decir, requieren del exequátur; sin embargo, el citado artículo se aplica siempre y cuando entre Venezuela y el Estado donde fue dictada la sentencia o cuyo ordenamiento jurídico le fue aplicado, no exista un convenio por el que se regule la materia, como lo señala el artículo 1 de Ley de Derecho Internacional Privado, el cual atiende a la jerarquía de las fuentes.

Así pues, en Venezuela para que una sentencia extranjera surta efectos, debe cumplir los requisitos de fondo previstos en la Ley de Derecho Internacional Privado, De Maekelt (2002, p. 101); y los requisitos de forma y procedimiento vigentes en el Código de Procedimiento Civil y, en el caso de los laudos arbitrales deben observarse los requisitos previstos en los tratados internacionales vigentes en la materia.

B. Consecuencias de la aplicación del exequátur en materia de ejecución de laudos arbitrales.

La figura del exequátur adquiere importancia en el presente estudio cuando se está en presencia de un laudo arbitral dictado en el extranjero o al cual le han sido aplicadas leyes de un ordenamiento jurídico distinto, ya que como afirma Caivano (2000, p. 325):

“A través del exequátur, la justicia estatal ejerce un control sobre algunos de los elementos y de los aspectos del laudo arbitral, cuyo objeto es obtener una declaración judicial en el sentido que la sentencia extranjera posee las condiciones exigidas por la ley interna o el tratado que resulte aplicable, para ser ejecutable”.

En Venezuela, la regla está determinada por la exigencia del exequátur a los fines del reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera; sin embargo, a favor de los laudos arbitrales comerciales extranjeros se configura la excepción; es decir, existe un procedimiento breve y sumario para su reconocimiento sin requerir exequátur.

Esta excepción es el resultado de la aprobación por parte del Estado venezolano de los convenios internacionales pioneros en la materia y de su posterior inserción en las leyes internas, en los cuales inciden directamente los primeros.

Cuando se trata de laudos dictados en un país vinculado con Venezuela por un tratado, estos tienen preferencia en su aplicación salvo que la ley interna

resulte más favorable al arbitraje y por ende al reconocimiento y ejecución del laudo arbitral caso en el cual debe ser aplicada.

La Convención de Nueva York 1958, que fue aprobada como ley en nuestro país como ya se ha expresado, regula el reconocimiento y ejecución de laudos dictados en Estados distintos de aquél donde se pretende su reconocimiento y ejecución, o de laudos que, no fueran considerados nacionales en el Estado de que se trate, o no se les aplicase la ley del foro, este convenio no regula un procedimiento para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, sino que deja tal regulación a la legislación interna de cada Estado.

De acuerdo con el artículo III de la Convención de Nueva York:

“Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.”

Este precepto legal equipara al laudo arbitral internacional con los laudos nacionales, en vista de lo cual impone a los Estados la obligación de reconocer los laudos arbitrales sin imponer condiciones más rigurosas que las aplicables para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales nacionales; por lo que el juez competente deberá asegurarse que los

requisitos de autenticidad del laudo están cumplidos y analizará si conforme a las leyes nacionales deba o no ser ejecutado como lo señala la disposición.

Cabe señalar, que la Convención en la norma transcrita distingue entre *“normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada”* y *“condiciones que se establecen en los artículos siguientes”*. Es importante llamar la atención sobre esta distinción, puesto que la Convención no nació, en principio, para fijar procedimientos relativos a la ejecución de laudos extranjeros. El objetivo de la Convención es el de facilitar la ejecución de laudos en territorios distintos a aquéllos en que se dictan estableciendo pautas mínimas. Así, para efectos de procedimiento, la Convención se remite a las normas locales del país donde se busca el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral.

Asimismo, la Convención de Panamá, señala en el artículo 4 que el reconocimiento y ejecución de las sentencias o laudos arbitrales pueda *“exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros”* de acuerdo con la ley interna del país donde se ejecuten y los tratados internacionales válidos.

La dificultad práctica de considerar al laudo arbitral como sentencia judicial ejecutoriada, cuyo cumplimiento debe exigirse bajo las reglas contempladas para la ejecución de sentencias dictadas por tribunales nacionales o extranjeros, radica en el problema de interpretación que surge de la diferencia en los mecanismos de ejecución de las sentencias judiciales nacionales y extranjeras, cuya aplicación puede generar resultados diferentes e injustos dependiendo de que el laudo arbitral a ejecutarse sea nacional o extranjero.

En Venezuela, esta dificultad es poco probable, ya que por lo general se sigue el procedimiento de ejecución de sentencias previsto en el Código de Procedimiento Civil, con las variaciones correspondientes dependiendo de la materia que se trate, lo cual es distinto en el caso de reconocimiento que si contempla normas precisas pero que se circunscriben a los requisitos de exigencia mínimos para garantizar la legalidad de las sentencias o laudos arbitrales.

Bajo el sistema de aceptación de la sentencia previo exequátur, que rige en Venezuela; y la influencia de ambas convenciones, no hay complicaciones relacionadas con el reconocimiento del laudo, como si ocurre en los sistemas que imponen la revisión del fondo, en el sentido de que los órganos jurisdiccionales bajo el amparo de la revisión del fondo del laudo o bien de la sentencia, pueden dictar un nuevo pronunciamiento que en el territorio del Estado desvanezca los derechos reconocidos primariamente en ellos, por lo que se crea una sentencia paralela.

Ambas convenciones centran sus objetivos en que los laudos sean ejecutables en otros Estados sin que haya una revisión previa sobre el fondo del asunto resuelto, y como bien señala Henríquez (2000, p. 316-317) “*el artículo VII.1 de la Convención de Nueva York, deja incólume los derechos de las partes litigantes fundamentados en la legislación interna (Lac) o en los tratados*”, de modo que para los laudos de naturaleza mercantil, resulta aplicable la Ley de Arbitraje Comercial, en especial el artículo 48 y 49 que regula el reconocimiento y la ejecución del laudo, que va de la mano con los objetivos de ambas convenciones y es en su aplicación más viable, y a cuya aplicación remite el artículo 62 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

La Ley de Arbitraje Comercial, da una solución a favor de principio Pro Arbitraje en su artículo 48, al imponer que el laudo arbitral extranjero debe ser reconocido por los tribunales ordinarios sin necesidad de que medie tratado alguno, y sin necesidad de requerir exequátur, bastando sólo una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia que hubiere conocido del asunto sometido a arbitraje.

Este artículo no tiene similar en el arbitramento regido por el Código de Procedimiento Civil, pero remite al mismo como norma supletoria específicamente al artículo 523, el cual señala que la ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Si fuere un tribunal de arbitramento el que haya conocido en primera instancia, la ejecución corresponderá al tribunal natural que hubiere conocido del asunto de no haberse efectuado el arbitramento.

Sin embargo, la Convención de Nueva York establece una serie de requisitos que debe cumplir todo laudo arbitral para poder ser reconocido y ejecutado en un Estado, y que están referidos a la documentación que debe presentar la parte con la demanda en la cual se pide la ejecución; que a tenor del artículo IV son: el laudo arbitral original o auténtico, el acuerdo arbitral y la traducción de dichos documentos al idioma oficial del Estado donde se pretendan hacer valer si estuvieren en un idioma distinto.

Los laudos arbitrales comerciales pronunciados en el extranjero se ejecutan en Venezuela conforme a la Ley de Arbitraje Comercial, pero atendiendo primordialmente a los tratados, pactos o convenciones vigentes en el país, que le sean aplicables.

Si se recurre a la analogía pudiera extenderse la aplicación de la Ley de Arbitraje Comercial a los laudos de naturaleza no comercial, tomando como base la extensión de los principios de ejecutabilidad; por cuanto los artículos 253 y 258 de la Constitución de 1999 que es posterior a la referida Ley y que constitucionalizó al arbitraje, no limitan el alcance y reconocimiento del arbitraje a la materia comercial; sin embargo, a tales fines la jurisprudencia patria contribuiría en gran manera si estableciera su criterio de modo que a cualquier laudo arbitral extranjero, sin importar su naturaleza, ni el Estado de donde provenga o cuyas leyes les han sido aplicadas; pudiera ser sometido al sistema de reconocimiento y ejecución previsto en la Ley de Arbitraje Comercial que elimina el requisito del exequátur, pero siempre en respeto de los tratados y convenios válidos en el ordenamiento jurídico de la República.

Debe notarse al respecto, que algunas convenciones internacionales colocan a los laudos arbitrales en mejor situación que a las sentencias extranjeras, al no requerir aquéllos de un procedimiento de exequátur. Además, según los artículos 48 y 49 de la Ley de Arbitraje Comercial, Venezuela reconoce los laudos arbitrales dictados por tribunales arbitrales extranjeros en cualquier país independientemente de que éste haya ratificado o no alguna de las convenciones sobre ejecución de laudos arbitrales extranjeros, siempre que no incurran en una de las causales previstas en dicha Ley para negar la ejecución forzosa del laudo.

En suma, la aplicación del exequátur a la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, además de assimilarlos a las sentencias extranjeras, permite al operador de justicia velar por el cumplimiento de las garantías mínimas que amparan la legalidad de los mismos, a fin de que las partes satisfagan la necesidad de tutela por la cual someten un determinado conflicto a arbitraje y

ejecuten los mismos bajo el respeto de las garantías fundamentales procesales cuya inobservancia impone la negativa de ejecución, ante la necesidad de predominio del Estado de Derecho y de Justicia.

Por último, debe señalarse que una vez reconocido el laudo arbitral, corresponde a los tribunales que hubieren conocido del asunto sometido a arbitraje en primera instancia, la ejecución del mismo como si se tratara de una sentencia nacional.

CAPÍTULO III

RECURSOS PROCEDENTES CONTRA EL LAUDO ARBITRAL

A. Recurso de Nulidad en la ejecución el laudo arbitral.

Desde una perspectiva histórica, el arbitraje había sido concebido desligado por completo de los medios de impugnación por los cuales se ataca una decisión judicial, y en el caso concreto el laudo arbitral, Rigaux, citado por Mezgravis, advierte que *“Es posible creer que la institución del arbitraje quedaría deformada e inclusive perdería su naturaleza esencial, si el proceso arbitral debe seguir subsecuentemente un proceso ante los Tribunales del Estado”* (1999, p. 261).

En el sistema venezolano, el arbitraje es de orden constitucional, y es en la propia Constitución en el ordinal 1º del artículo 49 donde se contempla el derecho a recurrir el cual está sujeto al cumplimiento de los requisitos que establezcan las leyes que los desarrollan.

Rivera, expresa que los recursos y los medios de impugnación son equivalentes, pero define al recurso específicamente como *“...un acto procesal de parte para atacar a una decisión judicial impugnada, solicitando la actuación de la ley a su favor.”* (2006, p. 78), y citando a Montero Aroca manifiesta que: *“...En general los medios de impugnación son instrumentos legales puestos a disposición de las partes para intentar la modificación o la anulación de una decisión judicial”* (2006, p. 31).

Por su parte, en un sentido más estricto; debe entenderse como recurso “...*la impugnación por quien está legitimado para ello, de un proveimiento o decisión judicial, dirigida a provocar su sustitución por un nuevo pronunciamiento*”. Burelli y Mejía (2000, p.117).

De las definiciones anteriores deriva, que el recurso es un medio de defensa mediante el cual aquel que ha sido parte en un proceso determinado ejerce su derecho a manifestar su inconformidad con un pronunciamiento judicial que no le favorezca, con la intención de modificarlo o revocarlo, lo cual debe hacer en un plazo perentorio que debe ser fijado en la Ley.

Así pues, mediante los recursos el error en el proceso, sea de forma o fondo, es corregido a petición del afectado, activándose así un nuevo examen de los hechos o del derecho que conlleva a un nuevo pronunciamiento judicial.

Dada la naturaleza del arbitraje, el carácter de confianza y celeridad que le caracterizan le imponen la necesidad de hacerse a un lado frente a los diversos sistemas de recurribilidad que pueden comprometer la eficacia de una sentencia judicial; por lo tanto, la eficacia del laudo, implica como regla general que no puedan oponérsele recursos al antojo. Gamboa (2005, p. 552), acertadamente afirma que “...*constituye necedad pretender que haya recurso contra una pretensión que por su propia naturaleza y por definición legal carece completamente de ella; una cosa es la legislación existente y otra la que se desea...*”

Bajo esta óptica, una vez dictado el laudo arbitral y mientras no medie acuerdo entre las partes que exprese lo contrario, el único recurso que procede contra él es el recurso de nulidad.

Cabe mencionar que tanto el Código de Procedimiento Civil como la Ley de Arbitraje Comercial, prevén el recurso de nulidad como el medio idóneo para atacar el laudo arbitral, sin distinguir entre arbitraje de derecho y arbitraje de equidad; de modo, que el mismo es procedente independientemente del arbitraje que hayan elegido las partes.

Como nota característica, resalta que los laudos arbitrales no pueden ser atacados alegando la nulidad por vicios de forma, tal como en el ordenamiento jurídico venezolano sí pueden estarlo las sentencias judiciales, con base en el artículo 244 y los primeros tres ordinales del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así, en caso de tratarse de un laudo extranjero, la única opción en Venezuela para evitar su ejecución sería oponerse a la misma como una excepción.

Contra los laudos extranjeros no procede el recurso de nulidad para evitar su ejecución, pues se aplica la norma que ha regido el proceso arbitral; y el laudo sólo es impugnabile mediante el recurso previsto en el derecho del lugar donde el mismo fue dictado; de modo que si está pendiente el recurso de nulidad, bien porque no ha sido decidido o porque no ha vencido el plazo para intentarlo no podrá reconocerse el mismo por cuanto no se encuentra definitivamente firme.

Es por ello, que dentro de las disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial, sólo se admite el recurso de nulidad respecto de los laudos dictados en el territorio nacional, ya que en el caso de los laudos extranjeros es procedente la oposición a la ejecución del mismo, como lo preceptúa el artículo 49 eiusden; lo cual garantiza, por un lado, el derecho constitucional a la eficacia de la justicia arbitral, y por el otro, las garantías inherentes a todo proceso.

Por su parte, el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial es categórico: *“Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad.*

El recurso de nulidad contra el laudo arbitral es un recurso excepcional, que sólo es procedente cuando el laudo es dictado en contravención de alguno de los supuestos previstos taxativamente por el legislador, que en opinión de Saghy y Tejera, (2010, p. 260) *“...Estos supuestos, en términos generales, están destinados a examinar las condiciones de validez de la convención de arbitraje y el resguardo de los derechos procesales de las partes...”*

Con este recurso, no se pretende obtener una nueva decisión sobre el fondo del asunto controvertido; se busca la declaratoria de nulidad del laudo que lo hace inexistente, y coloca a las partes en el estado de manifestar su voluntad de someterse nuevamente a arbitraje (si la nulidad fue declarada por inexistencia del acuerdo arbitral) o de iniciar nuevamente el proceso arbitral, restituyendo la situación jurídica infringida; esto excluye una segunda instancia y por ende la posibilidad de revisar las razones de fondo asumidas por los árbitros para dirimir la controversia, por lo que se acepta el principio del mínimo control del laudo.

El efecto de la declaratoria de nulidad, es que las partes vuelven a la situación jurídica que existía antes de la instauración del proceso arbitral, lo que puede derivar en varias posibilidades; ya que las partes pueden iniciar nuevamente el proceso arbitral si la nulidad decretada fue en base a una causal referida a una irregularidad del procedimiento, o bien pueden ir a plantear su conflicto ante la jurisdicción ordinaria en caso de que la declaratoria de nulidad haya sido en base a una causal referida a una

irregularidad en el acuerdo arbitral, aunque en este último caso pueden volver a suscribir un acuerdo de arbitraje.

En resumen, los jueces salvo las precisas disposiciones del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, no tienen competencia para determinar si el laudo es injusto, si los árbitros valoraron correctamente los hechos y las pruebas aportadas, o bien si aplicaron correctamente las normas, ya que, sólo deben circunscribirse a controlar las formalidades esenciales denunciadas y exigidas en la Ley, que deben ser observadas en el proceso arbitral.

El recurso de nulidad debe ser interpuesto dentro del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del laudo a que se contrae el artículo 31 de la referida Ley; sin embargo, en su artículo 32 otorga un lapso de quince (15) días hábiles, para que cualquiera de las partes soliciten alguna aclaración, corrección o complemento del laudo, o bien para que el tribunal arbitral se pronuncie al respecto de oficio, en cuyo caso el lapso de cinco (5) días para interponer el recurso de nulidad, deberá computarse a partir de la providencia que lo aclare, corrija o complemente.

El tribunal competente para conocer el recurso de nulidad conforme al artículo 43 de la referida Ley, es el Tribunal Superior; es decir, el que hubiere conocido el asunto sometido arbitraje en segunda instancia si las partes hubiesen recurrido a la vía judicial, para lo cual debe observar las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el procedimiento ordinario.

En cuanto al procedimiento del Código de Procedimiento Civil, al cual remite la Ley de Arbitraje Comercial en su artículo 47, la doctrina ha mostrado sus discrepancias; Baumeister (1999, p.118), hace referencia a que esta norma es ambigua y, que debe entenderse que el procedimiento a aplicar no es el procedimiento ordinario, sino el procedimiento de segunda instancia del juicio ordinario; regulado en los artículos 516 al 522 del Código de Procedimiento Civil. Este criterio es válido, ya que si se realiza una interpretación extensiva y se compara con el devenir del proceso en sede judicial, este es el procedimiento generalmente aplicado por los Tribunales Superiores, conforme al Código de Procedimiento Civil, y resulta por ende el aplicable para tramitar el recurso de nulidad.

En el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, se establecen taxativamente las causales para interponer el recurso de nulidad.

“Artículo 44: La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar:

a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;

b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos;

c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a dicha Ley;

d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contenga decisiones que exceden del acuerdo mismo;

e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral,

f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la controversia no es

susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público.”

En relación con el primer supuesto “... a) *Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje...*”, es importante señalar que de acuerdo con la Ley de Derecho Internacional Privado, lo atinente a la capacidad de las personas naturales se rige por el lugar de su domicilio, y en caso de personas jurídicas por el lugar de su constitución. Esto trae como consecuencia que el juez que conozca del recurso de nulidad contra el laudo por esta causal, debe determinar cuidadosamente de acuerdo con las reglas antes citadas si efectivamente se configura el supuesto de incapacidad, que de ser positivo configura un vicio del consentimiento del compromiso arbitral.

En todo lo referente a la capacidad de las partes rigen los postulados del Código Civil, por lo que la nulidad sólo obra en interés del incapaz; es decir, que si la parte contra quien se intenta ejecutar el laudo era capaz y su contraparte era la persona afectada por incapacidad al momento de celebrar el acuerdo arbitral, entonces, el primero no podrá hacer valer la incapacidad de éste último.

El segundo supuesto, “... b) *Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos...*”, se estableció para garantizar el derecho al debido proceso, en vista del cual la falta de notificación de la parte recurrente de cualquier acto que debía notificársele, configura una violación

del derecho a la defensa que le asiste en todo proceso. Así pues, si debía notificársele a la parte con respecto a la designación de los árbitros y no se realizó, la parte no tuvo la posibilidad de ejercer la recusación de los mismos y por ende el laudo dictado resulta nulo. Al respecto opina Mezgravis:

“... los vicios en la notificación de una actuación arbitral, exigida por la ley o conforme a las normas de procedimiento convenidas por las partes, pueden ser convalidados de conformidad con los principios establecidos en los artículos 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y especialmente por lo previsto en el artículo 626 eiusdem...”. (1999, p. 244).

En derecho, la convalidación de un acto defectuoso está amparada en la Ley, y los actos viciados de nulidad quedan subsanados si la parte contra quien obre la falta no pide la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos; esto pudiera trasladarse al plano del arbitraje si se está en presencia de actos no esenciales, que por su naturaleza no incidan en la decisión que deban tomar los árbitros; para permitir así que el procedimiento arbitral se desarrolle de manera rápida, sencilla y sin dilaciones indebidas que atenten contra la celeridad que le caracteriza.

Sin embargo, en los casos relacionados con la falta de notificación de la designación de un árbitro, si atenta contra el derecho a la defensa, pues se consuma la violación de un requisito esencial del procedimiento, ya que puede incidir en la obtención de una decisión injusta, específicamente si se está en presencia de un árbitro que pueda estar inmerso en una de las causales de recusación previstas.

De lo contrario no tendría razón la inclusión de esta causal, el legislador previó tal posibilidad específicamente en el arbitraje, con el fin de que el

laudo arbitral contra el cual están suprimidos casi todos los recursos sea emitido bajo las reglas que impongan las partes de común acuerdo, y en su defecto bajo los principios que garanticen el ejercicio del derecho a la defensa y el proceso debido.

Para el juez puede resultar comprometido declarar la convalidación de un acto defectuoso por falta de notificación, pues bajo la óptica del principio de autonomía de la voluntad de las partes, quienes son las que imponen las reglas de la actuación arbitral; viene a configurar una injerencia que denota un gran control sobre la actividad arbitral, de modo que su actuación debe centrarse en determinar o no la violación de la notificación de un determinado acto que sea esencial para la obtención de una decisión justa.

De la misma manera, cuando la parte recurrente alegue que no ha podido hacer valer sus derechos, debe entenderse que se le ha negado tal facultad arbitrariamente, y nunca como consecuencia de su propia negligencia ya que en ese caso no se conforma indefensión alguna, sino que es resultado de su propia desidia.

En cuanto al tercer supuesto, "... c) *Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a dicha Ley...*", nuevamente debe hacerse valer el principio de autonomía de la voluntad de las partes quienes son las que fijan el procedimiento para tramitar el arbitraje, y sólo en caso de que estas no hagan mención alguna es que debe aplicarse las normas adjetivas previstas en la ley.

Ahora bien, lo que debe entenderse, es que la causal se consolida cuando los árbitros no cumplan con los designios de las partes para ventilar el

procedimiento; bien porque ellas lo diseñen o porque lo remitan a un determinado reglamento; y sólo en caso de que exista el silencio de estas, es que debe verificarse que el procedimiento no se haya ajustado a la ley vigente.

Con referencia a la causal prevista en el literal “... d) *Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contenga decisiones que exceden del acuerdo mismo...*”; estamos en presencia, del vicio procesal de incongruencia, al no ser acorde lo comprometido por las partes en la cláusula arbitral con lo decidido, bien porque la materia no fue sometida a arbitraje por las partes o bien porque la decisión contenida en el laudo excede del acuerdo mismo; es decir, en el primer caso se configura la ultra petita y en el segundo caso la extra petita; generándose en ambos casos una situación de desigualdad entre las partes.

En el orden de las ideas anteriores, no consagra el legislador la nulidad por citra petita; es decir, cuando los árbitros no deciden sobre todas las cuestiones sometidas a su conocimiento; al respecto la doctrina se ha pronunciado a favor de la vigencia del laudo.

En ese sentido, Henríquez (2000, p. 297), manifiesta que “*la omisión del pronunciamiento no causa gravamen irreparable porque el punto no está en los límites de la cosa juzgada, según lo previsto en el artículo 1.395 del Código Civil*”, artículo este que en su parte final establece que la autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia; de modo que al no haberse decidido sobre alguno de los particulares sometidos a arbitraje mal podría decirse que ha operado la cosa juzgada sobre el mismo.

En la misma línea de pensamiento, el profesor Mezgravis, agrega que el vicio de citra petita no acarrea la nulidad del laudo, sino que en tal caso es exigible la responsabilidad del árbitro, (1999, p. 247).

Así pues, ante la presencia de un laudo en el cual no ha sido resuelta totalmente la controversia, el mismo no está viciado de nulidad y rige para los puntos que ha resuelto; pero en lo tocante al tema excluido para el cual rige el compromiso arbitral, quedaría entonces la posibilidad de someterse a un nuevo arbitraje, ya que queda excluida la jurisdicción ordinaria dada la vigencia del compromiso arbitral en esa materia.

Controversial resulta la causal de nulidad prevista en el literal “e”, que alude a que la nulidad se podrá declarar:

“...Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral...”

No se trata de una verdadera causal, pues no materializa la nulidad del laudo como tal, ya que en tales condiciones el mismo no surte sus efectos. El legislador al inspirarse en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Ley Modelo Uncitral, por sus siglas en inglés United Nations Commission for the Unification of International Trade Law), acogió dicha causal erradamente, pues la misma está prevista en dicho documento como causal para negar el reconocimiento del laudo y no como causal de nulidad del mismo, que son dos cosas totalmente diferentes.

El laudo en esas condiciones carece de efectividad, por lo que resulta ilógico pretender anularle si aún no vincula a las partes. Bajo este concepto la parte recurrente no tiene fundamento para activar el recurso de nulidad, ya que no se configuran los presupuestos de procedencia del recurso, en el sentido de que en primer lugar, no existe un laudo impugnado, ya que el mismo al no vincular a las partes o al estar suspendido no surte sus efectos; y en caso de haber sido anulado previamente es inexistente. Y en segundo lugar, dada la inexistencia del laudo, mal podría alegarse un agravio o un perjuicio.

La jurisprudencia patria no ha hecho mención al respecto; sin embargo, será la encargada de dar una interpretación orientada a salvar el descuido del legislador. Por su parte Gabaldón (1999, p. 145) considera que el cuestionado literal *“es inaplicable a los fines de ejercer el recurso de nulidad y por consiguiente se debe reputar como no escrito”*.

La causal de nulidad prevista en el literal “f” está referida a lo siguiente: *“...Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público...”*, ello hace referencia a posibilidad de solicitar la nulidad del laudo arbitral cuando el mismo resuelva controversias sujetas a inarbitrabilidad, o que verse sobre cuestiones de orden público, para lo cual debe observarse el contenido del artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial.

El referido artículo exceptúa las controversias que no pueden ser sometidas a arbitraje: como aquellas que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, las relacionadas a funciones de imperio del Estado o de personas o entes de derecho público, las relativas al estado y capacidad,

a los bienes o derechos de incapaces sin autorización judicial y las que han sido resueltas mediante sentencia definitivamente firme.

No obstante, las materias que interesen al orden público pueden ser sometidas a arbitraje, y sólo podrán ser excluidas si dichas materias son contrarias al orden público o afecten principios esenciales de este; es decir, que contengan violaciones expresas que atenten contra los referidos principios, que de ser reconocidas impliquen su desconocimiento, como ya se indicó anteriormente.

En efecto, el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil vigente, cuyo contenido niega el arbitraje cuando se trate de materias que interesen al orden público, ha sido derogado por la Ley de Arbitraje Comercial y la Ley de Derecho Internacional Privado, como normativa vigente en la materia, según la cual no basta que una materia interese al orden público para ser inarbitrable, por cuanto se requiere además que contraríe el mismo.

En líneas anteriores se señaló que como presupuestos de admisibilidad del recurso de nulidad el Juez debe revisar si es temporánea su interposición y si se basa en alguna o algunas de las causales ya comentadas; siendo estos requisitos de validez para su procedencia.

En la actualidad, según la ley venezolana, el recurso de nulidad no tiene un efecto suspensivo sobre la ejecución del laudo arbitral como lo prevé el único aparte del artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, la cual sigue su curso. En todo caso, para que tal suspensión se dé, el solicitante deberá prestar una caución que garantice la ejecución del laudo y los eventuales daños o perjuicios que pudieran ocasionarse, que de no ser cumplida por el recurrente hacen improcedente el recurso.

Tal requisito de caucionar para suspender la ejecución, se justifica en el derecho de la parte gananciosa a ejecutar el fallo favorable sin dilaciones u obstáculos temerarios por la parte perdidosa, contenido a su vez en el derecho a la tutela judicial efectiva, y en ese sentido ha fijado su posición la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en Sentencia N° 1.067 de fecha 03 de noviembre del año 2010.

En el Código de Procedimiento Civil Venezolano, que regula el denominado arbitramento, también se prevé el recurso de nulidad en sus artículos 626 y 627, con algunas particularidades.

El lapso para su interposición es dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del laudo hecha por el juez que hubiese conocido del asunto en primera instancia. El juez competente para conocerlo es el Tribunal de primera instancia que publicó el laudo quien dispone de tres (03) días para ver el recurso; y una vez decidido este, puede interponerse el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, el cual debería oírse en un solo efecto ya que el laudo arbitral ejecutoriado es de ejecución inmediata, aún cuando esté pendiente el recurso de nulidad.

El vocablo “ver el recurso” señala Gabaldón:

“... debe ser interpretado en el sentido de que la sustanciación del recurso de nulidad se inicia con la vista de las actas y recaudos que corren en el expediente; por consiguiente, debe el juez proceder a la lectura concordada de tales recaudos dentro del plazo de tres días que le señala la Ley. Por aplicación analógica del artículo 511 ejusdem el decimoquinto día siguiente a la terminación de la vista las partes presentarán informes, a

cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192” (1987, p. 128)

Las causales de nulidad enunciadas en el Código de Procedimiento Civil son taxativas, y hacen alusión a la nulidad o vencimiento del compromiso arbitral, a la no observación de las formalidades sustanciales del proceso; y además, prevé como causal de nulidad del laudo que el mismo no se haya “...*pronunciado sobre todos los objetos del compromiso...*” en cuyo caso la nulidad por citra petita, es decir, cuando los árbitros no deciden sobre todas las cuestiones sometidas a su conocimiento es viable en el arbitramiento, lo cual no sucede en el arbitraje regido por la Ley de Arbitraje Comercial.

En cuanto el recurso de apelación, las partes sólo podrán acordar su procedencia en los arbitrajes de derecho nunca en los de equidad, y lo conocerá el Tribunal Superior natural, u otro tribunal de arbitramento que constituyan las partes para tal fin; sin embargo, tal posibilidad está sometida a que las partes de mutuo acuerdo lo hayan pactado y expresado en el convenio arbitral.

En el arbitraje previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las decisiones de la Junta Arbitral serán inapelables; pero las partes podrán interponer el Recurso de Casación, por las causas previstas en el artículo 149, a saber: a) Cuando fuere dictado fuera de los límites del arbitraje; b) Si estuviera concebido en términos de tal manera contradictorios que no pueda ejecutarse; c) Si en el procedimiento no se observaron sus formalidad sustanciales, siempre que la nulidad no se haya subsanado por el consentimiento de las partes al no reclamar oportunamente contra ellas y, d) Si la cuantía excediere de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

Esta Ley procedimental, suprime el recurso de nulidad contra los laudos arbitrales que hayan sido dictados bajo su amparo, apartándose así de la regla según la cual el laudo arbitral sólo es atacable por vía del recurso de nulidad.

En relación con el Recurso de Casación, se observa que los motivos previstos antes indicados, son idénticos a las causales de nulidad que se han venido analizando en el desarrollo del presente capítulo, salvo la referida a la cuantía; por lo que en todo caso, la decisión de la Sala de Casación Social bajo cualquiera de las circunstancias antes dichas debe limitarse a declarar la nulidad del laudo sin poder extenderse al fondo de la controversia para decidir el juicio, como ocurriría tratándose de un verdadero Recurso de Casación contra la decisión de un Tribunal Superior del Trabajo.

En tales casos el acuerdo arbitral subyace, y nada obsta para que las partes inicien un nuevo procedimiento arbitral, toda vez que bajo el análisis de las referidas causales se ataca sólo la validez del laudo y no el compromiso que ha sido manifestado por las partes ante el juez.

Ahora bien, en el caso de que la cuantía del asunto sometido a arbitraje exceda de 3.000 unidades tributarias, como lo prevé el numeral 2 del artículo 167 de la referida Ley, se trata entonces de una causal que encaja en las materias que no pueden ser arbitrables debido a esta condición, caso en el cual la Sala de Casación Social debe pronunciarse sobre el fondo del asunto.

En efecto, siendo el arbitraje un medio alternativo de resolución de conflictos por el que las partes decidieron sustraer el asunto del conocimiento de los

órganos jurisdiccionales del Estado, éstos no podrían, aunque se trate de la propia Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, sustituir el laudo arbitral por un fallo judicial, debiendo entonces limitarse a anularlo para dejar intacta la controversia, lo que no significa otra cosa que respetar la autonomía de las partes que para solucionar su controversia acordaron libremente acudir al arbitraje, y excluir a la jurisdicción que ejerce el Estado por medio de sus tribunales.

El Código Orgánico Tributario, en materia de recursos contra el laudo arbitral; admite la interposición del recurso de apelación en el artículo 323, el cual está supeditado no a las razones procesales que normalmente lo inspiran, sino a la existencia de una decisión no unánime en el seno del tribunal arbitral, recurso del cual conocerá el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Especial Tributaria de la Sala Político Administrativa, pero no se fija el lapso para su interposición, por lo que se pudiera aplicar analógicamente el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se fija en cinco (05) días el lapso para intentar la apelación.

En relación a los recursos contra el laudo arbitral en materia tributaria, es criticable la procedencia del recurso de apelación (ante un laudo que no ha sido dictado por unanimidad), ya que en su esencia el mismo opera a los fines de obtener un nuevo pronunciamiento de fondo sobre el asunto decidido, lo cual va en detrimento de los postulados establecidos en materia de recursos contra los laudos arbitrales; pues se espera de una decisión arbitral que la misma sea definitiva y que zanje de una vez el asunto que resuelve.

Este cuestionable recurso de apelación conlleva a concluir que el arbitraje tributario en un simple proceso contencioso de primera instancia, ya que de ser procedente la apelación se sustituye la decisión por el nuevo pronunciamiento que emita el Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, consagra el referido texto legal el recurso de nulidad, el cual podrá interponerse dentro de los ocho (08) días siguientes a la publicación del laudo ante el Tribunal Supremo de Justicia, siempre que se produzca una de las tres causales taxativamente reseñadas en el artículo 325 del Código Orgánico Tributario, que señala:

Artículo 325: El laudo dictado por el Tribunal Arbitral se podrá declarar nulo:

- 1. Si la sentencia decisoria no se hubiere pronunciado sobre todas las cuestiones sometidas a arbitraje, o si estuviere concebida en términos de tal manera contradictorios que no pudiese ejecutarse.*
- 2. Si el Tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo comprueba que según el ordenamiento jurídico, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje.*
- 3. Si en el procedimiento no se hubieren observado las formalidades sustanciales, siempre que la nulidad no se haya subsanado por el consentimiento de las partes.*

En cuanto al recurso de nulidad en sede tributaria, hay dos consideraciones importantes.

En primer lugar, las causales previstas en el numeral 1 y 3, son idénticas a las establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 627 del Código de Procedimiento Civil, que igualmente prevé la nulidad del laudo arbitral ante el vicio de citra petita. Asimismo, la nulidad contemplada en el numeral 2 está concebida en los mismos términos previstos en el literal f del artículo 44 de

la Ley de Arbitraje Comercial, con la particularidad de que elimina la causal de nulidad del laudo cuando la materia sobre la cual verse sea contraria al orden público.

En segundo lugar, al contemplar el Código Orgánico Tributario, tanto el recurso de apelación como el de nulidad, puede darse el caso en que una parte apela del laudo y la otra intenta en su contra un Recurso de Nulidad, al respecto Pérez (2008, p. 22), señala:

“Dado que el conocimiento de ambos recursos corresponde al mismo órgano jurisdiccional, o se acumularían las causas para evitar sentencias contradictorias, o quedaría al descubierto que uno de los dos recursos carece de sustento práctico puesto que su pretensión queda abrazada en el otro, siendo más cónsono y coherente con la figura arbitral el Recurso de Nulidad.”

Como se ha señalado, en el ordenamiento jurídico venezolano la mayoría de los textos legales contemplan el recurso de nulidad como la única vía idónea para atacar el laudo arbitral, salvo los casos señalados donde expresamente se considera procedente el recurso de apelación; sin embargo, se han levantado nuevos planteamientos en relación a la admisión de recursos distintos al recurso de nulidad, para atacar la validez del laudo arbitral, punto sobre el cual ha influido directamente la jurisprudencia.

En cuanto amparo constitucional, la doctrina predominante señala que no es procedente para atacar el laudo arbitral, el argumento principal que se hace valer radica en que las partes tienen un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional; es decir, el recurso de nulidad contra el laudo, lo cual redundaría en hacer inadmisibles las pretensiones de

amparo de conformidad con el ordinal 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Mezgravis, en este tema concluye que dicha acción es inadmisibile, ya que las materias transigibles fundamentan la exclusividad del proceso arbitral y la exclusión de otros recursos, manifestando que el recurso de nulidad es un medio idóneo capaz de restablecer la situación jurídica infringida (1999, p. 273).

Por su parte, Henríquez admite la posibilidad de interponer la acción de amparo contra el laudo arbitral cuando la causa de pedir reside en la falta de consentimiento del agraviado para comprometer la controversia en arbitraje, o contra el laudo arbitral inhibitorio que pronuncie la ilegitimidad del arbitraje y se abstenga de resolver el conflicto, para lo cual toma como fundamento que no existe causal para acudir a la vía del recurso de nulidad. (2000, p. 304-308).

La jurisprudencia venezolana, en una primera etapa rechazó el recurso de amparo contra el laudo arbitral, ejemplo de ello es la Sentencia N° 827 de la Sala Constitucional dictada en fecha 23 de mayo de 2001, caso Soficrédito Banco de inversión C.A. contra Grupo Inmensa C.A. y CORESMALT, en la cual negó el recurso de amparo haciendo valer el recurso de nulidad; fundándose en decisiones anteriores, como las sentencias de fecha 15 de febrero de 2000 y 9 de agosto de 2000.

Posteriormente, en base a la consideración del laudo arbitral como sentencia, la Sala admitió la posibilidad de interponer acciones de amparo

constitucional contra laudos arbitrales, como sucedió en el caso C.A. Venezolana de Televisión en Sentencia de fecha 16 de octubre del año 2001, ratificada el 26 de agosto de 2003, en el caso Consorcio Barr S.A Vs. FOUR SEASONS CCAS C.A, y así sucesivamente en Sentencia N° 174 del 14 de febrero de 2006.

Sin embargo, en Sentencia N° 462 de fecha 20 de mayo de 2010, la Sala vuelve al punto, señalando que el recurso de nulidad contra el laudo arbitral conforme a la Ley de Arbitraje Comercial, brinda al interesado el control de la regularidad del laudo, y aunque si bien declaró inadmisibile un amparo contra el laudo, deja abierta la posibilidad de interponer amparos constitucionales contra laudos arbitrales si éstos se presentan como único medio de impugnación y no se ha vencido el lapso para interponer el recurso de nulidad.

El criterio actual de la Sala Constitucional sobre la cuestión planteada, y ahora con carácter vinculante; quedó establecido en Sentencia N° 1.773, caso: Van Raalte de Venezuela C.A, de fecha 30 de noviembre de 2011, en el cual se pronuncia expresamente en este sentido, y establece que el laudo arbitral puede ser objeto de amparo y de revisión constitucional, pero negando la procedencia del recurso de casación.

En lo que respecta al recurso de casación, con la excepción en materia procesal del trabajo ya comentada, tanto la doctrina como la jurisprudencia niegan su procedencia, y en el mismo sentido la citada Sentencia N° 1.773 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con carácter vinculante y la Sentencia N° 95 del 17 de febrero de 2012 caso: Hernando Díaz Candia y Bernardo Weininger, establecen que no es procedente el

recurso de casación contra los laudos arbitrales, ni contra las sentencias que resuelvan el recurso de nulidad interpuesto.

Igualmente, el foro judicial ha abierto la puerta al recurso de revisión en la citada sentencia N° 1.773, en cuyo caso; el laudo arbitral que quede definitivamente firme por no haberse ejercido el recurso de nulidad, constituye una sentencia definitivamente firme y podría ser objeto del recurso de revisión constitucional, así lo ha dejado sentado la referida jurisprudencia con carácter vinculante:

*“...Por lo tanto, sobre la base de la jurisprudencia parcialmente transcrita, es claro que no procede el recurso de casación, contra la sentencia que resuelve la pretensión de nulidad de un laudo arbitral, bien sea resolviendo el fondo o inadmitiéndolo, lo cual no obsta para la procedencia de otros medios de control jurisdiccional, que en virtud de la Constitución u otras leyes especiales, sometan cualquier decisión jurisdiccional al control de los órganos competentes que integran el Poder Judicial, tal como ocurre en caso **del amparo constitucional o la solicitud de revisión constitucional...**”* (Subrayado de la Sala).

En el ordenamiento jurídico venezolano, no existen previsiones legales que impidan ejercer los recursos contra la decisión que resuelva el recurso de nulidad contra el laudo arbitral, de modo que al tratarse de una sentencia judicial, es lógico pensar que contra la misma proceden los recursos previstos en la Ley para atacar la validez de las sentencias judiciales, y si bien el propio Tribunal Supremo de Justicia ha admitido la acción de amparo constitucional, y la solicitud de revisión contra el laudo arbitral, es deducible que procedan los mismos contra la sentencia que resuelva el recurso de nulidad.

Sin embargo, no se trata de la procedencia de la totalidad de los recursos, pues como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, en especial la referida Sentencia 1.773, Caso Van Realte de Venezuela, el recurso de casación es improcedente contra la decisión que resuelve el recurso de nulidad.

Cabe señalar, que el recurso de nulidad no es una segunda instancia si no una petición autónoma que no busca realizar observaciones al fondo del asunto resuelto mediante el laudo arbitral, y aunque si bien la casación tampoco es una nueva instancia; dado la finalidad y el carácter de celeridad del arbitraje, la misma resulta improcedente.

CAPÍTULO IV

EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL Y DE LA SENTENCIA JUDICIAL

A. Principio de la cosa juzgada.

La creación de las diversas posibilidades de control de las sentencias es producto de la evolución constitucional, legislativa y jurisprudencial; la cual se concreta en garantizar a los justiciables el derecho a obtener una decisión justa que les brinde seguridad jurídica, en torno al desarrollo de un debido proceso, que materialice la tutela judicial efectiva, como expresión del Estado de Derecho.

Para que las decisiones judiciales y los laudos arbitrales brinden seguridad jurídica, debe relevar cualquier circunstancia que genere un estado de incertidumbre con respecto a los efectos que produzcan, específicamente con la consagración de la negativa de volver a resolver sobre lo ya decidido.

En efecto, la Constitución Nacional, destaca el valor de la justicia y del derecho, al expresar:

“Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la

responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”

Se trata por consiguiente, de enmarcar la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, en el derecho; lo que conforma un sistema garante de respeto a los derechos reconocidos, basados en la seguridad jurídica; siendo necesario la estabilidad de las decisiones judiciales a través de las cuales se solventan los conflictos de intereses que evitan su perpetuidad, lo cual se logra mediante el reconocimiento de la cosa juzgada.

No significa ello el desconocimiento de los diversos remedios procesales consagrados en el ordenamiento jurídico para controlar los fallos, pues los mismos constituyen la posibilidad de dejar sin efecto una sentencia viciada, que atente contra la justicia y por ende contra la efectiva tutela judicial que el Estado garantiza en todo proceso.

En el orden de las ideas anteriores, la Constitución Nacional, dentro de las reglas del debido proceso consagra la cosa juzgada:

*“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
(....) 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.”*

Asimismo, el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 272 y 273 establece:

“Artículo 272: Ningún juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita.

Artículo 273. La sentencia definitivamente firme es ley de las partes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro”

La cosa juzgada formal encuentra su formulación en el artículo 272 citado, y está referida a la imposibilidad de impugnar el fallo al haber vencido la oportunidad establecida en la Ley a tal fin, o que habiéndose intentado los recursos procedentes, estos hayan sido declarados sin lugar.

Por su parte, la cosa juzgada material, está contemplada en el artículo 273, según el cual la sentencia definitivamente firme es Ley entre las partes, y por ende de obligatorio cumplimiento, implica la inatacabilidad del resultado mediante la instauración de un nuevo juicio.

Ello se encuentra íntimamente relacionado con el precepto legal contenido en el artículo 1.395 del Código Civil, que contempla la presunción legal de la autoridad de la cosa juzgada, la cual procede con respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia y que a su vez fija tanto los límites objetivos y subjetivos de la misma de la siguiente manera.

“.... La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que estas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior.”

Recientemente en sentencia Nº 229 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de abril de 2012, en el caso Syr Dugarte con respecto al citado artículo mencionó lo siguiente:

*“...El único aparte del artículo 1395 del Código Civil dispone que la autoridad de la cosa juzgada **no proceda sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia**. Asimismo, establece dicha norma que es necesario que la cosa demandada sea la misma, que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa, que sea entre las mismas partes y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que el anterior. De allí que, la determinación de la existencia o no de la cosa juzgada supone el examen del objeto, sujeto y causa en cada proceso, pues ello constituye presupuesto indispensable para luego determinar si existe entre ellos o no una relación lógica de identidad. Esos tres elementos deben ser examinados por el juez en un juicio y en el otro, y ese razonamiento debe constar en la sentencia por cuanto constituye el cuadro fáctico examinado por el juez y, por ende, el soporte de hecho de su conclusión respecto de la ausencia o no de la triple identidad”. (Resaltado de la Sala).*

Las normas citadas, tanto constitucionales como legales; no pueden ser interpretadas aisladamente, pues como se advirtió existen otras reglas de la misma jerarquía que consagran medios para dejar sin efecto decisiones judiciales que han alcanzado aparente firmeza, pero es en el caso en que tales medios ya no sean procedentes en los cuales entra a surtir sus plenos efectos la cosa juzgada.

Claro está, no se puede pretender que el Estado satisfaga una y otra vez el derecho de acción que ya ha sido satisfecho; pues se ve impedido por el principio non bis in eadem (no dos veces por lo mismo) que se deriva de la cosa juzgada y que se traduce en la imposibilidad jurídica de que un asunto en el cual se involucren las mismas partes y el mismo objeto pueda ser sentenciado nuevamente habiendo una decisión definitivamente firme.

La cosa juzgada ha sido bastante definida por la doctrina e interpretada desde diversos puntos de vista. González (2002, p. 466), le define como *“...la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella medios de impugnación que permitan modificarla o rectificarla”*.

Por su parte Liebman, critica la definición de cosa juzgada enmarcada en la eficacia de la sentencia, y es preciso al indicar que la cosa juzgada no trata de la imperatividad que le es natural a la sentencia, protegiendo está en la existencia formal del acto como tal, para quien la cosa juzgada tiene la función de salvaguardar el resultado práctico alcanzado con la decisión, esto es asegurar la plena efectividad e incolumidad de lo decidido, contenido que se destina a valer incondicionalmente y sin límites de tiempo. (1980, p.598).

Por lo tanto la sentencia amparada bajo la cualidad de la cosa juzgada es inmodificable y permanente, y debe conservarse en los mismos términos en los cuales fue dictada sin posibilidad de alterarla.

Y en ese mismo sentido Ortiz (2004, p. 49), define la cosa juzgada como:

“...la presunción legal de una sentencia cuya consecuencia es la inmutabilidad de su contenido e intangibilidad de sus efectos en virtud de haberse agotado contra ella todos los recursos ordinarios o extraordinarios o por haber transcurrido los lapsos para ejercerlos.”

Asimismo, Casal (2004, p. 302), sostiene que la cosa juzgada representa *“...un impedimento para la introducción de un nuevo recurso o la prosecución de un nuevo proceso en relación con el mismo litigio o caso previamente resuelto...”*, enmarca la cosa juzgada en la imposibilidad de modificar la

sentencia por haber precluido la oportunidad de hacer valer los recursos que contra ella concede la ley y la instauración de un nuevo proceso entre las mismas partes con el mismo objeto.

Para la doctrina mayoritaria, la eficacia de la cosa juzgada se resume en tres aspectos a saber: en primer lugar la inimpugnabilidad en el sentido de que la sentencia con autoridad de cosa juzgada, se encuentra resguardada por la Ley y no puede ser revisada por ningún juez ni atacada por recurso alguno. En segundo lugar la inmutabilidad, que consiste en que en ningún caso la autoridad podrá alterar o modificar el contenido del fallo, el cual es permanente e invariable, y en tercer lugar la coercibilidad que consiste en la eventualidad de ejecución forzada, mediante el uso de la fuerza pública de ser necesario.

Al respecto opina González (2002, p. 466):

“La medida de eficacia se resume en tres aspectos inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad. La noción de inimpugnabilidad se da cuando la ley impide todo ataque tendiente a obtener la revisión de la providencia (non bis in ídem). La inmutabilidad se traduce en que, en ningún caso, a petición de parte o de oficio, otra autoridad podrá alterar los términos de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que atañe al deber de abstención de los órganos del poder público. En último término, la coercibilidad consiste en que toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es susceptible de ejecución, siempre que el interesado así lo solicite.”

En concordancia con lo anterior, Díaz (2002, p. 423), completa señalando con respecto a la inmutabilidad que la misma está referida a *“la calidad que*

le asiste a la última sentencia, definitivamente agotado el debate y cerrada todas las posibilidades para el justiciable perdidoso”.

Siendo esté ultimo planteamiento de marcada importancia, por cuanto alude a la última sentencia que puede ser dictada en un proceso judicial, y siendo trasladado al plano del arbitraje; como en el mismo no opera el principio de la doble instancia, y siendo que el laudo arbitral es atacable sólo mediante el recurso de nulidad o mediante la oposición a la ejecución en caso de los laudos extranjeros, la cosa juzgada en cuanto a la inmutabilidad aplica desde que el mismo sea obligatorio para las partes involucradas.

La Sala Constitucional, en Sentencia, N° 3.214, de fecha 12 de diciembre de 2004, pronunciándose sobre la eficacia de la cosa juzgada ha expresado:

“La eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, según lo ha establecido la doctrina de este máximo tribunal en numerosas oportunidades, se traduce en tres aspectos: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos que dé la ley, inclusive el de invalidación (non bis in eadem). A ello se refiere el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil; b) inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, porque no es posible la apertura de un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada; y c) coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de ejecución de condena; esto es, ‘la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales’, se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso.”

Si bien, las posiciones doctrinarias distan en algunas particularidades, la mayoría coincide en reconocer que la cosa juzgada consagra el impedimento de interponer los recursos que afecten la validez de lo decidido, bien porque ya se han ejercido o porque ha precluido la oportunidad consagrada en la Ley.

De modo, que a los efectos del presente estudio la noción de cosa juzgada se concreta en el impedimento de que nazca un nuevo pronunciamiento en el asunto sometido a arbitraje y decidido mediante un laudo arbitral; cuyo efecto principal es la imposibilidad de impugnar el laudo arbitral definitivamente firme, revistiendo el mismo el carácter de inmutabilidad e irreversibilidad.

El laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes, y se encuentra en una posición privilegiada con respecto a la sentencia judicial ya que la sentencia judicial definitivamente firme puede ser atacada en algunos casos y por los motivos previstos en la ley mediante el recurso de invalidación, revisión o mediante la acción de amparo, cuando el proceso adolece de vicios graves y trascendentales que menoscaban la justicia; lo cual configura la relatividad de la cosa juzgada, no siendo ello posible en los laudos arbitrales para los cuales en principio sólo procede el recurso de nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley.

Así pues, al no hacer uso del recurso de nulidad o siendo intentado el mismo y declarado sin lugar, el laudo es de obligatorio cumplimiento y de ejecución inmediata, reconociéndose plenamente la estabilidad de la cosa juzgada, siendo ventajoso para el colectivo, que al hacer uso de este medio alternativo de antemano ve plasmada la garantía de seguridad jurídica en cuanto a que

el asunto decidido mediante el laudo arbitral definitivamente firme no va a ser objeto a futuro de posibles modificaciones.

El laudo arbitral comercial, adquiere plena eficacia de obligatoriedad, una vez que transcurran quince (15) días hábiles, contados a partir de su expedición. Durante este lapso, el tribunal podrá hacer ajustes al laudo, conforme lo dispone el artículo 32 de la Ley de Arbitraje Comercial. En este sentido, Caridad (2005, p. 87) opina que, luego de transcurrir esos quince (15) días hábiles, *“se produce cosa juzgada (Artículo 21 de la Ley de Arbitraje Comercial) con todos sus efectos, sin perjuicio de que pueda ser impugnado mediante el recurso de nulidad contemplado en la ley”*.

B. Ejecución Voluntaria y Ejecución Forzosa.

Dentro de la tutela judicial efectiva que sirve de fundamento al arbitraje, se encuentra inmerso el derecho a la ejecución del laudo arbitral definitivamente firme.

Los laudos arbitrales son equiparados a las sentencias judiciales, no sólo porque resuelven un conflicto sino también porque sus efectos son los mismos; es decir, una vez firmes adquieren fuerza de cosa juzgada y causan ejecutoria; poseen la misma jerarquía que las sentencias judiciales y su carácter obligatorio se legitima, por el simple hecho de que las partes voluntariamente acordaron someterse al arbitraje. Pero no todo termina con

la emisión del laudo arbitral; si bien se resuelve la controversia, pero se requiere además su ejecución para que el derecho en él reconocido no quede ilusorio.

En Venezuela, el Código de Procedimiento Civil, asimila el laudo arbitral a la sentencia (artículo 523), reconociéndole la misma fuerza ejecutoria. Sin la ejecución del laudo, el arbitraje quedaría como un simple acuerdo; y el arbitramiento sería un proceso de mediación sin efectos de cosa juzgada, pero vale como verdadero título ejecutivo del derecho en él reconocido cuya exigibilidad y cumplimiento se equipara en todas sus partes a una sentencia judicial.

Los laudos arbitrales firmes tienen la cualidad de cosa juzgada, aun cuando deban ser ejecutados ante una autoridad jurisdiccional, puesto que éstos tienen la característica de inmutabilidad; es decir, que no puede cuestionarse su eficacia jurídica.

La Ley de Arbitraje Comercial asimila el laudo arbitral a la sentencia judicial, otorgándole el efecto de la cosa juzgada formal y material y concediéndole además el valor de título de ejecución.

La ejecución es un derecho que nace del derecho subjetivo reconocido en la sentencia, y aunque si bien son diferentes; mantienen una relación de continente a contenido, donde el derecho a ejecutar se enmarca dentro del derecho reconocido en la sentencia a favor del cual se produce la ejecución.

Doctrinariamente, la ejecución coincide con las nociones de cumplimiento o realización de alguna cosa lo cual también es válido en el plano jurídico. El doctrinario Balzán (1990, p.3), comenta que la ejecución:

“...hace que el mandato general contenido en la sentencia se cumpla, ya que de otra manera se frustraría la finalidad del derecho procesal, que no es otra que la de hacer efectivo el derecho, quedando reducida la sentencia a un estudio ilusorio y platónico, con valor exclusivamente lógico y sin eficacia práctica”

Cabanellas (2000, p.141) define la ejecución de la sentencia como *“El acto de llevar a efecto lo dispuesto por un juez o tribunal en el fallo que resuelve una cuestión o litigio”*, de lo que deriva la materialización del mandato judicial contenido en la sentencia para cumplir con la finalidad del proceso en el sentido de hacer efectivo el derecho reconocido, hasta el punto que el Estado a fin de mantener vigente esa garantía puede intervenir y hacer ejecutar forzosamente el fallo.

Es importante recordar que la ejecución procede sólo con respecto a las sentencias de condena, y no en las declarativas y constitutivas en las cuales se agota la pretensión con la sentencia; lo cual se debe a que las sentencias de condena por si solas no materializan la tutela invocada por la parte a la cual favorece, siendo necesaria entonces una actividad posterior que haga efectiva esa tutela, y que es precisamente la ejecución bajo los lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico positivo.

Al respecto comenta Balzán:

“... Esta categoría de sentencias respecto de las cuales se habla propiamente de ejecución, es la llamada sentencia de condena, la cual siguiendo enseñanzas pasadas difiere de la sentencia declarativa y de la sentencia constitutiva, en que la sola sentencia de condena no realiza plenamente la tutela jurídica invocada; para la plena realización de la tutela jurídica se requiere, en la sentencia de condena de una actividad ulterior, jurídicamente y plenamente regulada, dirigida esa actividad a procurar al actor victorioso, al titular del derecho declarado en la sentencia, el bien jurídico que constituye el objeto de ese derecho declarado en el fallo. (1990, p. 5)

Una vez adquirido el carácter de firmeza del laudo, entra a la fase de ejecución, y esta puede darse voluntariamente o mediante intervención del órgano jurisdiccional que es lo que se conoce como ejecución forzosa.

Un laudo al llegar a ser emitido por el árbitro o por el panel arbitral, debe asegurarse que sea definitivo y válido en cuanto a derecho, capaz de ser sujeto a ejecución forzosa, Mogollón (2004, p.106).

Sin embargo, para verificar si un laudo es definitivamente firme, el Juez de ejecución debe revisar que el laudo fue notificado a las partes y les han otorgado las copias certificadas y firmadas de la decisión. Y en el caso del arbitramento regulado por el Código de Procedimiento Civil, el laudo arbitral debe pasarse al juez para que lo publique.

Esta obligación de los árbitros ha sido establecida en el artículo 31 Ley de Arbitraje Comercial y en la mayoría de las normas reglamentarias de los centros de arbitraje con las particularidades de cada uno, y en el caso del arbitramento regido por el Código de Procedimiento Civil. Al verificar tal condición, se abre el lapso recursivo; no obstante el laudo quedará

definitivamente firme si se ha dejado transcurrir el tiempo útil para el ejercicio de los recursos o si habiendo sido ejercidos, han sido declarados sin lugar.

Con esto, se tiene un laudo que ha generado un derecho de ejecutoria y que será ejecutado por el órgano judicial competente según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias.

El cumplimiento voluntario, se da cuando el obligado o parte perdedora, voluntaria y espontáneamente realiza la prestación consistente en dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa ordenada en la sentencia o fallo arbitral. Este cumplimiento no es propiamente jurisdiccional, ya que no interviene en ningún momento la actividad del órgano jurisdiccional, y se justifica en el sentido de que es presumible que el deudor una vez firme la sentencia no tenga dudas con respecto a la obligación claramente establecida, que con anterioridad al proceso pudo haber sido la causa del incumplimiento.

Sobre este particular enseña el maestro Couture (1978, p. 437), *“Se habla de ejecución de las obligaciones para referirse a la acción mediante la cual el deudor cumple con lo que debe, dando, haciendo u omitiendo alguna cosa. Es esta la forma voluntaria, normalmente espontánea del derecho”*.

Así pues, en este caso se trata de que la parte vencida en la sentencia cumpla con lo ordenado sin que se active la función jurisdiccional; es un cumplimiento entre las partes con ocasión de lo decidido, en la que el deudor da cumplimiento en la forma y en el plazo concedido para ello, resarcendo la

obligación a la que está constreñido y conminado por la sentencia o fallo arbitral.

El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 524 establece la ejecución voluntaria de la sentencia, a la cual debe proceder el deudor una vez dictado el decreto de ejecución, dentro del plazo fijado, que no podrá ser menor de 3 días ni mayor de 10 días, contados a partir de que conste en autos el mencionado decreto.

La Ley de Arbitraje Comercial prevé en el artículo 48 lo referente a la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, según el cual la parte favorecida por el mismo debe presentar una petición por escrito al juez de primera instancia quien deberá proceder a su ejecución forzosa.

A la citada norma le es criticable, la eliminación de la fase de ejecución voluntaria del fallo, ya que directamente remite a la ejecución forzosa, lo cual menoscaba el derecho que tiene la parte perdedora de cumplir voluntariamente con lo decidido sin necesidad de que la ejecución forzosa arremeta contra su patrimonio. Por lo que el juez a los fines de garantizar el debido proceso una vez recibida la solicitud de ejecución deberá fijar el lapso para que se verifique la ejecución voluntaria conforme lo establece el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, y una vez vencido el lapso de ley sin que la parte vencida haya dado cumplimiento voluntario es que se podrá proceder a la ejecución forzosa.

La ejecución forzosa, hace su aparición ante la negativa expresa o tácita del obligado a cumplir con lo decidido, en vista de lo cual la parte vencedora debe acudir a los órganos jurisdiccionales para que procedan

coercitivamente, pues se está en presencia de un obligado por la fuerza coercible de la sentencia, y es allí donde se hace efectivo el derecho de ejecutar lo decidido y donde juega un papel determinante la jurisdicción.

C. Órgano Competente.

La ejecución forzosa, en cuanto a los laudos arbitrales marca una diferencia con la jurisdicción ordinaria, en el sentido que a los árbitros les está vedado ejecutar lo decidido; si bien poseen un poder de decisión sobre el tema sometido a su conocimiento, allí se agota ese poder, pues la propia Ley le suprime la posibilidad de ejecutar forzosamente lo decidido, para lo cual se debe acudir a la autoridad competente.

La jurisdicción consta de dos momentos que son la cognición y la ejecución forzosa, el primero se refiere a la fase del conocimiento que hace el juez del asunto sometido a su conocimiento mediante las valoraciones de la conducta de las partes en conflicto, basado en los condicionamientos generales y abstractos establecidos en las leyes, y el segundo momento es el que se corresponde con el tema en estudio, es el de la ejecución forzosa, por la cual la jurisdicción asegura mediante la fuerza, el cumplimiento de lo decidido en la sentencia.

De ello se infiere, que los dos momentos de la jurisdicción se encuentran interrelacionados pero sujetos a la prelación del primero; es decir, una vez

verificado el proceso de cognición amparado bajo las normas del debido proceso, es que se puede acudir a la ejecución, que requiere como presupuesto el título ejecutivo, constituido por la sentencia definitivamente firme.

Y es precisamente, en la materialización de lo decidido, que los árbitros ven mermadas su facultades, pues su función se limita a decidir sobre las cuestiones transigibles sometidas a su conocimiento, motivando o no las mismas para lo cual es determinante lo acordado por las partes en el compromiso arbitral, esta es la fase del conocimiento de la jurisdicción que culmina con el laudo arbitral.

En ese mismo sentido, la limitación del tribunal arbitral a la sola cognición del asunto, obliga a la parte vencedora a buscar otros medios para que el fallo no quede ilusorio, cuando la decisión no se cumple por quien resulta obligado, y es aquí donde entra en juego el segundo momento de la jurisdicción, que es, precisamente la ejecución forzada, que sólo se lleva a efecto mediante el mandamiento de ejecución, librado por un juez competente, lo cual le está vetado a los árbitros; manifestándose así una inseparable cooperación entre ambos procesos de adjudicación, palpable en el traslado a la jurisdicción ordinaria para que ejecute el fallo recaído en la controversia sometida a arbitraje.

La ejecución del laudo arbitral corresponde al juez que hubiese conocido el asunto sometido a arbitramiento en primera instancia, y no pueden las partes en amparo a la autonomía de la voluntad de las partes convenir al respecto, por cuanto la potestad coercitiva le está reservada al Estado, siendo indelegable. Chillón y Merino (1991, p. 53), sobre el particular señalan que

“aparece una zona inalienable, inasequible a la autonomía de la voluntad, pues la ejecutoriedad de lo juzgado es función indeclinable de la jurisdicción estatal.

Esta posición se complementa con la de Marchesini, (2006, p. 4), cuando señala que:

“...el árbitro tiene “iudicium” pero no tiene “imperium” por tanto debe recurrirse al Juez que le da su fuerza coactiva que le viene de la soberanía del Estado haciendo cumplir con el uso de la fuerza de ser necesaria, lo decidido por el árbitro. El árbitro decide y el juez ejecuta sin analizar la decisión...”

Siendo así evidente, que la necesidad de auxilio por parte de la jurisdicción ordinaria al arbitraje, deviene de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico en especial de aquel que proclama que es monopolio del Estado la función coercitiva para obligar a la parte vencida en un proceso, a cumplir con lo fallado, mediante el uso de la fuerza pública de ser necesario.

Uno de los atributos de la jurisdicción es precisamente la potestad o imperium, traducido en la facultad que tienen los jueces de ejecutar lo decidido y de la cual carecen los árbitros; lo que implica que el árbitro carece de la fuerza del Estado para hacer efectivo el derecho reconocido en el laudo; pero el laudo en sí mismo no está despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegación hecha por el Estado a través de la norma jurídica, y sólo se reserva la facultad de ejecutar.

Ello confirma entonces, que el laudo con autoridad de cosa juzgada; tiene los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, por lo que indudablemente constituye título que acarrea ejecución, ante el Juez competente que debe prestar los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en el mismo.

Ahora bien, en relación a la potestad del árbitro, Hung (2001, p. 343) señala que se trata de un “... *poder –incompleto por cuanto le falta el poder de coacción– que emana de la propia ley que admite y regula la Institución arbitral y le confiere a sus decisiones (cuando quedan firmes), carácter de cosa juzgada y ejecutoriedad...*”, siendo ella una de las diferencias más notables entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria; y la justificación más evidente de la injerencia del Estado en este medio alternativo de resolución de conflictos; lo cual como se señaló, no puede ser modificado por la voluntad de las partes.

La ausencia de poderes materiales de ejecución se justifica en materia arbitral, ya que los tribunales arbitrales, por definición, están encuadrados fuera de la estructura del Estado, son parte del sistema de justicia pero no del poder judicial. Teniendo claro, en todo caso, que a quien corresponde ejecutar forzosamente en Venezuela los laudos arbitrales, nacionales o extranjeros, es al Poder Judicial venezolano pues el uso de la fuerza pública es, por ahora, monopolio del Estado y en este aspecto de ejecución, del Poder Judicial concretamente.

D. Intervención de los Tribunales Ejecutores.

Como se ha precisado, la ejecución forzosa de laudo arbitral dada su naturaleza jurisdiccional, corresponde al juez que hubiera conocido el asunto sometido a arbitraje en primera instancia.

Sin embargo, debe advertirse, que los tribunales judiciales en esa intervención deben respetar lo decidido en el laudo, en el sentido de que no pueden realizar ninguna modificación y menos una revisión del fondo del asunto en sede ejecutiva, ya que se supone que el laudo es plenamente vinculante para las partes y está amparado por el efecto de cosa juzgada.

El juez debe limitarse en la ejecución forzosa del laudo a la aplicación de los principios fundamentales que rigen dicho procedimiento, constituido por el embargo ejecutivo de los bienes de la parte vencida, el depósito de los mismos, la oposición al embargo, la suspensión de sus efectos, el justiprecio, el remate, la subasta o venta de los bienes embargados y la cancelación del precio que es la oportunidad en la cual concluye la ejecución forzosa; cuya normativa prevista en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de las sentencias se aplica en su totalidad a la ejecución del laudo arbitral.

El juez que ejecuta forzosamente el laudo arbitral, no puede obrar con libertad o a discreción; pues queda obligado a observar el procedimiento previsto en la ley, esta es otra garantía de la tutela judicial efectiva, la cual abarca no sólo la ejecución material, sino también la necesaria actuación de los tribunales ordinarios bajo el principio de colaboración, y la obligación para

los jueces de respetar el contenido de lo decidido y que la ejecución del laudo sólo pueda ser realizada e impedida bajo los medios establecidos en la ley.

En la actualidad, hay autores que se inclinan por la desjurisdiccionalización de la ejecución del laudo arbitral, en el sentido de proponer que el laudo arbitral sea ejecutado por los propios árbitros, a quienes la Ley debe atribuirles magna facultad, lo cual implicaría cambios radicales en materia de jurisdicción.

En tal sentido, Montoya (1999, p. 110) sostiene bajo esta propuesta que, *“...corresponderá en primer lugar la ejecución del laudo, en rebeldía del obligado, a los propios árbitros (...) con las facultades que ellos les hubiesen otorgado en el convenio, y sólo en su defecto se recurrirá al Juez (...) para su ejecución forzosa.*

Alternativa planteada también por Pérez y Amado, (2009, p. 59), quienes proponen:

“...se plantea la posibilidad de considerar ciertos criterios que pudieran incorporarse al convenio arbitral firmado por las partes, donde se prevea garantías para asegurar el cumplimiento del laudo, con el propósito de frenar la intervención de la jurisdicción ordinaria. Estas garantías podrían consistir en otorgar al árbitro, dentro de esa jurisdicción transitoria de la cual goza, una vez que es elegido, facultades especiales, que le permitan ejecutar el laudo y llevar adelante acciones, para conseguir que la parte obligada cumpla con el mismo...”

Esta posición actualmente no encuentra asidero en el derecho venezolano, ni en los diversos ordenamientos jurídicos; por cuanto el ordenamiento jurídico positivo, la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria; niegan a los árbitros el poder coactivo para proceder a la ejecución forzada del laudo arbitral, siendo tal actividad monopolizada por el Estado y reservada a los órganos jurisdiccionales competentes; como expresión de la jurisdicción y en despliegue del ius imperium.

Puede resultar descabellada la idea a la luz de las instituciones jurídicas tradicionales, pero la sociedad con innumerables prácticas expuestas al cambio va dejando entrever exigencias que el legislador debe evaluar y considerar para la elaboración de las normas, exigencias que al encuadrarse como supuestos de hecho activan una determinada consecuencia jurídica

Pero ello, no implica desechar de plano esta propuesta, por ser novedosa y atrevida en pro del arbitraje; y en aras de la celeridad del proceso arbitral que se perfila como medio idóneo para resolver conflictos intersubjetivos, que lejos de invadir la esfera del poder del Estado, es más bien una opción para desjudicializar un gran número de controversias sometidas en la mayoría de los casos a engorrosos procedimientos.

Claro está, conceder semejantes facultades a los árbitros requiere de un estudio profundo y meticuloso, sopesando las posibles ventajas y desventajas que se pudiesen presentar y asumiendo grandes riesgos que pueden soslayar los derechos de los justiciables, para lo cual; aunado al aseguramiento de las garantías mínimas por las cuales la seguridad jurídica de las partes no se vea amenazada, y que en todo momento la justicia sea reflejada, es indispensable implementar diversas modificaciones en el

ordenamiento jurídico, tanto nivel constitucional como legal; lo cual en la actualidad resulta casi imposible en Venezuela y en los demás ordenamientos jurídicos, quedando esta posición al estudio de los doctenarios.

CONCLUSIONES.

En Venezuela, la ejecución del laudo arbitral se rige por las normas generales previstas para el procedimiento ordinario, regido por el Código de Procedimiento Civil; ya que existen algunas similitudes con la ejecución de la sentencia especialmente en materia de ejecución forzosa, sin embargo; la ejecución del laudo en sentido amplio, no se restringe al hecho de la materialización de lo decidido, ya que presenta algunos aspectos que imponen características particulares.

En efecto, esas particularidades que diferencian al laudo de la sentencia judicial con ocasión de la ejecución del mismo; están referidas a la ejecución de los laudos extranjeros y a la aplicación de los tratados vigentes en la materia, a la limitación de los recursos procedentes y, a la ejecución forzosa de los laudos arbitrales en el sentido de que los árbitros carecen de imperio para ejecutar lo decidido, siendo necesario el auxilio de la jurisdicción ordinaria.

El laudo arbitral nacional o extranjero, es producto de un acuerdo previo o cláusula arbitral por el que una controversia se somete a arbitraje, que es lo que justifica su legitimidad, es una expresión del principio de autonomía de la voluntad, que excluye la injerencia del Estado. Ahora bien, al llegar a la etapa de ejecución la no injerencia del Estado va quedando de lado siendo necesaria su cooperación, en el sentido del ejercicio del ius imperio que le ha sido conferido; de modo que corresponde al estado a través de los órganos

jurisdiccionales conocer de los recursos contra el laudo, así como proceder a la ejecución forzosa de lo decidido

Con fundamento en el contenido de cada uno de los capítulos que integran el presente trabajo de investigación sobre la ejecución del laudo arbitral en Venezuela, se presentan a continuación las conclusiones por las cuales se evidencia el alcance de los objetivos planteados.

1. En Venezuela el arbitraje se encuentra fundamentado en la Constitución Nacional en el artículo 258 como medio alternativo de resolución de conflictos; según el cual la ley debe promoverlo en su labor de creación de leyes, formando parte del sistema de justicia del Estado, por lo que las decisiones de los árbitros, no sólo apuntan a la resolución de los conflictos; sino que cumple sus funciones en atención a la justicia, como valor superior del ordenamiento jurídico, a tenor de lo establecido en el artículo 2 y 253 eiusdem y, de la misma manera, el instrumento fundamental para la realización de la Justicia y por lo tanto para su administración es el proceso, como expresamente se establece en el citado artículo 257.

Asimismo, el legislador patrio a los fines de dar cumplimiento a la obligación de promover el arbitraje, en su labor legislativa ha dotado al ordenamiento jurídico venezolano de un conjunto de leyes que permiten a las partes resolver sus controversias mediante el arbitraje; leyes que en su mayoría sólo limitan a reconocer esta figura, sin establecer reglas de procedimiento aplicables a su desarrollo en caso de que las partes omitan convenir en su regulación, observándose igualmente que en materia de ejecución del laudo arbitral sólo proscriben el laudo como de obligatorio cumplimiento, siendo realmente escasas las normas dictadas al efecto, de modo que se recurre a

las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de las sentencias.

Con referencia a lo anterior, las leyes internas que regulan el arbitraje en Venezuela son: El Código de Procedimiento Civil, La Ley Sobre el Derecho de Autor, la Ley de Arbitraje Comercial, la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y su Reglamento, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, La Ley de la Actividad Aseguradora y el Reglamento de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.

En efecto, las leyes mencionadas, se limitan a reconocer el arbitraje como medio idóneo para resolver controversias, siendo necesaria la unificación y sistematización de la legislación vigente, para armonizarla con la Carta Magna y darle así un trato acorde a la institución arbitral y en el caso específico al laudo arbitral con el espíritu del artículo 258 constitucional, mediante la sistematización de las diversas y dispersas reglas contenidas en las leyes.

En relación con los laudos extranjeros, rige en Venezuela un conjunto de tratados internacionales, que a diferencia de las leyes internas sí contienen algunas normas en materia de ejecución de laudos, en especial normas relativas a su reconocimiento y ejecución como si se tratase de una sentencia nacional, tal es el caso de la Convención de Nueva York y la

Convención de Panamá, a la cual se le suman la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros que complementa a la Convención de Panamá.

Los referidos tratados, además de imponer como obligación a los Estados miembros la obligación de reconocer los laudos arbitrales constituyen una garantía preconstituida que impone seguridad jurídica para la ejecución de la decisión arbitral.

2. El exequátur es el medio judicial para hacer posible que fallos dictados en un estado extranjero tengan fuerza ejecutiva en otro, es un procedimiento independiente y autónomo del juicio previo que resolvió el asunto de fondo, en el cual se revisa si la sentencia extranjera cumple o no con ciertos requisitos previstos en la ley; cuya competencia para conocerlo corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, salvo en los casos de fallos extranjeros que recaigan en los asuntos de naturaleza no contenciosa para los cuales la competencia está atribuida a los Tribunales Superiores en lo Civil.

Los requisitos que deben ser verificados en el laudo arbitral extranjero o internacional, son los previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que son los mismos requisitos previstos en los tratados vigentes y que constituyen las garantías mínimas que amparan la legalidad de los referidos laudos, que presupone su ejecución en un Estado de Derecho y de Justicia; los cuales reflejan como ventaja la no exigencia del requisito de reciprocidad para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y la eliminación del requisito de orden público internacional sustantivo.

En Venezuela, rige el sistema de aceptación del laudo arbitral extranjero previo cumplimiento de los requisitos mencionados, verificados mediante el exequátur, que bajo la influencia de la Convención de Nueva York y la de Panamá, impide la revisión del fondo, sin embargo; a favor de los laudos arbitrales comerciales extranjeros se configura la excepción; es decir, existe un procedimiento breve y sumario para su reconocimiento sin requerir exequátur, conforme al artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial, para lo cual sólo basta una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia que hubiere conocido del asunto sometido a arbitraje.

3. Contra los laudos arbitrales extranjeros sólo procede la oposición a su ejecución por los motivos expresamente previstos, y contra los laudos nacionales procede el recurso de nulidad como regla general; pero dependiendo de las leyes que regulen el arbitraje el sistema de recursos puede variar.

En caso del arbitramiento regulado por el Código de Procedimiento Civil, procede el recurso de apelación contra los laudos dictados en arbitrajes de derecho si las partes así lo acuerdan. Si se trata de un arbitraje al cual le es aplicable la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el recurso de nulidad no es procedente, pero procede el recurso de casación, aunque los motivos de procedencia son muy similares a los exigidos para el recurso de nulidad y, en caso del arbitraje regido por el Código Orgánico Tributario, procede el recurso de apelación cuando el laudo sea dictado sin el acuerdo unánime de los árbitros; lo que conlleva a concluir que el arbitraje tributario en un simple proceso contencioso de primera instancia, ya que de ser procedente la apelación se sustituye la decisión por el nuevo pronunciamiento que se dicte.

Asimismo, en Venezuela la jurisprudencia ha reconocido la procedencia de otros recursos para atacar el laudo arbitral y aunque había sido vacilante en la materia, el criterio actual de la Sala Constitucional con carácter vinculante; quedó establecido en Sentencia N° 1.773, caso: Van Raalte de Venezuela C.A, de fecha 30 de noviembre de 2011, en el cual la Sala se pronuncia expresamente en este sentido, y establece que el laudo arbitral puede ser objeto de amparo y de revisión constitucional, pero negando la procedencia del recurso de casación, salvo el caso previsto en la Ley adjetiva laboral.

Estas excepciones a la regla general, atentan contra la naturaleza del arbitraje, que es concebido como un proceso sin recursos y en ese orden debería ser tratado por el legislador y la jurisprudencia, quien ha modificado la institución arbitral haciéndola más engorrosa y menos célere, lo cual trae como consecuencia la escasa recurrencia de los particulares a estos tipos de arbitraje, al quedar entredicha la certeza de la estabilidad de las decisiones que ya no están sometidas sólo al recurso de nulidad; lo que enerva la posibilidad de su ejecución, demostrándose que el arbitraje en materia de recursos esta aparejándose al proceso ordinario, perdiendo su esencia.

4. La ejecución del laudo arbitral es muy semejante a la ejecución de la sentencia judicial, a los laudos les está reconocido los efectos de la cosa juzgada tanto material como formal, y su ejecución es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva; sin embargo, existe una diferencia esencial entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria, en el sentido de que a los árbitros les está vedado ejecutar lo decidido por cuanto carecen de imperio para ello, siendo necesario acudir al auxilio la jurisdicción ordinaria.

Los laudos arbitrales son susceptibles de ejecución voluntaria, y a la parte que resulte vencida le está garantizado ese derecho; sin embargo, en materia de ludos arbitrales comerciales la ley especial en la materia una vez firme el laudo remite a la ejecución forzosa, menoscabándose el derecho que tiene la parte perdidosa de cumplir voluntariamente con lo decidido, por lo que el juez en garantía del debido proceso, una vez recibida la solicitud de ejecución; deberá fijar el lapso para que se verifique la ejecución voluntaria conforme lo establece el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil.

Ante la negativa de cumplimiento voluntario, procede la ejecución forzosa, ante los tribunales ordinarios, cuya competencia corresponde al juez que hubiese conocido el asunto sometido a arbitraje en primera instancia, debiendo observar el procedimiento previsto en la Ley, respetando el contenido de lo decidido, que debe preservarse íntegramente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Abreu, A. y Mejía L. (2000). ***La casación civil***. Caracas: Alva.
- Balzán, J. (1990). ***De la ejecución de la sentencia, de los juicios ejecutivos, de los Procedimientos Especiales Contenciosos***. Caracas: Móvil-Libros.
- Baumesiter, A. (1999). ***Algunas consideraciones sobre el procedimiento aplicable en los casos de arbitrajes regidos por la Ley de Arbitraje Comercial***. Ponencia presentada en “Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial”. Académica de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas.
- Bello, H. y Jiménez. D. (2009). ***Tutela judicial efectiva y otras garantías constitucionales procesales***. Caracas: Ediciones Paredes.
- Borjas, A. (1979). ***Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano***. (5ª. ed.). Tomo 5. Caracas: Librería Piñango.
- Bóveda, M. (2005). El Arbitraje Tributario en el Derecho Venezolano. ***Revista de Derecho Tributario / Asociación Venezolana de Derecho Tributario***, (105), 291-307.
- Brewer, A. (2005). Algunos comentarios a la Ley de Promoción y Protección de Inversiones: Contratos públicos y jurisdicción. En: ***Arbitraje comercial interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas***. Serie Eventos (18), 279-288. Caracas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
- Cabanellas G. (2000). ***Diccionario jurídico elemental***. Actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. (14ª. ed.). Buenos Aires: Heliasta.
- Caivano, R. (2000). ***Arbitraje***. Buenos Aires: Ad-Hoc.
- Caridad, M. (2005). Consideraciones críticas de la institución arbitral en la

Ley de Arbitraje Comercial Venezolana II. ***Lex Nova, Revista del Colegio de Abogados del Estado Zulia***. (245). 71-99.

Carocca, A. (1998). ***Garantía Constitucional de la Defensa Procesal***. Barcelona: J.M. Bosch.

Casal, J. (2004). Cosa Juzgada y efecto vinculante en la justicia constitucional. ***Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano***. (10ª.ed.). Tomo 1. 299-325.

Chillón, J., y Merino, J. (1991). ***Tratado de Arbitraje Privado Interno e Internacional***. (5ª. ed.). Madrid: Civitas.

Código Civil de la República de Venezuela. (1982). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 2990 (Extraordinaria), julio 26, 1982.

Código de Procedimiento Civil de la República de Venezuela. (1990). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 4.209 (Extraordinaria), septiembre 18, 1990.

Código Orgánico Tributario de la República Bolivariana de Venezuela. (2001). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 37.305, octubre 17, 2001.

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. (1934). [On-line]. Consultado el 25 de junio de 2012. Disponible en: <http://www.ciac-iacac.org/arbitrajeinternacional>

Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. (1857). Consultado el 29 de mayo de 2012. Disponible en: <http://venciclopedia.com/index.php>.

Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. (1858). Consultado el 29 de mayo de 2012. Disponible en: <http://constituciones1857-1858.blogspot.com>.

Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). ***Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela***, 5.453 (Extraordinaria), marzo 24, 2000.

Constitución Nacional de la República de Venezuela. (1961). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 662 (Extraordinaria), enero 23, 1961.

Couture, E. (1978). **Fundamentos de Derecho Procesal Civil**. Buenos Aires: Depalma.

Cuenca, H. (1980). **Curso de casación civil**. (3ª. ed.). Caracas. Ediciones de la Biblioteca.

Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas. (1999). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 5.382 (Extraordinaria), septiembre 28, 1999.

Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones. (1999). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 5.382 (Extraordinaria), octubre 22, 1999.

Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. (2001). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 37.285, septiembre 18, 2001.

Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. (1999). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 36.793, septiembre 23, 1999.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. (2012). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 6076 (Extraordinaria), mayo 7, 2012.

Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones. (1999). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 5.394 (Extraordinaria), octubre 25, 2000.

Díaz, G. (2002). Acción autónoma de nulidad de la sentencia firme. Fundamento para su aplicación. **Revista de las XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal**. 423-433. Montevideo: Cultura Universitaria.

De Maekelt, T. (1999). **Arbitraje comercial internacional en el sistema venezolano**. Ponencia presentada en "Seminario sobre la Ley de Arbitraje comercial". Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas.

(2002). **Ley Venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres años de su vigencia**. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

De Maekelt, T., y Madrid, C. (2003). *Al rescate del arbitraje en Venezuela. En El Derecho Privado y Procesal en Venezuela. En: Libro Homenaje a Gustavo Planchart Manrique*. T. II. Caracas: Tinoco, Planchart & Núñez Asociados, Universidad Católica Andrés Bello.

Gabaldón, F. (1987). *El arbitraje en el Código de Procedimiento Civil*. Caracas. Paredes Editores.

_____ (1999). *Análisis a la Ley de Arbitraje Comercial*. Caracas: Livrosca.

_____ (2002). *Algunos temas en torno a la Ley de Arbitraje Comercial. Estudios de Derecho Procesal Civil. Colección Libros homenaje*, 6, 361-408. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia.

Gamboa, R. (2005). Arbitramento. Ubicación y Recursos. *Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe*. [Revista en línea], 110. Consultado el 28 de Mayo de 2012 en: <http://redalyc.uaemex.mx>

González, C. (2002). Cosa juzgada y cosa juzgada fraudulenta. *Revista de las XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal*. 465-474. Montevideo: Cultura Universitaria.

Gonzales, J. (1985). *El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva*. (2ª.ed.). Madrid: Civitas.

Guerra, D. (2001). *Derecho Internacional Privado*. (9ª. ed.). Caracas: Kelran Editores.

Henríquez, R. (2000). *El Arbitraje Comercial en Venezuela*. Caracas: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas.

Hernández, E. (2005). Protección de Inversiones en Venezuela Inversiones Extranjeras. *Revista de Derecho del comercio internacional y actualidades*. (3), 270-284.

Herrera, L. (1960). *Estudios sobre Derecho Internacional Privado y otros temas conexos*. Caracas: El cojo.

Hung, F. (2001). *Principios Orientadores del Arbitraje en la Ley de Arbitraje Comercial y los Recursos Contra el Laudo Arbitral*. Ponencia presentada en las XXVI Jornadas “J.M. Domínguez Escobar: Los medios

alternativos de resolución de conflictos. (2ª. ed.). 101-156. Barquisimeto: Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara.

_____. (2001). ***Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano***. Caracas: Jurídica Venezolana.

Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. (1958). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela*** 4.832 (Extraordinaria), diciembre 29, 1994.

Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. (1986). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 4.634 (Extraordinaria), septiembre 22, 1993.

Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (1975). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 33.170, febrero 22, 1985.

Ley Aprobatoria de la Convención sobre Derecho Internacional Privado. (1928). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 33.170, abril 9, 1932.

Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros (1979). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 33.144, enero 15, 1985.

Ley de Arbitraje Comercial. (1998). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 36.430, abril 7, 1998.

Ley de Derecho Internacional Privado. (1998). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 36.511, agosto 6, 1998.

Ley de la Actividad Aseguradora. (2010). ***Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela***, 5.990 (Extraordinaria), julio 29, 2010.

Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales. (1988). ***Gaceta Oficial de la República de Venezuela***, 34.060 (Extraordinaria), septiembre 27, 1988.

Ley Orgánica de Hidrocarburos. (2006). ***Gaceta Oficial de la República***

- Bolivariana de Venezuela**, 38.493, agosto 4, 2006.
- Ley Orgánica de Telecomunicaciones. (2000). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 36.970, junio 12, 2002.
- Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. (2010). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 39.483, agosto 9, 2010.
- Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (2002). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 37.504, agosto 13, 2002.
- Ley sobre el Derecho de Autor. (1993). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 4.638 (Extraordinaria), octubre 1º, 1993.
- Liebman, E. (1980). **Manual de Derecho Procesal Civil** (Trad. Santis S.). Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa- América. (Original en italiano, 1980)
- Longo, P. (2004). **Arbitraje y Sistema Constitucional de Justicia**. Caracas: Frónesis.
- Mantellini, P (1986). **El arbitramento y el Arbitraje Comercial**. Conferencia dictada en: "Seminario organizado, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela sobre el Código de Procedimiento Civil de 1986". Consultado el 28-05-2012. Disponible en: <http://www.msinfo.info/default/acienpol/bases/biblo/texto/boletin/1986>.
- Marchesini, G. (2006). Las medidas cautelares en el proceso arbitral. *Revista Iberoamérica de Arbitraje y Mediación*. [Revista en línea], 10 de mayo de 2006. Consultado el: 15 de mayo de 2012 en: www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/medidascautelares.html.
- Marlon M., y Sara Navarro. **El arbitraje en el proceso laboral**. Consultado el: 11 de junio de 2012. Disponible en: www.aje.com.ve/publicaciones.htm.
- Mezgravis, A. (1999). El amparo constitucional y el arbitraje. **Revista de Derecho Administrativo**, (6). 255-278.
- _____. (2008). **El orden público sustantivo, el orden público procesal y la arbitrabilidad como causales de denegación del laudo: Especial referencia a Venezuela y otros países de América Latina**. III

Congreso Internacional de Arbitraje: la Convención de NY 50 años después. Club Español del Arbitraje. Consultado el 10 de junio de 2012. Disponible en: www.mezgravis.com/El-orden-pub-vf-rev-07-08.pdf.

_____ (1999). **Recursos contra el laudo arbitral comercial**. Ponencia presentada en: "Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial". Academia Ciencias Políticas y Sociales, Caracas.

Mogollón, I. (2004). **El Arbitraje Comercial Venezolano**. Caracas: Vadell Hermano Editores.

Montoya, U. (1999). El futuro del arbitraje comercial. Visión general. **Revista de Derecho Mercantil**, (20-21), 97-115.

Morales, L. (2011). **Venezuela en el contexto del arbitraje**. Jurisprudencia de la Sala Constitucional y laudos arbitrales internacionales relevantes. Fundación Gaceta Forense del Tribunal Supremo de Justicia, Serie Normativa Nº 10. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia.

Ortiz, R. (2004). Constitución proceso y fraude procesal. **Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia**, (13), 41-82.

Pérez, N., y Amado L. (2009). Una alternativa no judicial para la ejecución del laudo arbitral en Venezuela. **Revista Commercium et Tributum, Universidad Rafael Bellosso Chacín**. [Revista en línea], 2. Consultado en fecha 6 de julio de 2012, disponible en <http://www.urbe.edu/publicaciones/commercium>.

Pérez, S. (2008). Arbitraje tributario: recorrido procesal. **Revista de Ciencias Jurídicas, Universidad Rafael Urdaneta. Cuestiones Jurídicas**. 2 (2), 11-29.

Pesci, M. (2006). **La Constitución y el Proceso**. Caracas: Jurídica Venezolana.

Pico I Junoy; J. (1997). **Las Garantías Constitucionales del Proceso**. Barcelona: J.M. Bosch.

Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. (2000). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 5.471 (Extraordinaria), junio 5, 2000.

Reglamento interno de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. (2011). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 39.813, diciembre 5, 2011.

Rivera, R. (2006). **Los recursos procesales**. (2ª. ed.). San Cristóbal: Jurídica Santana.

Rondón H. (2010). El consentimiento del Estado para el arbitraje en el CIADI. En: **Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales**, (148), 329-377.

Saghy, P., y Tejera V. (2010). Arbitraje comercial y casación civil. **Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteavila / Universidad Monteavila, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas**, (9), 245-266.

Sánchez, A. (2001). **Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos**. Caracas: Paredes Editores.

Sánchez, A. (2008). **Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos**. (2ª. ed.). Caracas: Ediciones Paredes.

Sanquiz, S. (2005). **El derecho aplicable al arbitraje comercial internacional en el derecho venezolano**. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Sarmiento, C. (1999). **Ley de Arbitraje Comercial**. Caracas: Livrosca.

Tejera, V. (2008). Arbitraje de Inversiones. El Caso de Venezuela. **Revista de la Cámara Venezolana Americana de Industria y Comercio**, (297), 146-151.

Torrealba, H. (2001). **Consideraciones sobre el Arbitraje Comercial en Venezuela**. Caracas: Baker & McKenzie.

Tribunal Supremo de Justicia. (2000). [On-line]. Disponible en:
<http://www.tsj.gob.ve/jurisprudencia>